



Universidad  
Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos  
Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”  
Curso académico 2016-2017

*Trabajo de Fin de Máster*

**“La situación de vulnerabilidad de las mujeres y de las personas  
negras ante la actuación de los cuerpos policiales de Brasil: una  
aproximación desde la formación en derechos humanos”**

Juliana Rosa Gonçalves Mota

Tutora  
Silvina Ribotta

Getafe, mayo de 2017.

*Palabras clave:* vulnerabilidad; pobreza; mujeres; personas negras; violencia; cuerpos policiales de Brasil; formación en derechos humanos

*Resumen:* Este trabajo analiza el marco teórico de la vulnerabilidad desde un enfoque de derechos humanos y su concepción socioestructural centrándose en los grupos sociales formados por mujeres y personas negras, teniendo en cuenta la especial situación de las mujeres negras. A partir de la comprensión de la vulnerabilidad como estado construido socialmente y la existencia de causas que la agravan, como la pobreza, el género y la “raza”, el trabajo examina la relación de los cuerpos policiales estatales de Brasil con los grupos en referencia, señalando como sus prácticas pueden agravar y profundizar dicho estado y conservar sistemas de opresión y discriminación hacia esos colectivos. La formación en derechos humanos desde la perspectiva de la vulnerabilidad socioestructural se presenta como una posibilidad para cambiar ese cuadro y perfeccionar la enseñanza a los nuevos miembros de las instituciones policiales.



Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons  
**Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada**

## SUMARIO

<b>CONSIDERACIONES PRELIMINARES.....</b>	<b>2</b>
1. Motivaciones y objetivos de la investigación.....	2
2. Estructura de la investigación.....	5
3. Aclaraciones terminológicas y conceptuales.....	6
<b>CAPÍTULO 1. EL MARCO TEÓRICO DE LA VULNERABILIDAD .....</b>	<b>13</b>
1.1 Sobre el concepto de vulnerabilidad: la vulnerabilidad socioestructural .....	23
1.2 Vulnerabilidad y Derecho.....	29
1.3 Vulnerabilidad y discriminación .....	36
1.3.1 La pobreza como condición agravante de la vulnerabilidad .....	43
1.3.2 El sistema sexo/género como condición agravante de la vulnerabilidad .....	47
1.3.3 La etnia como condición agravante de la vulnerabilidad .....	52
<b>CAPÍTULO 2. MUJERES Y PERSONAS NEGRAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS CUERPOS POLICIALES EN BRASIL .....</b>	<b>56</b>
2.1 “Direitos humanos para humanos direitos”: la construcción de una jerarquía de titulares de derechos .....	60
2.2 La situación de vulnerabilidad de las mujeres.....	70
2.3 La situación de vulnerabilidad de las personas negras .....	84
<b>CAPÍTULO 3. EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS A LOS CUERPOS POLICIALES BRASILEÑOS ADOPTANDO LA PERSPECTIVA DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD .....</b>	<b>104</b>
3.1 La formación en derechos humanos para los cuerpos de policía brasileños .....	106
3.2 La formación en derechos humanos en la Academia de Policía Civil del Estado de São Paulo .....	121
3.3 Perspectivas de enseñanza policial a partir de los grupos en situación de vulnerabilidad .....	127
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>134</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>139</b>
<b>ANEXO 1.....</b>	<b>149</b>
<b>ANEXO 2.....</b>	<b>150</b>

## **CONSIDERACIONES PRELIMINARES**

### **1. Motivaciones y objetivos de la investigación**

Esta investigación se centra en el análisis de la relación entre los cuerpos policiales estatales de Brasil y los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente de mujeres y personas negras, a partir de dos ejes fundamentales: cómo es la actuación policial con respecto a dichos grupos y cuál es la formación en derechos humanos que sus miembros reciben antes de empezar a ejercer sus funciones. Frente a la significativa discrepancia entre el modelo jurídico de protección y garantía de los derechos y la actuación de los cuerpos de policía brasileños, los mencionados colectivos pueden vivir situaciones de mayor vulnerabilidad y presentar mayor dificultad para el acceso y ejercicio de sus derechos, así como mayor posibilidad de que estos sean violados y de que toda la construcción de su realidad social sea más violenta.

Una de las posibilidades para la construcción de cambios en prácticas policiales disonantes con el marco de los derechos humanos es la formación crítica con base en la reflexión teórica y empírica sobre los grupos en situación de vulnerabilidad. Y, aunque, la asignatura “Derechos Humanos” ya forma parte del contenido impartido en las academias de policía de Brasil, la enseñanza no está diseñada desde la perspectiva de las personas que no coinciden con la idea tradicional de titularidad de los derechos o que por sus características y condiciones sociales asociadas al modo como está configurada la sociedad ocupan lugares físicos y simbólicos de desventaja en múltiples dimensiones de sus vidas.

Es importante puntualizar que los estudios y debates críticos sobre los colectivos en situación de vulnerabilidad dentro de las prácticas y enseñanza policiales en Brasil son escasos y cuando existen son producidos específicamente a partir de un determinado grupo, sin previa reflexión teórica sobre los motivos y el significado de la vulnerabilidad o sobre las causas estructurales, sociales, políticas, económica y culturales que las alimentan. Igualmente, no hay un marco general que trate la vulnerabilidad como condición personal asociada a las características sociales considerando el ejercicio de la función policial y, tampoco, estudios sobre el papel que juega la policía en el mantenimiento de la vulnerabilidad y discriminación que sufre una parte significativa de la población.

En este sentido, como ocurre en escenarios reales, los grupos en situación de vulnerabilidad tienen poca visibilidad en la formación del personal policial. Dicho de otra manera, lo que se enseña en la asignatura “Derechos Humanos” para la futura aplicación práctica sigue estando vinculado a la noción teórica tradicional de derechos humanos y a la idea de un determinado tipo de sujeto de derechos. De ahí, la visión excluyente y alejada de la diversidad determinará el proceso formativo y la manera cómo las y los profesionales de seguridad pública se enfrentarán a situaciones que demandan la consideración de la vulnerabilidad como elemento que marca la diferencia en las experiencias vitales de ciertas personas y grupos.

Lo que se pretende, por ende, es analizar desde un punto de vista crítico y reflexivo el enfoque excesivamente teórico, poco práctico y nada crítico dado a la asignatura; el impacto de la actual formación en las prácticas policiales sobre los mencionados grupos y de qué manera eso influye en su estado de vulnerabilidad. Asimismo, con base en el marco teórico de la vulnerabilidad, se pretende desarrollar argumentos para una nueva forma de plantear la formación en derechos humanos de los cuerpos de seguridad, teniendo en cuenta titulares reales, con características y necesidades específicas y situados en contextos sociocultural y económicamente determinados.

A fin de que se delimite de modo más preciso el objeto de estudio, sin perder de vista la necesidad de reflexionar sobre el estado de vulnerabilidad de los diversos grupos sociales que conforman la sociedad brasileña de forma general, para esta investigación, específicamente, fueron elegidos dos de ellos: el de las mujeres y el de las personas negras. Es importante puntualizar que más que las diferencias internas dentro de los grupos y la inmensa diversidad que hay entre las personas que los conforman, lo que interesa en este trabajo es abordar, específicamente, como el género y la “raza” son factores que aumentan la vulnerabilidad desde la articulación entre esas y otras categorías, como la pobreza. En relación con la comunidad negra, cabe destacar que, aunque la idea central es trabajar su estado de vulnerabilidad desde una perspectiva general, no se puede ignorar la acentuada desigualdad y procesos específicos que vulneran a las mujeres negras, multiplicando el daño, la exclusión y la discriminación que sufren, y por ello su particular situación también será considerada.

Importa recalcar en este punto que la elección por tales colectivos no fue aleatoria: además de corresponder a la mitad de la población de Brasil en términos absolutos, los múltiples desafíos a que ambos grupos se enfrentan para la efectiva realización de sus derechos y cómo la vulnerabilidad se manifiesta en los contextos policiales con respecto a las personas que los componen ofrecen importantes herramientas para formular nuevos planteamientos sobre la labor policial. Asimismo, sus historias se vinculan a los principales procesos que fundamentaron la construcción de Brasil como nación y son clave para comprender la vulnerabilidad y discriminación estructurales profundamente arraigadas en la sociedad. Como categoría transversal que también agrava el estado de vulnerabilidad, la condición socioeconómica juega un papel decisivo en esta dinámica y debe ser considerada cuando se investiga las relaciones sociales brasileñas y, por tal razón, la pobreza será una de las categorías examinadas en este trabajo.

Finalmente, un aspecto relevante en esta investigación y que merece ser destacado, pues sitúa el debate teórico y empírico que será realizado, es el lugar que ocupa esta investigadora cuando examina y produce el discurso acerca de la compleja relación entre derechos humanos y cuerpos de policía brasileños. La posición de análisis y de enunciación parte no solo del ejercicio como investigadora, sino también de la experiencia profesional como integrante de uno de los cuerpos de policía de Brasil, la Policía Civil del Estado de São Paulo, y como profesora de la academia de policía de dicha institución. Es importante aclarar esa posición, pues gran parte de los estudios sobre seguridad pública y, especialmente, sobre las prácticas policiales en Brasil son producidos por personas ajenas a las instituciones, sobre todo desde el campo de las Ciencias Sociales, y, si bien aportan análisis y críticas positivas, muchas veces no llegan al conocimiento de los actores involucrados. Asimismo, reunir estudios teóricos y prácticos elaborados por personas que pertenecen a esa realidad puede contribuir a enriquecer el debate, aumentar las posibilidades de llevar a cabo nuevas formas de enseñanza impartidas en las academias de policía brasileñas y también repensar la interacción entre seguridad pública, cuerpos policiales, derechos humanos y ciudadanía.

## 2. Estructura de la investigación

La vulnerabilidad puede ciertamente plantearse desde distintas perspectivas, por lo que resulta imprescindible delimitar previamente el enfoque que será dado en esta investigación y fijar una línea de trabajo que permita alcanzar los objetivos que fueron expuestos en el punto anterior. De tal modo, el primer capítulo establecerá un marco teórico de la vulnerabilidad, fijando la atención en el enfoque de derechos humanos. Para eso, se partirá de la noción de vulnerabilidad socioestructural para reflexionar sobre la posición de desventaja social, jurídica y económica, entre otras, a que se enfrenta determinados grupos sociales. Desde ahí, será examinada la relación entre vulnerabilidad y Derecho y cómo la tradicional idea de titularidad de los derechos afecta su acceso y ejercicio real. Además, se expondrá brevemente otra posibilidad de abordar la vulnerabilidad, a partir del Derecho Internacional Humanitario, remarcando sus similitudes con el enfoque adoptado en este trabajo. Manejar la vulnerabilidad como una construcción socioestructural conlleva abordar la discriminación y la dinámica que se produce entre ellas y por ello se dedicará un apartado propio al tema, detallándose también como ciertas condiciones, como la pobreza, el sistema sexo/género y la etnia intensifican ese estado y agravan otras condiciones de vulnerabilidad sufridas.

El segundo capítulo expondrá, inicialmente, la desigualdad que vive Brasil y que lo coloca en la relación de los países más desigualitarios del mundo a partir de los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante, PNUD). La lectura de las desigualdades brasileñas en sus múltiples facetas por medio de cifras servirá como un instrumento orientador para comprender el escenario en que se encuentran los grupos en situación de vulnerabilidad en el país y que también se reproduce en la relación con los cuerpos policiales, en particular los estatales. Permite, igualmente, comprender cómo se construye una jerarquía de ciudadanía en que, a las personas que les fue asignado el nivel más bajo, los derechos no tienen el mismo valor. Asimismo, el eje central de dicho capítulo será el examen del estado de vulnerabilidad de grupos sociales específicos – mujeres y personas negras–, en un escenario situado –Brasil– y un contexto determinado –prácticas policiales–. Para ello, serán analizados casos concretos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de los cuerpos policiales brasileños y también construcciones lingüísticas acerca de los derechos humanos y seguridad pública

que están presentes en el imaginario colectivo y retratan como el asunto es interpretado por la sociedad.

El tercer y último capítulo estará centrado en la formación en derechos humanos de los cuerpos policiales estatales de Brasil, siempre mirando hacia la perspectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad elegidos. En primer lugar, describiendo el proceso de implementación de la formación en derechos humanos en Brasil de los profesionales del área de seguridad pública y examinando los documentos que fueron elaborados por el Estado brasileño para la concreción de esa forma de enseñanza y que sirven de referencia para los centros de formación policial de los estados. En segundo lugar, se examinará, concretamente, dos programas de la asignatura “Derechos Humanos” de la Academia de Policía Civil del Estado de São Paulo, el actual y su anterior, comparándolos y sacando conclusiones a partir del marco teórico establecido en el capítulo 1, el escenario desmenuzado en el capítulo 2 y los documentos gubernamentales comentados en el primer apartado del capítulo 3. Asimismo, dicho capítulo, en su último punto, se ve completado por una reflexión sobre buenas prácticas que pueden ser desarrolladas en materia de derechos humanos, el lugar que ocupa dicha formación en el currículo técnico-profesional de los nuevos miembros y otras perspectivas de enseñanza basadas en el estudio de la vulnerabilidad socioestructural para aplicación al servicio policial.

### **3. Aclaraciones terminológicas y conceptuales**

Como punto de partida, es necesario aclarar y delimitar el ámbito de cierta terminología y conceptos que serán utilizados en el desarrollo de este trabajo, puesto que algunos de ellos tienen múltiples significados e implicaciones y no todos plenamente en consonancia con el marco de derechos humanos que orienta esta investigación. La preocupación en aclarar el lenguaje empleado se justifica pues, como centro de toda la actividad humana, a partir de su uso se conforman las estructuras sociales que caracterizarán campos de conocimiento, pensamientos, sociedades e interacciones entre

sus miembros<sup>1</sup> y, dentro de ese universo, es un instrumento relevante para comprender cómo se construyen las injusticias y las luchas que se emprenden contra ella<sup>2</sup>.

El primer aspecto concierne a la mención a los cuerpos policiales, pues la forma como está dispuesto el conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad de un Estado y cuáles son sus atribuciones cambian de acuerdo con su organización política y territorial. En Brasil, la actividad de seguridad pública es realizada por distintos cuerpos, divididos conforme las finalidades constitucionales que les fueron atribuidas y criterios territoriales (artículo 144 de la Constitución Federal). Son los siguientes: Policía Federal, Policía de las Carreteras, Policía de Ferrocarriles, Policías Civiles y Policías Militares y Bomberos Militares. Los tres primeros cuerpos están afiliados a las autoridades federales y los dos últimos subordinados a sus respectivos gobiernos estatales. La actividad policial mencionada en esta investigación estará centrada en las Policías Civiles y Militares, que son los cuerpos de seguridad de cada unidad federal de Brasil (llamadas estados). Ambos cuerpos son los que están más cercanos a la población tanto físicamente como en razón de sus atribuciones y por ello son los que suelen representar la idea de “policía” y todas las implicaciones positivas y negativas presentes en el imaginario social. Para la referencia a dichas instituciones serán utilizadas como sinónimos expresiones del campo semántico vinculado a la actividad policial, como fuerzas policiales, cuerpos de seguridad, cuerpos de policía, entre otras, sin hacer distinciones conceptuales entre ellas. A lo largo de esta investigación, la mención a la policía y todas las expresiones derivadas se harán referencia a las dos instituciones y, en caso sea necesario especificar una u otra, serán empleadas las expresiones “Policía Civil” o “Policía Militar”. Sus atribuciones y particularidades serán desmenuzadas en el momento apropiado.

El segundo aspecto se refiere a la relación entre género y lengua y cómo la diferencia sexual se manifiesta en esta dinámica y refuerza desigualdades. En los estudios de derechos humanos, el uso del lenguaje, en especial en cuanto a los términos, expresiones y género gramatical es un importante instrumento para analizar cómo determinado tema es abordado, sobre todo cuando se mencionan a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Las estrategias lingüísticas empleadas en la relación entre

---

<sup>1</sup> LÓPEZ VALERO, Amando y ENCABO FERNÁNDEZ, Eduardo, *Lenguaje, cultura y discriminación: la equidad comunicativa entre géneros*, Mágina, Granada, 2008, pág. 26.

<sup>2</sup> VAN DIJK, Teun A., “El estudio del discurso” en VAN DIJK, Teun A. (comp.), *El discurso como estructura y proceso*, Gedisa, Barcelona, 2001, pág. 21 a 65, pág. 50.



particulares, en la prensa, en documentos oficiales y en trabajos científicos señalan que el uso del lenguaje puede ser intencional, parcial, excluyente y discriminatorio, como suele ocurrir cuando se habla de las mujeres. De ahí, el uso del lenguaje no tiene solo un carácter comunicativo y neutral, sino también ideológico e intencional, pues en situaciones concretas puede reforzar prejuicios y estereotipos en razón del sexo, género, orientación sexual, etnia u otras características distintivas de los seres humanos. Nombrar, por tanto, pasa a ser más que una actividad lingüística y se convierte en un acto de dominio<sup>3</sup>. Además de impactar en la propia autopercepción de las y los integrantes de ciertos grupos, el uso no inclusivo del lenguaje anula la representatividad de dichas personas y contribuye a hacer invisible la lucha por el reconocimiento y concreción de sus derechos, ya que si no son mencionadas son olvidadas y no ocupan espacio en el mundo. Ser sujeto en el lenguaje, de tal modo, tiene doble sentido: como productor de un discurso como herramienta de intervención social y como forma de reconocimiento como sujeto social, responsable y agente en sí mismo<sup>4</sup>.

El uso excluyente y discriminatorio del lenguaje con respecto a las mujeres se manifiesta por su uso androcéntrico –que “se identifica por el lugar de la enunciación (el cuerpo del hombre), la perspectiva desde la que se habla (la mente del varón), la mirada (masculina) que se adopta”<sup>5</sup>–; sexista –es decir, el masculino con valor genérico y género no marcado, designando a mujeres y a hombres de la misma forma y, por consecuencia, la anulación del femenino<sup>6</sup>– y machista –en que palabras iguales tienen distintos significados dependiendo de la referencia al femenino o al masculino–. En cuanto al último aspecto, conviene subrayar que de todas formas, en comparación con el masculino,

---

<sup>3</sup> SEVILLA MERINO, Julia, “Representación y lenguaje” en MONTESINOS SÁNCHEZ, María Nieves y ESQUEMBRE VALDÉS, María del Mar (coords.), *Feminismo/s*, Universidad de Alicante, Alicante, n.º 12, 2008, pág. 55 a 78, pág. 55.

<sup>4</sup> BENGOCHEA BARTOLOMÉ, Mercedes, “El lenguaje jurídico no sexista, principio fundamental del lenguaje jurídico modernizado del siglo XXI”, *Anuario de la Facultad de Derecho*, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, n.º 4, 2011, pág. 15 a 26, pág. 20.

<sup>5</sup> BENGOCHEA BARTOLOMÉ, Mercedes, “Lo femenino en la lengua sociedad, cambio, y resistencia normativa. Estado de la cuestión”, *Lenguaje y textos*, Universidad de Jaén, Jaén, n.º 27, julio 2008, pág. 37 a 68, pág. 38.

<sup>6</sup> Según aclara Costa Perez, en la lengua española el género masculino tiene dos usos posibles, que dependerán únicamente del contexto. La primera forma es la restrictiva, utilizada para designar a los individuos de sexo masculino y la segunda es la genérica, que designará a las personas de ambos sexos (COSTA PEREZ, Ana, *Buenas prácticas para el tratamiento del lenguaje en igualdad*, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2016, pág. 9).

el femenino siempre tendrá un valor peyorativo, ofensivo y de menor valor<sup>7</sup>. De hecho, como se viene señalando, todos los procedimientos descritos refuerzan la posición de subordinación a que las mujeres son sometidas, sitúan a los hombres en el lugar de protagonistas, mantienen estereotipos y recalcan el poder, incluso en el ámbito de la escrita, como manifestación exclusiva del masculino. Por los argumentos expuestos y para mantener la coherencia entre el objeto de estudio y los propósitos pretendidos en este trabajo, el lenguaje será utilizado de modo equitativo e inclusivo, observando estrategias que consideren el femenino y el masculino, sustantivos genéricos o colectivos, perífrasis e, igualmente, el empleo de términos que mejor se ajusten a un uso no sexista<sup>8</sup>.

Otra aclaración conceptual altamente relevante exige el concepto de etnia y “raza” y su vinculación a variantes como discriminación racial, rasgos fenotípicos, color de la piel, negritud, comunidad afrodescendiente y personas negras, aclarando algunas cuestiones previas sobre el uso de estas palabras y las discusiones teóricas y políticas con respecto a la aplicación y empleo de un término u otro<sup>9</sup>. Es importante puntualizar que son conceptos que no tienen una noción homogénea, al contrario, poseen matices de significados múltiples y cambian de acuerdo con quien ocupa el protagonismo del

---

<sup>7</sup> Como ejemplo, se puede mencionar las referencias a una persona temperamental, desinhibida y obediente. Las mujeres serían histéricas, desvergonzadas y dóciles; los hombres, exaltados, espontáneos y débiles, respectivamente (BANUS, Lucia y GARRA, María Martina, “Recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito de la administración de justicia”, *Cartapacio de Derecho*, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, vol. 30, 2016, pág. 1 a 30, pág. 8-9).

<sup>8</sup> Pese a que en esta investigación no se utilizará el femenino universal para referentes de ambos los sexos, es importante señalar otra posibilidad para la construcción de un lenguaje más inclusivo, que tenga en cuenta la diversidad en el campo lingüístico. Acerca del tema y de otros fenómenos verbales, como el uso del asterisco, de la “x” o de la arroba para sustituir el binarismo femenino/masculino, consúltese BENGOCHEA BARTOLOMÉ, Mercedes, “Cuerpos hablados, cuerpos negados y el fascinante devenir del género gramatical”, *Bulletin of Hispanic Studies*, Liverpool University Press, Liverpool, vol. 92, n.º 1, 2015, pág. 1 a 23.

<sup>9</sup> Acerca de la discusión teórica sobre “raza” y etnia, véase FERNÁNDEZ BUEY, Francisco, “Del encuentro entre las culturas” en *Ética y filosofía política*, Bellaterra, Barcelona, 2000, pág. 117 a 152; LAMUS CANAVATE, Doris, “Raza y etnia, sexo y género: El significado de la diferencia y el poder”, *Reflexión Política*, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, vol. 14, n.º 27, 2012, pág. 68 a 84; AMARAL FILHO, Nemezio, “Para além do conceito de “raça””, *IC Revista Científica de Informação y Comunicación*, Universidad de Sevilla, Sevilla, n.º 3, 2006, pág. 105 a 123 (especialmente sobre el debate del tema en Brasil) y BELLO, Alvaro y RANGEL, Marta, *Etnicidad, “raza” y equidad en América Latina y el Caribe*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, 2000 (en particular, págs. 4 a 10). Sobre racismo, consúltese QUEIROZ, Clara, “Eugenesia y racismo” en CAMBRÓN, Ascensión (coord.), *Entre el nacer y el morir*, trad. de Carlos Lema Añón, Comares, Granada, 1998, pág. 95 a 116, y GLASS, Ronald D., “Entendendo raça e racismo: por uma educação racialmente crítica e antirracista”, *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vol. 93, n.º 235, Brasília, 2012, pág. 883 a 913.

discurso, así como con los contextos y las finalidades que se les emplean. Y todos tienen, por supuesto, una gran carga ideológica.

En este sentido, la propia referencia a quiénes serían las personas negras y qué significa esa atribución también implica profundas discusiones cuando se analiza sus experiencias a partir de la contraposición con otros grupos de personas. Por tal motivo, es importante establecer los límites de empleo de los términos en esta investigación, teniendo en cuenta la importancia y la necesidad en definir y nombrar de algún modo el grupo de personas que por ciertos rasgos fenotípicos combinados con las dinámicas socioestructurales, particularmente la discriminación racial, se encuentran más vulnerabilizadas que otras. Tanto “raza” como etnia son constructos sociales y categorías históricas que siempre estuvieron separadas por una línea poco nítida, como es posible verificar en numerosos trabajos científicos, textos legislativos y documentos internacionales que las mencionan en conjunto (etnia/“raza”) o las utilizan como términos que tienen un mismo valor en la lectura e interpretación. Asimismo, están vinculadas a las particularidades de cada región o país, la diversidad interna de su población y sus procesos histórico, identitario y cultural y se “modifican, conforme a los contextos de cada época y el tipo de relaciones que se construyen, sociales, económicas o políticas, en relación también con el conocimiento institucionalizado y las prácticas elaboradas acerca de ‘los otros’”<sup>10</sup>.

El debate sobre la utilización del término “raza”, especialmente en el campo de la Antropología y de las Ciencias Sociales, es complejo y plantea posicionamientos divergentes por su validez o no, excediendo los objetivos de este trabajo. Igualmente, su sentido puede cambiar de acuerdo con cada idioma, siendo aceptable en términos descriptivos o claramente asumiendo una carga peyorativa y discriminatoria. Sin embargo, cabe puntualizar cinco aspectos:

1) Es una manera de calificar a “los otros”, a la “otra cultura”, a quienes tienen lenguas, hábitos, costumbres, características y rasgos fenotípicos distintos de quién así lo

---

<sup>10</sup> LAMUS CANAVATE, Doris, “Raza y etnia, sexo y género: El significado de la diferencia y el poder”, citado, pág. 71.

clasifica desde su posición<sup>11</sup>. Y, desde este lugar, también surgen juicios de valor sobre una supuesta superioridad en relación con el otro grupo;

2) Uno de los fundamentos esenciales de esa discusión por un lado reside en considerarla una forma de mantener un discurso racista y segregador, remarcando la diferencia entre características y atributos físicos como un elemento negativo, movido para planteamientos que defienden la superioridad de un grupo de personas sobre otras. Además, es un término no solo biológica sino políticamente incorrecto<sup>12</sup>. También hay otra perspectiva en que es manejada como un término positivo y donde su adopción se fundamenta en el uso como categoría política para reivindicación de derechos, estrategia de resistencia y elemento aglutinador entre las personas que comparten ciertos trazos identitarios o rasgos fenotípicos, recalcando el hecho real de que existen desigualdades injustas entre las personas que tienen por origen sus características físicas o ascendencia;

3) La distinción, en rasgos generales, elaborada históricamente consiste en distinguir “raza” y etnia definiendo la primera como la que incide en factores genéticos, biológicos y fenotípicos, como el color de la piel, la estructura corporal, el tipo de cabello y la forma de la nariz y de la boca, y la segunda en referencia a aspectos de tipo cultural relativos a determinados pueblos o grupos sociales, como la nacionalidad, la religión, la lengua y las tradiciones<sup>13</sup>;

4) Gran parte de la normativa europea e internacional sobre discriminación se refiere a la “raza” o se denomina “discriminación racial”, pero también contempla la etnia entre sus supuestos<sup>14</sup>. Lo mismo hace mucha normativa interna, especialmente constitucional, de distintos países, como Brasil y España, especialmente debido a que en los años de promulgación de dichos textos legales no se hacía el correctivo conceptual de etnia/“raza”.

---

<sup>11</sup> FERNÁNDEZ BUEY, Francisco, “Del encuentro entre las culturas”, citado, pág. 128.

<sup>12</sup> QUEIROZ, Clara, “Eugenesia y racismo”, citado, pág. 99-102.

<sup>13</sup> LAMUS CANAVATE, Doris, “Raza y etnia, sexo y género: El significado de la diferencia y el poder”, citado, pág. 72.

<sup>14</sup> Como ejemplo: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

5) El uso normalizado, y no por ello exento de crítica, que se hace de la palabra “raza” en algunos escenarios sociales como el estadounidense y que impregna parte de las referencias bibliográficas acerca del tema. La “raza” en Estados Unidos sigue siendo un criterio de utilización política, tanto de autoubicación como de heteroatribución en la estratificación social. Asimismo, es utilizada en el discurso, en la normativa y en la academia<sup>15</sup>.

Frente a la controversia entre los términos, en esta investigación se optó por el uso de la palabra etnia para la referencia a la problemática en rasgos generales y, desde una perspectiva crítica del concepto, la palabra “raza” entrecomillada para la cuestión específica vinculada a la negritud o cuando sea mencionada por las autoras o autores en citas textuales o indirectas. Para llegar a esa posición se consideró el uso en los textos internacionales de derechos humanos, la bibliografía de este trabajo y su empleo por las feministas negras que fueron referencia para abordar la interseccionalidad presente en la vida de las mujeres negras. Asimismo, serán utilizados vocablos y expresiones como personas negras, afrodescendientes, comunidad negra y negritud para designar el universo semántico relacionado con ese colectivo. Es relevante subrayar que no se consideró, por tanto, el uso del término en su anticuado sentido científico, biológico y discriminatorio, sino simbólico, como de constructo histórico y social, en que la utilización de características fenotípicas de los seres humanos fundamentó y sigue fundamentando privilegios y relaciones sociales de dominación y de desigualdad, así como la distribución de las personas en rangos, lugares y roles que se materializan en estatus sociales inferiores, peores condiciones de vida, de trabajo, educativas y de trato que conforman un conjunto de experiencias comunes y recurrentes para integrantes del grupo aquí tratado.

---

<sup>15</sup> Como ejemplo, véase DAVIS, Angela, *Mulheres, raça e classe*, trad. Heci Regina Candiani, Boitempo, São Paulo, 2016; los dos artículos de CRENSHAW, Kimberlé, “Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics”, *University of Chicago Legal Forum*, Universidad de Chicago, Chicago, 1989, pág. 139 a 167 y “Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color”, *Stanford Law Review*, Universidad Stanford, Stanford, vol. 43, n.º 6, 1991, pág. 1241 a 1299 y HOOKS, bell, *Ain't I a Woman: black women and feminism*, Pluto Press, London, 1982. Las referencias a bell hooks en este trabajo serán en minúsculas respetando el modo por el cual la propia autora se identifica.

## CAPÍTULO 1. EL MARCO TEÓRICO DE LA VULNERABILIDAD

El estudio de la vulnerabilidad, sus causas y efectos puede ser realizado en diversas disciplinas y a partir de distintos enfoques, siempre teniendo en cuenta los propósitos de su aplicación, los actores involucrados y los contextos de su incidencia. Por ello, es importante subrayar desde el inicio cuál será el sentido utilizado en esta investigación con respecto a su comprensión y alcance. En líneas generales, pues el tema será profundizado más adelante, la vulnerabilidad puede tener dos niveles, de acuerdo con lo que explica Ribotta<sup>16</sup>. El primero se refiere a la vulnerabilidad natural, esto es, como calidad biológica y permanente de la vida compartida por todos los seres vivos. A su vez, el segundo nivel, el que interesa para esta investigación, es el que se vincula a los derechos, los derechos humanos y la justicia, definido por la vulnerabilidad socioestructural. Desde ahí, el entorno social, político, económico, jurídico o cultural en que las personas o grupos están situados predispone o crea determinadas estructuras o condiciones que pueden alterar, dañar o vulnerar la vida.

De acuerdo con los objetivos de esta investigación, en especial el que pretende reflexionar sobre prácticas concretas de determinados sujetos –y arraigadas en instituciones públicas– y plantear perspectivas para modificarlas, el examen de la vulnerabilidad socioestructural servirá de base para lo que será desarrollado en el capítulo 2. Y así lo es, pues desde este nivel, al contrario del carácter incontestable y permanente del primero, es posible pensar en formas de influir en la realidad social y alterar situaciones de vulnerabilidades concretas, que impactan de forma distinta, siempre más injustas, en la vida de las personas de acuerdo con la pertenencia a un grupo social u otro. Al abordar la vulnerabilidad desde ese nivel no se pueden olvidar las críticas que cuestionan si, de hecho, este sería un criterio operativo y útil para el análisis de las desigualdades que existen en la sociedad. Desde tales indagaciones, la vulnerabilidad podría estigmatizar, estereotipar y desempoderar a las personas y grupos así considerados, separándolos y distinguiéndolos de forma negativa de otros grupos que conforman el

---

<sup>16</sup> RIBOTTA, Silvina, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia”, *Revista Electrónica Iberoamericana (REIB)*, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, vol. 6, n.º 2, 2012, pág. 1 a 37, pág. 7-8.

escenario social<sup>17</sup>. Otra cuestión vinculada a esa problemática es la que se refiere a ellos como sujetos de políticas paternalistas y, por tal motivo, hasta qué punto la determinación como vulnerables podría, efectivamente, contribuir al cambio de la situación en que sus miembros se encuentran y al desarrollo de sus propias autonomías y capacidades personales<sup>18</sup>. Por último, hay que mencionar la cuestión del propio concepto de vulnerabilidad, es decir, aunque sea un término ampliamente utilizado, en muchos estudios ya se parte de un punto en que parece estar totalmente comprendido y asentado, tratándose de abordar, directamente, ciertos grupos como si la característica de vulnerable les fuera inherente, sin antes llevar a cabo una reflexión real sobre qué es, qué significa “estar” vulnerable y cuáles son sus efectos y matices. No obstante la pertinencia de las críticas para profundizar el debate, la mirada desde la vulnerabilidad y sus efectos como se pretende demostrar en este trabajo es una potente herramienta para comprender la realidad a partir de distintas perspectivas, puesto que enfatiza la visión integral del modo cómo se comportan el Estado y los particulares en relación con ciertos colectivos, así como una lectura más realista del derecho<sup>19</sup>. Esto, a su vez, permite identificar posibilidades para mejorar la vida de las personas que los componen, potencia el carácter transformador de los derechos humanos y enriquece el modo de abordar el tema, pues aporta nuevos elementos y puntos de vista.

En este trabajo, la mirada se volverá hacia la vulnerabilidad en cuanto al goce y ejercicio de los derechos, pues, desde tal punto de vista, es posible reconocer grupos que se encuentran en situación más vulnerable, es decir, de desfavorecimiento, frente a otros del cuerpo social. Personas que “están” vulnerables no como rasgo identitario ni como producto de su responsabilidad individual, sino como consecuencia de las reglas sociales, políticas, jurídicas, culturales y económicas del mundo en el que viven y, si así lo es, la responsabilidad no individual, sino colectiva, tanto social como política<sup>20</sup>. De lo comentado, resulta que abordar la vulnerabilidad como un estado de ser o de estar no se

---

<sup>17</sup> MORONDO TARAMUNDI, Dolores, “¿Un nuevo paradigma para la igualdad? La vulnerabilidad entre condición humana y situación de indefensión”, *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, Universidad de Valencia, Valencia, n.º 34, 2016, pág. 205 a 221, pág. 207.

<sup>18</sup> *Idem*, pág. 210.

<sup>19</sup> GUIÑAZÚ, Claudio E., “Pobreza, vulnerabilidad y derechos humanos”, en AA. VV., *Lecturas sobre los derechos sociales, la igualdad y la justicia*, Advocatus, Córdoba, 2010, pág. 103 a 122, pág. 106-107.

<sup>20</sup> RIBOTTA, Silvina, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia”, citado, pág. 7 y 14.

resume solamente a un juego de palabras, sino demuestra su fuerte componente social, que enmarca el espacio asignado a cada persona en la sociedad, sus condiciones de desarrollo y la experiencia con el conjunto de normas que conforman el sistema de protección y garantía de los derechos. Es importante observar que aunque el énfasis sea en los derechos, analizar la vulnerabilidad desde la perspectiva planteada supone tener en cuenta todo lo que circunda su comprensión, e, igualmente, qué significa y cómo se da, efectivamente, la fruición de los derechos por parte de mujeres, hombres, niñas y niños y eso, a su vez, reclama comprender dimensiones concretas, como el escenario social en que se sitúan, sus características personales y la existencia de grupos que comparten las mismas dificultades en semejantes o distintos grados por causas ajenas a su voluntad.

De tal manera, analizar la situación de vulnerabilidad de las personas considerando sus experiencias en cuanto sujetos de derechos y, especialmente, desde el enfoque de los derechos humanos, implica seguir una línea argumentativa que no se restringe a aspectos jurídicos, sino también engloba una serie de componentes y reflexiones que se originan en la observación crítica de las dinámicas y contextos sociales en que están situadas y cómo eso afecta de forma negativa el libre desarrollo de sus personalidades, muchas veces estableciendo un espacio simbólico que no pueden traspasar. En este espacio de posibilidades restrictivas y muchas veces determinadas antes del nacimiento desde el punto de vista teórico-formal los derechos son reconocidos y encuentran protección en los Ordenamientos jurídicos vigentes. Por otro lado, en términos prácticos y desde la realidad no se configuran de tal manera cuando la vulnerabilidad ya ha producido daño o menoscabo en su ejercicio. El desajuste que se construye establece dimensiones en que el acceso a las posibilidades concretas al desarrollo de los planes de vida de cada persona será permitido o prohibido a partir de la existencia de ciertas condiciones reales, donde el hecho de “estar” vulnerable juega un papel imprescindible en determinar de qué manera será esa relación.

De acuerdo con esta perspectiva dinámica y concreta, basada en las estructuras sociales, no se puede comprender la vulnerabilidad como algo singular y uniforme, por el contrario, son múltiples vulnerabilidades, con dimensiones y manifestaciones particulares según la combinación de circunstancias socioestructurales y características personales. De ahí la importancia en situar la vulnerabilidad de forma relacional con los procesos sociales e, igualmente, con los estudios de derechos humanos, otorgando a las



personas y grupos que son afectados por ella visibilidad y protagonismo no solo en cuanto a la reivindicación para la realización de sus derechos, sino también, y principalmente, como sujetos que deben ocupar, de hecho, el espacio social y jurídico en las mismas condiciones que otras personas y colectividades. En este sentido, el estudio de la vulnerabilidad posibilita comprender de forma detallada y profunda la situación de los grupos más desfavorecidos en términos generales y como resultado permite llegar a un criterio de justicia más efectivo, que también les tenga en cuenta, pues el análisis desde esta perspectiva parte de la constatación de la negación (de recursos, de derechos, sanitarias, educativas, por ejemplo), pasa por la indagación del porqué de la existencia de desigualdades que les ponen en situación de vulnerabilidad y se vuelve hacia la formulación de respuestas para la construcción de marcos de referencia que permitan a todas y a todos una vida humana digna.

Para alcanzar ese criterio de justicia es imprescindible tener presente una igualdad que contemple la diferencia, pues el hecho innegable de la diversidad humana asociado a una determinada comprensión del mundo excluyente sigue generando estados vulnerables y tratamientos desigualitarios y discriminatorios tanto por parte del Estado y sus representantes, de forma más o menos evidente, como en distintos ámbitos de la vida humana, como el jurídico, el económico, el social, el educativo y el laboral. De hecho, la igualdad desde la diversidad va más allá de la ausencia de discriminación no justificada, pues también se conecta al igual disfrute de los derechos reconocidos por un Ordenamiento jurídico por todas las personas, correspondiendo, por ende, a una igualdad en derechos<sup>21</sup>.

Sobre la diversidad, importa recalcar que no se debe confundir con la desigualdad o, tampoco, contraponerlas simétricamente, de forma que no hay una relación equivalente entre ellas<sup>22</sup>. La diversidad, situada en el plano descriptivo, se vincula a la diferencia y es resultado de una situación de hecho que tiene su origen en la naturaleza, en nuestra esencial condición de seres humanos. La desigualdad, a su vez, es resultado de la forma como están organizados los recursos y bienes y de las posiciones sociales que derivan de ellos, de modo que esa manera de organización se plasma en la vida de las personas y

---

<sup>21</sup> BOBBIO, Norberto, *Igualdad y libertad*, trad. de Pedro Aragón Rincón, Paidós, Barcelona, 1993, pág. 75-76.

<sup>22</sup> DE LUCAS, Javier, “La igualdad ante la ley” en GARZÓN VALDÉS, Ernesto y LAPORTA, Francisco, J. (eds.), *El derecho y la Justicia*, Trotta, Madrid, pág. 493 a 500.

determina cuál es el espacio que les fue asignado<sup>23</sup>. Ese modo de organización conlleva un sistema en que “cuanto mayor es la desigualdad (...), mayor será la concentración e intensidad de los problemas que experimenta la gente que está ubicada en los niveles más bajos de la estructura social”<sup>24</sup>, lo que subraya también la relación entre la condición socioeconómica y la vulnerabilidad, que será examinada posteriormente.

Desde esta perspectiva y en complemento a la idea que se está desarrollando, cabe enfatizar que “las diferencias no deben ser relevantes a los fines de la justicia, salvo en aquellos aspectos que puedan beneficiarnos”<sup>25</sup>. El referente de la igualdad que tiene espacio en el marco de la vulnerabilidad, por tanto, es aquel que se vincula a una igualdad que haga posible la diferencia y proteja la diversidad, que no la constituya como obstáculo, sino como oportunidad<sup>26</sup>. En esta línea, es importante puntualizar que la protección de la diversidad no solo se concreta por medio de instrumentos jurídicos, sino también, y principalmente, por la adopción de perspectivas incluyentes en términos generales, que consideren la diversidad y las diferentes herramientas para dar más efectividad a la igualdad como criterio de justicia y no al contrario.

Otro importante punto previo al análisis de la vulnerabilidad desde lo propuesto en esta investigación es su doble impacto: en el plano individual, con referencia a cada persona particularmente afectada, y en el plano colectivo, especialmente con respecto a determinados grupos. Si, por un lado, la diversidad es una de las características del género humano, por otro, los individuos comparten ciertas características o condiciones, formando grupos que se fundamentan en criterios como etnia, sexo, género, orientación sexual, edad, idioma, religión, nacimiento o posición económica, discapacidad, condición de migrante o desplazado por motivos económicos, políticos o sociales, en privación de libertad o cualquier otro trazo o condición que sea determinante para establecer relaciones de identidad y de pertenencia a una colectividad<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> RIBOTTA, Silvina, “Pobreza, hambre y justicia en América Latina y el Caribe. Debatiendo sobre la justicia mientras 53 millones de latinoamericanos sufren hambre”, *Revista Electrónica Iberoamericana (REIB)*, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, vol. 4, n.º 1, 2010, pág. 144 a 180, pág. 155.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> *Idem*, pág. 154.

<sup>26</sup> DE LUCAS, Javier, “La igualdad ante la ley”, citado, pág. 497.

<sup>27</sup> RIBOTTA, Silvina, “Grupos vulnerables” en DÍAZ BARRADO, Cástor y SALVADOR, Ana Manero (coords.), *Glosario de términos útiles para el análisis y estudio del Espacio Iberoamericano de*

La afirmación de que la vulnerabilidad impacta en el plano colectivo lleva a reflexionar si los grupos serían simplemente una reunión de personas por los motivos mencionados arriba o si tendrían otras características esenciales que les distinguirían de otros grupos. A partir de los planteamientos de Young y su definición de grupo social<sup>28</sup> es posible concluir que tan importante cuanto las características y condiciones comunes son las experiencias presentes e históricas por las cuales pasan y pasaron sus integrantes para el establecimiento de un vínculo entre ellos. De tal manera, el sentido de identidad en cuanto a atributos, condiciones, narraciones colectivas compartidas y experiencias vividas situará a cada ser humano en un determinado grupo y por tal motivo la autoidentificación y el contexto de interacción social son aspectos fundamentales cuando se propone cualquier cuestión sobre un grupo social. Desde esta perspectiva, hay determinados grupos sociales que, además de lo que fue mencionado, tienen un componente que consiste en la sujeción a una o más condiciones manejadas por la autora, como la explotación, la marginación, la carencia de poder, el imperialismo cultural y la violencia<sup>29</sup>. A esos grupos, particularmente, se les agrega el adjetivo *oprimido* y las condiciones que los caracterizan conforman lo que Young denomina “las cinco caras de la opresión”<sup>30</sup>. A partir de esa fundamentación teórica, se construye la distinción entre grupos sociales y grupos sociales oprimidos, en que la desventaja, la injusticia y la existencia de impedimentos sistemáticos a lo largo de su historia son marcas constitutivas de los últimos.

Giménez Glück, a partir del derecho comparado y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, formula ciertos parámetros para que los colectivos que no se encuentran entre los expresamente enumerados en el artículo 14 de la Constitución Española sean objeto de aplicación de un juicio de igualdad y, por tanto, de especial

---

*Cooperación e Integración: Comercio, Cultura y Desarrollo*, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 278 a 282, pág. 279-280.

<sup>28</sup> Según la autora, un grupo social es “un colectivo de personas que se diferencia de al menos otro grupo a través de formas culturales, prácticas o modos de vida. Los miembros de un grupo tienen afinidades específicas debido a sus experiencias o forma de vida similares, lo cual los lleva a asociarse entre sí más que con aquellas otras personas que no se identifican con el grupo o que lo hacen de otro modo” (YOUNG, Iris Marion, “Las cinco caras de la opresión” en *La justicia y la política de la diferencia*, Princeton, trad. de Silvina Álvarez, Ediciones Cátedra, Madrid, 2000, pág. 71 a 113, pág. 77).

<sup>29</sup> *Idem*, pág. 84.

<sup>30</sup> Hablar de opresión es hablar también de vulnerabilidad y discriminación y de cómo están profundamente relacionadas, razón por la cual el tema será desarrollado con detalles más adelante. En este momento, la finalidad es centrarse en el análisis de los grupos sociales.

protección, con fundamento en la cláusula abierta de “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” presente en el mencionado artículo<sup>31</sup>. No obstante situarse en el ámbito del derecho constitucional español, los parámetros propuestos por el autor pueden ser trasladados al campo de análisis de los grupos desde la perspectiva aquí adoptada y, de tal forma, ofrecer otras herramientas para su calificación.

El autor explica que los elementos que otorgan a un grupo la protección especial son: a) compartir un rasgo común de identificación como grupo, no importando si voluntario, involuntario, mutable o inmutable, sino su carácter fundamental para la dignidad humana, a lo cual no se puede renunciar. En este sentido, lo relevante es que tal rasgo sea el motivo por el cual el grupo haya padecido una historia de discriminación, de marginación del proceso político de toma de decisiones y se haya enfrentado a una serie de prejuicios sociales; b) que esa historia de discriminación sea tanto en términos sociales cuanto jurídicos y c) la existencia de prejuicios sociales negativos contra esos grupos, susceptibles de ser reforzados con la diferenciación normativa, que disminuyen la posibilidad de defensa de sus intereses en el proceso político que condujo a la creación de la norma en cuestión. Sobre ese parámetro, hay que considerar tanto la situación social de desigualdad material producida en función de lo que fue comentado cuanto la existencia, aun en la actualidad, de una visión infravalorada por parte de la sociedad con respecto al grupo y sus características<sup>32</sup>.

Hay que mencionar, además, la percepción social hacia las personas que conforman el grupo, que no se refiere solamente a la discriminación, y su relación en términos generales con la sociedad a la que pertenecen. Los criterios desarrollados por el autor se refieren a causas que generan la discriminación y, aunque de modo implícito, apuntan al mayor estado de vulnerabilidad que puede incidir sobre los grupos. Finalmente, hay que señalar que en el caso del presente trabajo, como se verá más adelante, los colectivos formados por las mujeres y las personas negras cumplen con todos los parámetros presentados y aunque se produjeron importantes avances sociales y

---

<sup>31</sup> GIMÉNEZ GLÜCK, David, *Juicio de igualdad y Tribunal Constitucional*, Bosch, Barcelona, 2004, pág. 229-230. Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

<sup>32</sup> *Idem*, pág. 230-236.

legislativos con relación a ellos, es cierto que sus miembros todavía encuentran dificultades para el libre desarrollo de sus trayectorias individuales.

Planteada la cuestión en estos términos, se puede afirmar que los trazos, condiciones e identidades comunes se desdoblan en dos aspectos: si, por un lado, reúnen a personas y hacen que los grupos se tornen reconocibles como tal, distinguiéndolos de los demás en el conjunto de la sociedad, por otro, componen la dinámica que genera estados vulnerables. Desde esta relación, surge otra posibilidad de mirar a estos grupos, atribuyéndoles la expresión “en situación de vulnerabilidad”, lo que significa afirmar que en razón de los procesos estructurales descritos por Young dichos grupos se encuentran en especial situación de desventaja. Subrayar ese carácter y adoptar la mencionada expresión en lugar de “grupos vulnerables” expresa el compromiso con el lenguaje de los derechos humanos puesto de manifiesto al inicio de este trabajo y remarca el hecho de que la vulnerabilidad es un concepto contextual –pues las personas que están en esta posición viven en un escenario social y cultural específicos y bajo un determinado Ordenamiento jurídico–; relacional –teniendo en cuenta que hay personas que están en mejores situaciones que otras si se toma por base un marco preestablecido– y temporal –puesto que está vinculada al estado de estar y no al estado de ser–. De ahí, los grupos no son vulnerables, más bien están situados en un escenario que les deja susceptibles a vulneraciones<sup>33</sup>.

En definitiva, la importancia en reunir a las personas en grupos cuando se estudia la vulnerabilidad desde el enfoque de los derechos humanos se justifica pues hace que tengan más visibilidad, más espacio de reivindicación y más fuerza para reclamar la efectividad de sus derechos o, como observa Ribotta, mayores posibilidades para la obtención de “respuestas igualitarias generales por parte de los Estados”<sup>34</sup>. Manejar la vulnerabilidad desde la categoría de los grupos sociales, de tal manera, pone de manifiesto la desigual realidad que existe entre ellos, que es un hecho asentado en nuestra sociedad, e, igualmente, atribuye mayor significado y aplicabilidad a la igualdad de acuerdo con lo que fue señalado anteriormente.

---

<sup>33</sup> RIBOTTA, Silvina, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia”, citado, pág. 13.

<sup>34</sup> RIBOTTA, Silvina, “Grupos vulnerables”, citado, pág. 281.

Atribuir a un determinado grupo la condición de vulnerabilidad también implica una tutela diferenciada por parte del Estado con relación a sus miembros, es decir, de protección especial y de establecimiento de prioridades y especiales estrategias en las acciones y planes gubernamentales. Es importante enfatizar que esa tutela, aunque se dirija hacia un cierto número de personas, no corresponde al establecimiento de privilegios, sino se trata de equiparar el trato y la realización de los derechos al resto de la sociedad, en razón de las dificultades a que se enfrentan por las condiciones socioestructurales relativas al contexto en que viven<sup>35</sup>. La relevancia en la determinación de los grupos, además, está en el hecho de que, de tal manera, se les pueda identificar más fácilmente a la hora de formular políticas públicas o, como en el caso de este trabajo, formar agentes estatales para que actúen de forma compatible con los derechos humanos teniendo en cuenta las particularidades que les caracterizan.

Hay que observar, asimismo, que el estado de vulneración en que se encuentran los diversos grupos existentes no se manifiesta de forma jerárquica, es decir, la situación de vulnerabilidad de un grupo no tiene más o menos valor que la de otro. Lo que ocurre es que de acuerdo con la forma por la cual la vulnerabilidad se manifiesta en la vida de las personas que conforman el grupo, sus efectos, considerando escenarios reales y concretos, pueden ser más o menos dañosos. Asimismo, es importante recalcar que pese a reunir personas que comparten uno o más elementos en determinados grupos, cada individuo se enfrenta a la vulnerabilidad de manera particular y vive de forma muy distinta sus efectos, teniendo en cuenta su propia identidad y el hecho de que esa identidad es plural y dinámica. Esto significa afirmar que los individuos no “están” igualmente vulnerables, de donde resulta que incluso dentro de un determinado grupo, las situaciones de vulnerabilidad nunca serán exactamente las mismas, de modo que los riesgos o secuelas tendrán distinta incidencia según el género, la etnia, la edad, la orientación sexual, el nivel socioeconómico y el escenario en que viven esas personas.

Cuando se examina una colectividad definida en los términos que fueron expuestos, por ende, hay que tener en cuenta dos aspectos: 1) que pertenece a un conjunto mayor de colectividades con notables diferencias entre ellas, pero con una característica

---

<sup>35</sup> GUIÑAZÚ, Claudio E., “Vulnerabilidad y derechos sociales. Una aproximación desde la bioética” en RIBOTTA, Silvina y ROSSETTI, Andrés (eds.) en *Los derechos sociales en el siglo XXI. Un desafío clave para el derecho y la justicia*, Dykinson, Madrid, 2010, pág. 297 a 324, pág. 317.

común: la potencial situación de vulneración o la propia manifestación de la vulnerabilidad y 2) ya con relación a cada grupo, hay que tener en cuenta que no se constituye como un conjunto uniforme, es decir, los seres humanos “se diferencian por edad, género, clase, sexualidad, religión y nacionalidad, y cualquiera de estos aspectos puede transformarse, en un contexto dado, en una identidad grupal sobresaliente”<sup>36</sup> y por ello ciertas personas pueden “estar” más vulnerables que otras dentro del propio grupo en situación de vulnerabilidad. De ahí que la alusión a grupos como categoría de análisis no significa, como está destacado, tratarlos como homogéneos o abordar uniformemente la vulnerabilidad. Supone, al contrario, considerar tanto los matices de diferencias y desigualdades intergrupales como manejar el tema a partir de una concepción de que hay “vulneraciones que son más gravosas que otras en términos de supervivencia o de ejercicio de los derechos humanos más básicos”<sup>37</sup> y esas vulneraciones pueden ocurrir internamente e incidir en una misma persona. Dicho de otra manera, el tipo y grado de vulneración no solo se manifiesta de forma distinta dependiendo de cada grupo, sino también puede variar internamente, afectando de maneras diferentes a sus integrantes. De ahí que una persona puede encontrarse en una especial situación de vulnerabilidad por varias causas asociadas, como el caso de las mujeres negras frente a las mujeres blancas. Aunque formen parte de un colectivo que se fundamenta en el sistema sexo/género, es cierto que la experiencia vivida por cada mujer es profundamente distinta y el color de la piel y otros rasgos fenotípicos son determinantes en esta relación, como será examinado más adelante.

Determinados los puntos iniciales que serán manejados en esta investigación, para alcanzar el objetivo de establecer un marco teórico de la vulnerabilidad desde la perspectiva de los derechos humanos hay que abordar otras cuestiones fundamentales, como su noción socioestructural, ya comentada brevemente, así como analizar sus manifestaciones en los ámbitos social y jurídico, que están irremediablemente conectados. Asimismo, es imprescindible centrarse en la relación entre vulnerabilidad, discriminación y opresión de forma más detallada, exponiendo determinados categorías, como la pobreza, el sistema sexo/género y la etnia, que juegan un papel relevante para la intensificación del estado de vulnerabilidad de ciertos grupos sociales.

---

<sup>36</sup> YOUNG, Iris Marion, “Las cinco caras de la opresión”, citado, pág. 85.

<sup>37</sup> RIBOTTA, Silvina, “Grupos vulnerables”, citado, pág. 280.

## 1.1 Sobre el concepto de vulnerabilidad: la vulnerabilidad socioestructural

Pensar la vulnerabilidad de una forma general, independiente del contexto en que se la emplee, implica tener como punto de partida la idea de inseguridad, de fragilidad y la existencia de determinados puntos débiles respecto a personas, grupos, sistemas, situaciones u objetos. Si acercamos esta noción a los seres humanos, además de las características mencionadas, se agrega otra, la desprotección frente a una situación de riesgo, asociada a una amenaza, esto es, se está susceptible a algo, o de daño, caso en que la lesión ya ocurrió<sup>38</sup>. Desde esta primera aproximación, la vulnerabilidad es real y concreta, de manera que se relaciona con la propia existencia y continuación de la humanidad. Este punto de vista implica sostener que la vulnerabilidad es considerada una característica innata de la vida, elemento natural de todos los seres y, por tanto, se puede decir que todas y todos, sin cualquier distinción, somos vulnerables y susceptibles de sufrir de diversas formas las consecuencias de variables internas o externas, como enfermedades, desastres ambientales o derivados de la acción humana. Lo dicho anteriormente pone acento en el cuerpo humano y su susceptibilidad al daño para comprender qué significa la vulnerabilidad, vista, por tanto, como algo físico y universal, que nadie puede esquivar. Desde esta perspectiva general, se formulan debates sobre las consecuencias en considerarla condición innata del ser humano, dotada de universalidad, o característica de determinados grupos y personas, caso en que tendría un carácter específico y particular.

Uno de esos debates se desarrolla en el ámbito del derecho antidiscriminatorio por medio de aportaciones de Barrère Unzueta<sup>39</sup> y Morondo Taramundi<sup>40</sup>, especialmente al analizar la propuesta de Fineman<sup>41</sup> sobre vulnerabilidad como condición humana. Según

---

<sup>38</sup> RIBOTTA, Silvina, “Grupos vulnerables”, citado, pág. 279.

<sup>39</sup> BARRÈRE UNZUETA, María Ángeles, “Martha Fineman y la igualdad jurídica: ¿Vulnerabilidad vs. Subordiscriminación?”, *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, Universidad de Valencia, Valencia, n.º 34, 2016, pág. 17 a 34.

<sup>40</sup> MORONDO TARAMUNDI, Dolores, “¿Un nuevo paradigma para la igualdad? La vulnerabilidad entre condición humana y situación de indefensión”, citado.

<sup>41</sup> FINEMAN, Martha Albertson, “The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition”, *Yale Journal of Law and Feminism*, Yale Law School, New Haven, vol. 20, n.º 1, 2008, pág. 1 a 23. Acerca del tema, consúltese otros artículos de la autora: “The vulnerable subject and the responsive state”, *Emory Law Journal*, Emory University School of Law, Atlanta, vol. 60, n.º 2, 2010, pág. 251 a 275 y “Equality, Autonomy, and the Vulnerable Subject in Law and Politics” en FINEMAN, Martha Albertson y GREAR, Anna (eds.), *Vulnerability. Reflections on a new ethical foundation for law and politics*, Farnham/Burlington, Ashgate, 2013, pág. 13 a 27.



su propuesta, la vulnerabilidad sería un aspecto universal, innato y constante de la condición humana, pues el cuerpo humano está expuesto a sufrir amenazas y daños, en contraposición al etiquetamiento de ciertos grupos como vulnerables, lo que lleva a la estigmatización y a la consideración de que son incapaces, asociándolos a la victimización, privación, dependencia o patología<sup>42</sup>. Ambas autoras critican la concepción presentada acerca de la vulnerabilidad sobre todo porque Fineman la atribuye un carácter homogéneo, común a todas y a todos, que es incompatible con la realidad, marcada por estructuras sociales desiguales e injustas que recaen sobre determinadas personas y grupos. Ante tal argumento, Morondo Taramundi<sup>43</sup> enfatiza que “(...) la vulnerabilidad no es simplemente una condición de lo humano. La posibilidad de sufrir el desempleo, la pobreza, la violencia, los efectos de la corrupción política o de la contaminación ambiental no tienen una relación con nuestra corporeidad como la tiene la muerte o incluso la dependencia del cuidado de otros en varios períodos de nuestra vida”. Desde esta óptica se construye la noción de vulnerabilidad socioestructural, que tiene relación con la “condición de indefensión de determinados grupos sociales frente a determinados riesgos porque no tienen la cobertura de aquellos sistemas, instituciones, redes que la sociedad facilita a otros grupos no (igualmente) expuestos”<sup>44</sup>. Esta noción refuerza que hay personas y grupos que tienen más probabilidad de sufrir daños, ver sus derechos vulnerados y sufrir los efectos de la desigualdad, de modo que la vulnerabilidad como es planteada en este trabajo no está conectada al cuerpo, sino a las relaciones sociales duraderas que crean y perpetúan la exposición al daño.

En el ámbito de la investigación médica, asistencia sanitaria o bioética con relación a los individuos que participan en ella el debate sobre la vulnerabilidad como noción existencial o no también está presente. Solbakk<sup>45</sup> y Luna<sup>46</sup> establecen un diálogo

---

<sup>42</sup> FINEMAN, Martha Albertson, “The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition”, citado, pág. 8.

<sup>43</sup> MORONDO TARAMUNDI, Dolores, “¿Un nuevo paradigma para la igualdad? La vulnerabilidad entre condición humana y situación de indefensión”, citado, pág. 214.

<sup>44</sup> *Idem*, pág. 217.

<sup>45</sup> SOLBAKK, Jan Helge, “Vulnerabilidad: ¿un principio fútil o útil en la ética de la asistencia sanitaria?”, *Revista Redbioética/UNESCO*, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, Montevideo, año 2, vol. 1, n.º 3, 2011, pág. 89 a 101.

<sup>46</sup> LUNA, Florencia, “Vulnerabilidad: un concepto muy útil. Abandonando los ‘corsets teóricos’”, *Revista Redbioética/UNESCO*, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, Montevideo, año 2, vol. 2, n.º 4, 2011, pág. 85 a 90.

teórico que es interesante para el análisis aquí planteado, pues lleva a la reflexión sobre qué sería la vulnerabilidad y cuáles serían las consecuencias prácticas de una concepción u otra para los sujetos afectados. Si se traslada esta noción al campo de los derechos humanos, la experimentación científica se convierte en una serie de experimentaciones sociales, jurídicas, políticas y económicas, que se refieren a la percepción de la propia existencia, su relación con el entorno y las consecuencias de ese proceso y, desde dichas experimentaciones, puede surgir la necesidad de medidas de protección especial. El diálogo teórico parte de la discusión sobre el artículo 8º de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de Unesco<sup>47</sup>, que aborda la vulnerabilidad humana desde dos perspectivas: una más amplia, común a todos los seres humanos, y otra, restringida, con relación a determinadas personas y grupos. La segunda concepción es aquella que se refiere a personas “que se encuentren imposibilitadas, o de algún modo condicionadas, para otorgar su consentimiento informado previo a ser incorporadas en un ensayo clínico. Se vincula así a la autonomía y competencia de un sujeto para consentir someterse a esta actividad riesgosa”<sup>48</sup>.

En líneas generales, Solbakk, entiende que “la vulnerabilidad debe ser vista como un aspecto inherente al ser humano y no como algo meramente contingente (...)” y añade que clasificar determinados grupos o personas como vulnerables conlleva la creación de estereotipos y la categorización de personas, tratándose de un principio complejo y que puede estigmatizar<sup>49</sup>. Luna, a su vez, observa que el peligro de ese punto de vista es de naturalizar la vulnerabilidad: “si todos somos igualmente vulnerables, nadie es específicamente vulnerable, es más, nadie necesita de ninguna protección especial... (...) dejando desprotegidas a las personas que sí necesitan una protección específica”<sup>50</sup>. Bajo lo expuesto, la autora explica que el punto relevante para la investigación no es tratar la vulnerabilidad como existencial, sino como algo dinámico y relacional, que debe ser

---

<sup>47</sup> Artículo 8º: “Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal - Al aplicar y profundizar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías asociadas, debería tenerse en cuenta la vulnerabilidad humana. Debe protegerse a las personas y grupos especialmente vulnerables y respetarse su integridad”.

<sup>48</sup> GUIÑAZÚ, Claudio E., “Vulnerabilidad y derechos sociales. Una aproximación desde la bioética”, citado, pág. 307.

<sup>49</sup> SOLBAKK, Jan Helge, “Vulnerabilidad: ¿un principio fútil o útil en la ética de la asistencia sanitaria?”, citado, pág. 90.

<sup>50</sup> LUNA, Florencia, “Vulnerabilidad: un concepto muy útil. Abandonando los ‘corsets teóricos’”, citado, pág. 86.

analizado a partir de situaciones concretas y particulares. De ahí, es posible constatar que hay diferentes capas de vulnerabilidad, según su clasificación, que actúan en la vida de las personas y las oprimen y por ello son necesarios distintos tipos de protección y formas de enfrentar la vulnerabilidad<sup>51</sup>.

Aunque el debate teórico haga referencia a la investigación médica y a la bioética, la cuestión sobre la vulnerabilidad desde tales ámbitos y el intercambio de ideas aporta herramientas útiles para comprender la necesidad, importancia y utilidad de su aplicación en los estudios de derechos humanos. Si, por una parte, se centra en las personas afectadas, haciéndolas visibles, por otra, ofrece una mirada que considera su carácter dinámico, relacional y contextual, en consonancia con la realidad. Desde tal enfoque, por ende, considerar la vulnerabilidad como una característica innata de la vida no afecta la utilidad y relevancia del concepto en los estudios de derechos humanos y, especialmente, su aplicación sociojurídica, tratándola como consecuencia de una interacción, pues este punto de vista representa otro nivel de análisis, que no anula o excluye la idea de la vulnerabilidad como condición humana.

Examinada la vulnerabilidad como condición humana común a todas y a todos, la segunda mirada posible de análisis es a partir de su noción socioestructural, ya delineada en los párrafos anteriores. Dicha noción tiene relación con las perspectivas de Young, Ribotta, Morondo Taramundi y Barrère Unzueta que fueron presentadas y se articula sobre la base del entendimiento de que es resultado de la interacción entre diversos componentes propios de las personas o externos a ellas con el contexto en que viven y con la sociedad a que pertenecen. Según explica Guiñazú, esa noción se refiere a determinadas personas o grupos “en virtud de ciertas características o circunstancias –o de su combinación– que condicionan negativamente, de modo permanente o transitorio, su supervivencia. En esta segunda acepción –se quiere, más restringida– tales

---

<sup>51</sup> La utilización de la metáfora de las capas para comprender la vulnerabilidad, según Luna, da flexibilidad al concepto, tratándola como algo múltiple y diferente, teniendo en cuenta sus matices y las particularidades del mundo real. La propia idea de capas da cuenta de la multiplicidad de vulnerabilidades que pueden operar en ciertas personas o grupos, de modo que aquí también se destaca la idea de que no hay una sólida y homogénea vulnerabilidad. Considerando que su exposición se desarrolla en el campo de la bioética, Luna entiende que algunas de las capas pueden estar relacionadas con problemas del consentimiento informado o con circunstancias sociales, lo que implica analizar el contexto en que están situadas las personas consideradas en situación de vulnerabilidad. A propósito, véase LUNA, Florencia, “Elucidating the concept of vulnerability: layers not labels”, *International Journal of Feminist Approaches to Bioethics*, University of Toronto Press, Toronto, vol. 2, n.º 1, 2009, págs. 122 a 139, especialmente págs. 128-133.

características o circunstancias, o su combinación, constituyen un *handicap* que puede asociarse –de diversos modos– con la violación de ciertos derechos humanos”<sup>52</sup>.

La posición de dicho autor, sumándose al que fue desarrollado, se dirige a considerar la vulnerabilidad construcción social, resultado de una dinámica influenciada por factores económicos, jurídicos y políticos asociada a determinadas características personales o circunstancias. Ese resultado llevará al desfavorecimiento comentado anteriormente, cuyo punto máximo será la violación de derechos humanos. Desde ahí, la vulnerabilidad pasa de condición humana a consecuencia que determina la forma de vivir de cada ser humano y bajo esta perspectiva se puede “estar” vulnerable. El “condicionar negativamente” descrito por Guiñazú tiene una serie de matices y formas de materializarse, que corresponden a mayores o menores grados de violación de los derechos humanos en distintos aspectos. Así, dentro de ese espacio marcado por factores sociales, económicos, jurídicos o políticos que interactúan con dichas características y circunstancias y ya alejada de la consideración de que es un elemento intrínseco a la vida humana, la vulnerabilidad se vincula a contextos y situaciones que serán vividos de forma particular por personas y grupos específicos y determinará sus experiencias y oportunidades como sujetos en el mundo. Si como característica de la vida humana, la vulnerabilidad es compartida por todas y todos, cuando se la considera consecuencia de determinados factores no ocurre lo mismo, ya que desde este punto de vista afecta a personas y grupos en particular. El impacto que genera la vulnerabilidad en la vida de mujeres, hombres, niñas y niños se manifiesta de forma tan potente que es capaz de establecer acentuadas distinciones en cuanto a las posibilidades reales existentes para el desarrollo de sus trayectorias personales o de definir cuál será el lugar que ocuparán en el mundo.

Considerando el campo de estudios en que se enmarca esta investigación, un acercamiento inicial a las dimensiones posibles de la vulnerabilidad desde su acepción socioestructural puede ser realizado a partir del ámbito social. De acuerdo con Pizarro, la vulnerabilidad social se vincula a los procesos socioeconómicos de desigualdad y pobreza<sup>53</sup> y tiene dos componentes: el primero es la “inseguridad e indefensión que

---

<sup>52</sup> GUIÑAZÚ, Claudio E., “Vulnerabilidad y derechos sociales. Una aproximación desde la bioética”, citado, pág. 306-307.

<sup>53</sup> Desde esta perspectiva, la pobreza es causa y condición de máxima agravante de la vulnerabilidad. Esta relación será analizada más adelante en un apartado propio en este capítulo.

experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico social de carácter traumático” y el segundo, “el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento”<sup>54</sup>. Clasificada por el mencionado autor como el rasgo dominante de la realidad social de América Latina, observación que servirá para contextualizar la situación de vulnerabilidad de determinados grupos sociales en Brasil en el capítulo siguiente, tal dimensión se relaciona con las consecuencias de eventos socioeconómicos traumáticos en razón de la adopción de un nuevo modelo de desarrollo que interfiere de forma negativa en la cantidad de recursos que disponen las personas y les perjudica en su bienestar tanto en términos de subsistencia como de calidad de vida, mercado de trabajo y condición de los hogares.

Lo importante al abordar la vulnerabilidad social es observar cómo la debilidad, la inseguridad y la indefensión se concretizan, pues esto aporta herramientas útiles para el análisis de la vulnerabilidad desde el Derecho. La íntima relación entre las dos dimensiones demuestra que independientemente del tipo de aproximación, la vulnerabilidad tiene determinados elementos comunes, los cuales refuerzan la constante exposición al riesgo y la posición de desventaja. Vinculada a esa idea, Castel subraya la vulnerabilidad como “enfriamiento del vínculo social que precede a su ruptura”<sup>55</sup> y es justamente esa la expresión que bien define el cuadro en que se encuentran tales personas. El enfriamiento del vínculo, que forma parte del proceso de la vulnerabilidad, conllevará el estado de exclusión, profundizando la distancia que las separa de la participación común a la vida social y de la igualdad en el acceso y ejercicio de los derechos<sup>56</sup>.

Tener en cuenta la vulnerabilidad como consecuencia de condiciones socioestructurales, por tanto, lleva a la constatación de que existen elementos que contribuyen a un trato desigualitario y discriminatorio entre las personas y por ello hay que sacar a la luz la relación entre Derecho, la realización de la justicia y los derechos

---

<sup>54</sup> PIZARRO, Roberto, *La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina*, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, 1995, pág. 11.

<sup>55</sup> CASTEL, Robert, “De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso”, *Archipiélago*, n.º 21, Barcelona, 1995, pág. 27 a 36, pág. 29.

<sup>56</sup> *Idem*, pág. 27.

humanos, como será analizado a continuación. Y, de la misma forma, a centrar el análisis no en la vulnerabilidad natural que comparten todos los seres vivos sino en la vulnerabilidad que se produce por las estructuras sociales, políticas, culturales, económicas y jurídicas en las que vivimos y que afectan de manera diferenciada a las personas y a los grupos que integran, vulnerabilizándolas de forma también diferente.

## 1.2 Vulnerabilidad y Derecho

Acercarse al estudio de la vulnerabilidad en términos jurídicos implica tener en cuenta su proyección en la comprensión sobre quiénes son, efectivamente, sujetos de derechos, el valor que se da a cada persona como tal y cómo ese entendimiento determina el grado de acceso y ejercicio de los derechos y la forma como cada ser humano desarrolla sus planes de vida. Desde esta perspectiva, el estudio de la vulnerabilidad a partir del Derecho presenta dos vías, que aunque no sean opuestas, suponen una mirada que considera distintos elementos. La primera se refiere a la vulnerabilidad desde la posibilidad de acceso y ejercicio de los derechos, considerando que hay personas que, aunque tengan sus derechos garantizados por el Ordenamiento jurídico, encuentran obstáculos o impedimentos para ejercerlos. Esa aproximación se vincula a la exigencia de coherencia entre las normas de protección de los derechos humanos y el trato igualitario a todas las personas, línea que seguirá esta investigación.

Por otro lado, de acuerdo con lo que explica Guiñazú, está la vulnerabilidad causada por el Derecho, que tiene su origen en la manera cómo el conjunto de normas está plasmado en determinada sociedad y cómo esta organización puede afectar negativamente a las personas<sup>57</sup>. Eso significa afirmar que el propio Ordenamiento jurídico, al contrario de reconocer y garantizar derechos, proporciona un tratamiento que si no directamente prohíbe el ejercicio de algún derecho, impone dificultades para que sea posible. Y, desde una determinada concepción de titular de derechos, las personas afectadas, posiblemente, serán las que no corresponden a dicho patrón<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> GUIÑAZÚ, Claudio E., “Vulnerabilidad y derechos sociales. Una aproximación desde la bioética”, citado, pág. 319.

<sup>58</sup> Es el caso, por ejemplo, de un vacío de derechos con respecto a las personas transexuales menores de edad españolas o extranjeras en la Ley 3/2007, sobre la rectificación registral de la mención relativa al sexo. Dicha ley no hace cualquier referencia a las personas menores de edad e inmigrantes transexuales de forma

En definitiva, la efectividad de los derechos humanos está condicionada a la comprensión de la vulnerabilidad y sus consecuencias en las condiciones reales de vida de mujeres y hombres, de forma que “estar” vulnerable implica estar en un campo cuya principal característica es la desprotección de los derechos y, por consecuencia, la mayor probabilidad de que sean violados o que haya muchos obstáculos para su acceso. En la dinámica excluyente construida bajo los efectos de la vulnerabilidad, los derechos de las personas que se encuentran en tal situación valen menos si son comparados con los de otras. Como consecuencia, son construidas, en términos empíricos, categorías de derechos desde los individuos que pueden disfrutarlos plenamente hacia aquellos que absolutamente no los pueden disfrutar, con distintas modulaciones entre las dos posibilidades, en que se destaca la influencia de ciertos componentes, como los sociales, los económicos y los culturales.

El acceso a los derechos y su garantía de disfrute por todas las personas indistintamente, tanto en términos jurídicos como prácticos, tienen un largo recogido histórico del cual forman parte cambios de paradigmas y de alcance en cuanto a sus titulares. El fundamento de esa concepción se basa en la idea de universalidad, en especial en cuanto a su referencia a que todas las personas son, sin excepciones, titulares de los derechos humanos. Basándose en tal aspecto y relacionándolo con otro rasgo de la universalidad, según el cual los derechos humanos no son relativos a una determinada cultura, Lema subraya que “si los derechos humanos son universales en cuanto a que su valor no depende del contexto social en el que nos movamos, entonces es lógico que no se puede dar el caso de que alguien deje de ser titular de los mismos por estar en un determinado contexto social o cultural”<sup>59</sup>. La perspectiva teórica sobre la universalidad, con todo, resulta insuficiente cuando se pone de manifiesto la diversidad humana y la constatación de que, en términos reales y ante desigualdades socioestructurales, la titularidad de los derechos está condicionada a determinados atributos personales. El

---

que el propio mecanismo jurídico de protección con respecto a uno de los elementos que compone la identidad, el nombre, genera discriminación, pues unas tienen más derechos que otras, y las deja en una agravada situación de vulnerabilidad. Al no estar bajo el paraguas de protección y reconocimiento de derechos de la ley, esas personas se encuentran en posición de desventaja intragrupal, pues el propio Derecho las deja en condición más vulnerable y discriminatoria.

<sup>59</sup> LEMA AÑÓN, Carlos, “Derechos sociales, ¿para quién? Sobre la universalidad de los derechos sociales”, *Derechos y Libertades*, Dykinson, n.º 22, enero 2010, pág. 179 a 203, pág. 182.

aparente hecho de la universalidad de titulares y de derechos, por ende, se convierte en aspiración a ser alcanzada<sup>60</sup>.

En este sentido, el marco de la vulnerabilidad dentro del sistema de derechos humanos es significativo y constituye pieza clave para comprender las transformaciones que incidieron –y todavía siguen incidiendo– sobre la representación de titularidad de los derechos humanos y su efectividad como “herramienta apropiada para lograr la inclusión real y efectiva de los colectivos socialmente excluidos”<sup>61</sup>. Analizar la vulnerabilidad desde el punto de vista planteado permite una lectura crítica de la concepción tradicional y potencia la idea de los derechos humanos, dándole mejor comprensión y mayores efectos, pues pone de relieve la deficiencia del sistema que desde el comienzo de su construcción fue excluyente en relación a determinados grupos. Asimismo, el análisis propuesto propicia la atribución de poder a los sujetos excluidos y la apertura de nuevos espacios de protagonismo para que tengan sus derechos reconocidos y puedan ejercerlos plenamente. Eso significa afirmar que el sistema tradicional de los derechos humanos es un sistema que desde la perspectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad fue construido de forma alejada de la vida humana y de la diversidad, pues durante su proceso de avance no consideró a las personas que los conforman como sujetos autónomos<sup>62</sup>, con necesidades específicas, dejándolas al margen de su ámbito de protección e instituyendo categorías de seres humanos en términos de desigualdad.

Como en la lengua, en que el masculino es considerado neutro y el femenino es su derivado o dependiente, también hay un modelo de “normalidad” del que se parte para afirmar la universalidad de los derechos<sup>63</sup>. En tal supuesto, sin embargo, la referencia no

---

<sup>60</sup> BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, *Diversidad de situaciones y universalidad de los derechos*, Dykinson, Madrid, 2011, pág. 15.

<sup>61</sup> CUENCA GÓMEZ, Patricia, “Los derechos humanos: la utopía de los excluidos” en RAMIRO AVILÉS, Miguel Ángel y CUENCA GÓMEZ, Patricia (eds.), *Los derechos humanos: La utopía de los excluidos*, Dykinson, Madrid, 2010, pág. 9 a 37, pág. 10.

<sup>62</sup> La noción de autonomía, considerada el presupuesto para la atribución de derechos, tenía en cuenta determinadas circunstancias personales, como edad, sexo, “raza” e independencia económica, que afectaban a la capacidad de elección de las personas y, por tal motivo, estaría justificado someterlas al poder de otras, integrantes del grupo estándar compuesto por un tipo humano concreto (BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad. Los ejemplos del sexismo y el edadismo” en BARRANCO AVILÉS, María del Carmen y CHURRUCA MUGURUZA (eds.), *Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 17 a 44, pág. 23).

<sup>63</sup> De acuerdo con Barranco Avilés, “la normalidad es una cuestión de poder”, de modo que todas las personas consideradas “anormales” por distintas razones encontrarán restricciones al ejercicio de sus derechos y no tendrán representatividad en las esferas sociales e institucionales (BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, *Diversidad de situaciones y universalidad de los derechos*, citado, pág. 196). Este



corresponde al masculino genérico para referirse a todos los hombres, sino a un específico tipo masculino. El modo por el cual se contesta a la pregunta ¿derechos humanos para quién? puede tener distintas respuestas. Si la respuesta parte del discurso de la burguesía capitalista, que utilizó su particular concepción del mundo para interpretar la titularidad de los derechos humanos sobre la base de un cierto tipo de ser humano considerado general y neutro –el hombre blanco, heterosexual, propietario, judío-cristiano y física e intelectualmente independiente– seguramente la “neutralidad” del sujeto excluirá a las personas que no tienen dichas características<sup>64</sup>. De ahí que la pertenencia a un determinado colectivo cuyos miembros están fuera de ese patrón humano previamente determinado condiciona cómo se realizan no solo sus derechos, que será menos efectiva si se la compara con los miembros del grupo estándar, sino también su dignidad como ser humano.

Desde esta perspectiva, los procesos de generalización y especificación de los derechos humanos cuestionaron la formulación de un cierto tipo humano como parámetro para el reconocimiento de la universalidad e incorporaron una concepción que dejaba espacio para la diversidad y para la asignación de titularidad de derechos a personas que no pertenecían al grupo estándar<sup>65</sup>. A partir de ese hito, la titularidad pudo ser replanteada desde la perspectiva de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, en un proceso que todavía permanece abierto e inacabado.

Fijadas las cuestiones precedentes, cabe puntualizar que en el campo del Derecho, la vulnerabilidad tiene dos sentidos de aplicación, el primero, en el derecho internacional humanitario, materializándose en la exposición de riesgo, y, el segundo, en el derecho internacional de los derechos humanos, vinculado a la discriminación<sup>66</sup>. No obstante el presente trabajo se centrar en el segundo ámbito, es importante examinar la comprensión

---

todavía es un planteamiento actual, que no atañe solamente al proceso histórico de los derechos. Si pensamos desde las dificultades que se enfrentan el colectivo formado por las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales la cuestión de la normalidad (comprendida a partir de ciertos estereotipos) frente a la anormalidad y la necesidad de adecuarse a determinados parámetros para que se las reconozcan como sujetos de derechos ocupa un lugar central para la formulación de sus reivindicaciones

<sup>64</sup> FARIÑAS DULCE, María José, *Los derechos humanos: Desde la perspectiva sociológico-jurídica a la actitud postmoderna*, Dykinson, Madrid, 1997, pág. 15-16.

<sup>65</sup> Acerca de los mencionados procesos, véase BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, *Diversidad de situaciones y universalidad de los derechos*, citado, pág. 21-24.

<sup>66</sup> BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, “Derechos humanos y vulnerabilidad. Los ejemplos del sexismo y el edadismo”, citado, pág. 17.

sobre la vulnerabilidad en cada uno de ellos con la finalidad de establecer similitudes, diferencias y alcances posibles y también ilustrar su relación con otros escenarios concretos, como en los que ocurren desastres naturales.

La vulnerabilidad manejada en el área humanitaria se refiere “a la propensión de las personas, sus medios de subsistencia, y sus activos (sus bienes y propiedades) a sufrir efectos adversos cuando son afectados por eventos potencialmente dañinos (*hazards*)”<sup>67</sup>. Este ámbito tiene relación con situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales en una población local. Afrontarla, por ende, requiere desarrollar la capacidad de supervivencia, recuperación y superación de la población afectada y trabajar en la reducción del riesgo de desastres por medio de estrategias de concienciación y prevención. Bajo esta perspectiva, la capacidad para lidiar con esas circunstancias adquiere una posición especial frente a los efectos nocivos producidos por la vulnerabilidad en la medida que representa las “formas en que las personas y organizaciones utilizan los recursos y capacidades disponibles para enfrentar condiciones adversas que podrían conducir a un desastre”<sup>68</sup>. En este sentido, la existencia y el desarrollo de las capacidades en todos los niveles implica a la comunidad y actores externos y cuánto más fortalecida se encuentra una población más posibilidades habrá de que la vulnerabilidad se reduzca.

En el caso de la noción de capacidad aquí comentada, esta es uno de los cinco componentes por los cuales se puede reconocer la vulnerabilidad de una población frente a un fenómeno natural<sup>69</sup>. Vinculados a la capacidad, los medios de subsistencia conforman el primer aspecto de análisis y se relacionan con la generación de ingresos que puedan garantizar una vivienda y emplazamiento seguros. La posibilidad de generar ingresos permite que cada persona, a través de los propios medios, consiga proteger su hogar y sus bienes delante de una amenaza. Los otros componentes que señalan la

---

<sup>67</sup> CHURRUCA MUGURUZA, Cristina, “Vulnerabilidad y protección en la acción humanitaria” en BARRANCO AVILÉS, María del Carmen y CHURRUCA MUGURUZA (eds.), *Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 45 a 70, pág. 46.

<sup>68</sup> NACIONES UNIDAS. ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES, *Vivir con el Riesgo. Informe mundial sobre iniciativas para la reducción de desastres*, Naciones Unidas EIRD, Ginebra, 2004, pág. 45.

<sup>69</sup> FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA, *¿Qué es el AVC? Introducción al Análisis de vulnerabilidad y capacidad*, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2006, pág. 39.

vulnerabilidad en el contexto comentado son el bienestar de las personas en cuanto a la salud y la nutrición, la protección social, que “implica precauciones que la gente no puede gestionar por sí misma, como la protección frente a inundaciones o la tarea de velar por el cumplimiento de los códigos de edificación”<sup>70</sup> y la gobernanza, vinculada a cómo el Estado, dentro de sus atribuciones, actúa para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y al nivel de organización y participación de la comunidad para la toma de decisiones más adecuadas y con mayor eficacia social para sus problemas.

Desde lo expuesto en el párrafo anterior, se infiere que la vulnerabilidad se ubica primero en un factor físico de riesgo, es decir, básicamente se refiere a cuestiones urgentes de nutrición, salud y vivienda que deben ser sanadas de manera prioritaria tras la ocurrencia de un desastre. Lo importante a recalcar, en este plano de análisis, es que dichas cuestiones pueden ser preexistentes al evento y se agravan, justamente, por la presencia de un alto grado de susceptibilidad a los efectos adversos generados por las amenazas. Aunque la vulnerabilidad no esté condicionada a las amenazas naturales, es cierto que una población que ya se encuentra en situación de fragilidad social, económica o de subsistencia sufrirá de forma exponencialmente más grave los impactos del fenómeno natural. Y así lo es porque la vulnerabilidad es uno de los elementos fundamentales en la formulación del concepto de riesgo de acuerdo con los parámetros de reducción de desastres y, como tal, determina cuál y cómo será el impacto inmediato y los efectos a lo largo del tiempo en la vida de las personas afectadas por un desastre<sup>71</sup>. Como resultado de la ecuación amenaza y vulnerabilidad, en este contexto definida como las “condiciones determinadas por procesos y factores físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la sensibilidad de una comunidad determinada a los efectos de las amenazas”<sup>72</sup>, unas personas sufrirán más que otras e, invariablemente, entrarán en juego condiciones como la situación socioeconómica agravada por la pobreza, el género

---

<sup>70</sup> FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA, *¿Qué es el AVC? Introducción al Análisis de vulnerabilidad y capacidad*, pág. 38.

<sup>71</sup> El riesgo puede ser entendido como la “probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiental) resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad” (NACIONES UNIDAS. ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES, *Vivir con el Riesgo. Informe mundial sobre iniciativas para la reducción de desastres*, citado, pág. 40).

<sup>72</sup> NACIONES UNIDAS. ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES, *Vivir con el Riesgo. Informe mundial sobre iniciativas para la reducción de desastres*, citado, pág. 45.

y la etnia. Sobre la base de lo planteado, la vulnerabilidad natural pasa a relacionarse con la vulnerabilidad socioestructural, poniendo de manifiesto que ni siquiera las catástrofes naturales ni los peligros derivados del cambio afectan a las personas por igual.

Aunque parta de un mismo punto –la desprotección– y tenga campos de actuación relacionados, la vulnerabilidad gana una perspectiva distinta cuando es analizada en el contexto de los derechos humanos. Además de los aspectos ya mencionados anteriormente, la existencia de factores de riesgo aquí se refiere, sobre todo, al riesgo en cuanto al no reconocimiento de la categoría “titular de derechos” y, por consecuencia, a la exclusión de la posibilidad de accederlos y ejercerlos. Delante de ese escenario, hay que pensar la vulnerabilidad como exigencia de protección y cuidado en lo que se refiere a la inclusión de todas y todos en el campo del efectivo ejercicio de derechos, no limitado por categorías como el género, la etnia o la condición socioeconómica.

Dentro del campo de estudio de la vulnerabilidad a partir del Derecho, además de la discusión sobre la titularidad de los derechos, es relevante hacer algunos comentarios sobre el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este sentido, durante la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasilia, Brasil, en marzo de 2008, fueron aprobadas las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, cuya finalidad fue crear una base para la reflexión sobre los obstáculos a los que se enfrentan esas personas para el acceso a la justicia y establecer parámetros y recomendaciones a los órganos judiciales para la protección efectiva de todas y todos.

Para alcanzar su propósito, las Reglas establecen quiénes son las personas beneficiarias de su protección y, para ello, identifican las condiciones en las que se considera que encontrarán especiales dificultades para el efectivo ejercicio de sus derechos ante el sistema de justicia<sup>73</sup>. Asimismo el citado documento señala cuáles categorías pueden constituir condiciones de vulnerabilidad, como el género o la pobreza, recalcando la necesidad de tener en cuenta el contexto de cada persona y su nivel

---

<sup>73</sup> Capítulo 1, sección 2ª, punto 3: “Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.

socioeconómico<sup>74</sup>. Las definiciones propuestas por el mencionado documento, así, son útiles no solo para el ámbito del sistema de justicia, sino también aportan elementos para la comprensión de la vulnerabilidad desde un marco teórico general y complementan lo que fue formulado hasta este punto.

Acerca de la necesidad de la elaboración de las Reglas tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran determinadas personas o grupos ante el sistema judicial, Ribotta señala que “(...) poca utilidad o nula tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho”<sup>75</sup>. Desde la perspectiva adoptada en esta investigación y anticipando unos de los puntos que serán abordados posteriormente, mencionada afirmación puede ser trasladada al campo de la actuación policial y del significado de “estar” vulnerable particularmente en esos casos, pues de igual modo se puede reflexionar sobre la relación entre protección y garantías de los derechos por parte del Estado y la continua violación de los derechos de las personas que pertenecen a determinados grupos por sus cuerpos de seguridad.

### 1.3 Vulnerabilidad y discriminación

Abordar la vulnerabilidad desde un enfoque de derechos humanos, como noción socioestructural y teniendo en cuenta la necesidad de un marco igualitario para todos los seres humanos, conlleva, necesariamente, analizarla desde los efectos de la discriminación y en qué sentido el resultado de esa relación afecta a los grupos en situación de vulnerabilidad. Antes de examinar los efectos de esta dinámica, con todo, es importante tejer algunas consideraciones previas. Sobre el término “discriminación”, Morondo Taramundi señala sus dos usos posibles: “una primera acepción que podríamos llamar ‘lógica’ o ‘matemática’, en la cual discriminar es sinónimo de distinguir o diferenciar, y una acepción ‘política’ en la que la discriminación es sinónimo de

---

<sup>74</sup> Capítulo 1, sección 2ª, punto 4: “Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico”.

<sup>75</sup> RIBOTTA, Silvina, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia”, citado, pág. 3.

desigualdad motivada por el prejuicio y los estereotipos”<sup>76</sup>. La distinción entre los usos es fundamental para reflexionar sobre la discriminación, pues cada uno tendrá aplicaciones y consecuencias distintas. Desde este planteamiento terminológico y con base en el entendimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto al artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la mencionada autora sostiene que tal cláusula antidiscriminatoria se desdobra en dos elementos: el primero hace referencia tanto a la discriminación por diferenciación, en que casos análogos son tratados de modo distinto, como a la discriminación por indiferenciación, es decir, casos distintos son tratados de la misma forma. El segundo corresponde a la ausencia de una justificativa objetiva y razonable para la acción o trato discriminatorio<sup>77</sup>.

La primera faceta de dicha cláusula corresponde a la acepción “lógica” o “matemática” del término “discriminación”, en que tanto el distinto tratamiento para casos análogos, como el mismo tratamiento para casos diversos se vinculan a una cuestión de simetría, en que, tras la realización de un ejercicio de comparación, el resultado será invariablemente, la diferencia desfavorable. La discriminación, del mismo modo que la vulnerabilidad, tiene un elemento comparativo, que establece una relación con algo o alguien, es decir, ¿se recibe un tratamiento diferenciado desfavorable en relación a quién? En efecto, la lógica que se construye en torno a esa primera concepción corresponde a la existencia de una diferencia desfavorable que se convertirá en desventaja para ciertas personas y grupos. No es por casualidad, por ende, que dichas personas y colectividades sean aquellas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. La segunda faceta del artículo 14 del Convenio Europeo, como fue observado *supra*, se refiere a la ausencia de una justificativa objetiva y razonable para la discriminación y eso está vinculado al significado del término en análisis como sinónimo de desigualdad causada por prejuicios y estereotipos. La adopción de ese punto de vista subraya que las situaciones de desigualdad son el resultado de procesos sociales que tienen una dimensión colectiva, sistemática y estructural. La discriminación en estos términos no alude a las personas individualmente consideradas o a casos específicos y concretos, sino que está

---

<sup>76</sup> MORONDO TARAMUNDI, Dolores, “Abuso y aporías en el conflicto de derechos a no sufrir discriminación”, *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, Universidad de Valencia, Valencia, n.º 28, 2013, pág. 170 a 189, pág. 186.

<sup>77</sup> *Idem*, pág. 177-178. Artículo 14: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.

interiorizada en nuestro proceso de socialización, razón por la cual atraviesa todas las variables y ámbitos sociales, es difusa y condiciona normas, roles y pautas formuladas en términos aparentemente neutros, pero cuando son aplicadas en la realidad tiene un impacto negativo en determinados grupos.

En consonancia con las ideas presentadas, la relación entre vulnerabilidad y discriminación es expuesta por Ribotta de la siguiente forma: “la vulnerabilidad expresa una desigualdad y como tal, se manifiesta en una discriminación, con lo que mientras más profunda sea la vulnerabilidad mayor será la desigualdad sufrida y más amplia la discriminación que se produzca”<sup>78</sup>. En esta línea de argumento, queda patente el profundo vínculo entre vulnerabilidad y discriminación, de modo que los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad son los que recibirán un trato diferenciado, injusto e injustificado en cuanto al ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.

La discriminación vinculada a la vulnerabilidad, así, es aquella que, cómo observa Barrère Unzueta, no puede ser entendida como simple diferenciación de trato, sino como diferenciación injusta, “relativa a la desigualdad de trato grupal o entre individuos que pertenecen a grupos con distinto *status* o poder social”<sup>79</sup>. Son, por tanto, nociones que se sitúan dentro de las relaciones de poder existentes en el cuerpo social. De ahí que su manifestación se concreta a través de la categoría descrita por Young como opresión, en un uso que remarca su carácter estructural y designa las desventajas, injusticias e impedimentos sistemáticos que sufren algunos grupos<sup>80</sup>. La autora expone que “sus causas están insertas en normas, hábitos y símbolos que no se cuestionan, en los presupuestos que subyacen reglas institucionales”<sup>81</sup>, hábitos y reglas institucionales que en el contexto de la actuación policial están en el origen de violación de los derechos de las personas que integran los grupos en condición de vulnerabilidad.

Considerando la vulnerabilidad desde esta perspectiva, la desigualdad en términos de protección es uno de sus efectos más relevantes, de donde resulta fundamental

---

<sup>78</sup> RIBOTTA, Silvina, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia”, citado, pág. 12.

<sup>79</sup> BARRÈRE UNZUETA, María Ángeles, “Igualdad y discriminación positiva: Un esbozo de análisis teórico-conceptual”, *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, Universidad de Valencia, Valencia, n.º 9, 2003, pág. 1 a 27, pág. 13.

<sup>80</sup> YOUNG, Iris Marion, “Las cinco caras de la opresión”, citado, pág. 74.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

analizarla desde un marco igualitario. En este sentido, Ribotta explica que la obligación al trato igualitario a todas las personas viene recogida en el artículo 2º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con base a eso se justifica el estudio de la vulnerabilidad como elemento que genera la discriminación y, por consiguiente, interfiere en la realización de la justicia<sup>82</sup>. La discriminación, de tal manera, mitiga una serie de derechos y tiene consecuencias distintas conforme características personales y la pertenencia a uno u otro colectivo, haciendo que sus miembros sean invisibles no solo ante la ley, sino en cualquier situación de interacción social. Además, los mantiene atrapados en el círculo vicioso de la exclusión social y de la indiferencia. De ahí, una persona que no tiene reconocidos sus derechos o se enfrenta a obstáculos para accederlos, seguramente, se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Una forma de percibir la discriminación como resultado de la vulnerabilidad en términos prácticos es a partir de la desproporción<sup>83</sup>. Teniendo en cuenta la representación de las personas en la sociedad, hay determinados perfiles grupales que están más excluidos y que experimentan un ejercicio de derechos de modo distinto y desproporcional si se toma como modelo comparativo otros grupos sociales. La discriminación, entonces, se plasma estadísticamente entre diferentes grupos e introduce una forma de valorar la realidad social a partir de los números. Esa forma de observar la relación entre discriminación y vulnerabilidad es útil, sobre todo cuando se refiere al estudio de un contexto específico y prácticas delimitadas temporalmente, pues ambos puntos de vista son complementarios y llaman la atención sobre una realidad social concreta, aportando informaciones relevantes para la reflexión producida a partir de un marco teórico.

Tanto las causas de discriminación como las de vulnerabilidad son múltiples y si articuladas en conjunto potencian sus efectos y dan lugar a formas más graves e intensas,

---

<sup>82</sup> RIBOTTA, Silvina, “Grupos vulnerables”, citado, pág. 279. Artículo 2: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color de la piel, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.

<sup>83</sup> AÑÓN ROIG, María José, “Discriminación racial: el racismo institucional desvelado” en ARCOS RAMÍREZ, Federico, *La justicia y los derechos en un mundo globalizado*, Dykinson, Madrid, 2016, pág. 133 a 166, pág. 154.



especialmente cuando inciden en los grupos aquí tratados, razón por la cual son consideradas “condiciones agravantes de la vulnerabilidad” y, a su vez, “condiciones agravantes de la discriminación”<sup>84</sup>. Los efectos de la interacción de las diferentes estructuras de poder en la vida de las personas se centran en los procesos a través de los cuales los grupos experimentan formas múltiples de desigualdades, que se convierten en vulnerabilidades y discriminaciones.

En este sentido, Ribotta<sup>85</sup> expone, por medio de una serie de esquemas de combinaciones de características en distintos escenarios sociales de desigualdad, como el total de desventajas puede influir en el proyecto de vida de los seres humanos. Así, una mujer negra, pobre, nacional de un país africano, de religión musulmana y con una discapacidad, pues una mina antipersona le causó la amputación de una pierna, sufre las consecuencias de un conjunto de desigualdades generadas por cada característica o condición y también por el resultado de sus combinaciones. Dichas desigualdades, explica la autora, se profundizan en doble nivel: de manera individual –una a una– y global –teniendo en cuenta la articulación de todas las desventajas y el resultado significativamente más grave y desproporcionado comparado a otras personas que no se encuentran en la misma situación. En esta situación de “condiciones agravantes de vulnerabilidad”, la consideración de la pobreza es relevante porque empeora y agrava todas las demás desventajas que ya sufre la persona que reúne los rasgos mencionados. De tal manera, la pobreza no solo agrava la exclusión social, sino también imposibilita, en términos materiales, estrategias que permitan sobreponerse a ella, tal como será profundizado más adelante. Desde el ejemplo planteado y según sostiene Ribotta, el hecho de tener una situación económica que permita satisfacer las necesidades básicas y desarrollar las capacidades humanas probablemente modificará el nivel de vulnerabilidad y discriminación que sufrirá esa mujer, que todavía seguirá siendo grave pero no tan acentuado si la pobreza formara parte del esquema de combinaciones.

Las “condiciones agravantes de vulnerabilidad” descritas arribas, desde la perspectiva del modelo teórico elaborado por Crenshaw, también son experiencias de

---

<sup>84</sup> RIBOTTA, Silvina, “Grupos vulnerables”, citado, pág. 279.

<sup>85</sup> RIBOTTA, Silvina, *Las desigualdades económicas en las teorías de la justicia. Pobreza, redistribución e injusticia social*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010, pág. 60-62.

interseccionalidad<sup>86</sup>. Aunque la autora haya construido su propuesta a partir de la discriminación y violencia hacia las mujeres negras estadounidenses, sus ideas son un referente sobre cómo abordar las graves consecuencias de la combinación de distintos elementos de identidad y condiciones sociales que diferencian a las personas y fundamentan la organización de diversos grupos sociales, de manera que, sobre la base de tal modelo, es posible examinar contextos que abarcan otras dimensiones, como la orientación sexual, la identidad de género, el nivel socioeconómico, la condición de inmigrante, la religión o la discapacidad. Ese modo de lectura permite comprender de forma más clara y real cómo la incidencia de diferentes componentes de la diversidad humana en una misma persona da lugar a nuevas formas de desigualdades, discriminaciones, opresiones y vulnerabilidades. En esta línea, cabe recalcar que no se trata del resultado de un cálculo aritmético, sino de individuos que vivencian experiencias cualitativamente distintas en función de esa nueva conformación. El enfoque desde la interseccionalidad contextualiza las experiencias de las mujeres dentro de marcos sociales existentes y saca a la luz subjetividades multidimensionales, remarcando los diferentes significados para diferentes combinaciones de características y condiciones. Además, pone de manifiesto la complejidad de esas experiencias de identidad que son ocultadas por un análisis exclusivamente hecho a partir del género desde la consideración como único determinante del destino de las mujeres<sup>87</sup>.

Así, ya desde las “condiciones agravantes de la vulnerabilidad” o desde la interseccionalidad, cabe resaltar que los resultados de la articulación entre los diversos atributos y condiciones personales que acentúan ese estado de vulnerabilidad y la discriminación hacia personas o grupos se plasman de distintas maneras. Y, aunque hay muchas categorías de análisis y posibilidades de estudio, para este trabajo interesan especialmente tres: la pobreza, el sistema sexo/género y la etnia. La elección se justifica teniendo presente el eje central de esta investigación, el contexto brasileño y el lugar que ocupan dichas categorías en las prácticas policiales. Pobre, mujer, negra o negro son atributos que tanto aislados como combinados agravan las condiciones de vida de las

---

<sup>86</sup> CRENSHAW, Kimberle, “Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics”, citado, especialmente pág. 141-152, y “Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color”, citado, especialmente sobre malos tratos y violación véase pág. 1245-1251.

<sup>87</sup> ANG-LYGATE, Magdalene, “Trazar los espacios de la deslocalización. De la teorización de la diáspora”, en JABARDO, Mercedes (ed.), *Feminismos negros. Una antología*, Traficantes de Sueños, Madrid, pág. 291 a 313, pág. 293-294.

personas y dan como resultado múltiples vulneraciones de derechos humanos, una incidiendo de forma negativa sobre las otras y formando un círculo vicioso de vulnerabilidad, opresión, discriminación y desigualdades. De tal modo, resulta imprescindible ponerlas de relieve cuando se examina la actuación de los cuerpos de policía para señalar la deficiencia de las instituciones. Igualmente, arroja luz a la patente contradicción entre un modelo teórico de garantía de derechos y la realidad de los grupos en situación de vulnerabilidad. Por tal motivo, en esta primera etapa, se marcará la cuestión teórica vinculada a las tres categorías mencionadas, tratando de profundizarlas en el capítulo siguiente, en términos empíricos y desde un escenario específico, relacionándolas con la actuación de los cuerpos de seguridad brasileños.

Hay que precisar que utilizando como marco las tres categorías, se dará especial atención a las mujeres y a las personas negras, incidiendo la pobreza como causa transversal y condición estructural que acentúa el estado de vulnerabilidad en que se encuentran. Sobre la base de lo planteado y como fue explicado, el “estar” en una situación económica desfavorecida puede afectar aún más el desarrollo de las capacidades y el ejercicio de los derechos. De ahí que sea imprescindible para el estudio propuesto en esta investigación entender la pobreza desde sus raíces estructurales, como “condición que se presenta siempre de manera coyuntural y temporal, aunque según los escenarios sociales, lo profunda de los niveles en que se desarrolle la pobreza, el tipo de Estado de Derecho en el que vivan esos seres humanos y el tipo de modelo económico y social que detente, la pobreza se vivirá como una situación de coyuntura económica, de movilidad de clase social, o se presentará como una condición de la que es cuasi imposible escapar, que pasa a vivirse como permanente, y ya como *casta económica desaventajada*”<sup>88</sup>.

Finalmente, la última observación necesaria es que teniendo en cuenta la diversidad y complejidad interna de cada categoría, no se puede dejar de recordar, una vez más, la particular situación de las mujeres negras, cuestión que también debe ser considerada cuando se examina las prácticas policiales brasileñas. Desde esta perspectiva, se puede reflexionar sobre el ocultamiento de las cuestiones específicas de las mujeres negras a partir de lo representando por una idea que tal vez prevalezca en el imaginario

---

<sup>88</sup> RIBOTTA, Silvina, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia”, citado, pág. 28. Cursivas añadidas.

colectivo de que todas las mujeres son blancas y todos los negros son hombres<sup>89</sup> y su alcance no solo en el ámbito institucional de ejercicio de las funciones policiales, sino también de una forma más general, con respecto a la dinámica de la sociedad brasileña.

### 1.3.1 La pobreza como condición agravante de la vulnerabilidad

Si la discriminación y la vulnerabilidad están íntimamente conectadas e interactúan dentro de un círculo de causa y efecto, la pobreza tiene un peso importante en el mantenimiento y agravamiento de esta dinámica. Independientemente de la categoría con que se trabaja, es cierto que la pobreza representa la forma más profunda de violación de derechos y libertades fundamentales porque produce exclusión, impide su acceso y ejercicio y también determina la propia existencia de las personas que viven atrapadas en ella, pues puede llegar a constituir una real amenaza al derecho a la vida<sup>90</sup>. Estar empobrecido, en analogía al que hace Ribotta entre “estar vulnerable” y “estar empobrecido”<sup>91</sup>, significa estar excluido de la posibilidad de ejercicio de los derechos y de ocupar los mismos espacios físicos y simbólicos que otras personas. Significa estar en una posición de desventaja social, política y jurídica, atrapada o atrapado a una “casta económica desaventajada”, como fue subrayado en líneas anteriores. Significa, por ende, estar en situación de vulnerabilidad, en la cual la pobreza impedirá el desarrollo de las capacidades básicas y el ejercicio de la libertad real, creando desventajas no queridas<sup>92</sup>. Ante tal constatación, es importante subrayar que la pobreza se asocia tanto a privaciones de derechos económicos, sociales y culturales como a lesiones a los derechos civiles y

---

<sup>89</sup> En referencia a la antología organizada por HULL, Gloria T., PATRICIA, Bell Scott y SMITH, Barbara (eds.), *All the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave: Black women's studies*, The Feminist Press, New York, 1982.

<sup>90</sup> RIBOTTA, Silvina, “Pobreza, hambre y justicia en América Latina y el Caribe. Debatiendo sobre la justicia mientras 53 millones de latinoamericanos sufren hambre”, citado, pág. 170-172. La relación entre pobreza y derecho a la vida puede ser examinada, básicamente, desde dos perspectivas: una que se vincula a la privación crónica y continua de recursos, que conlleva enfermedades y hambre, en que el resultado final más grave será la muerte, y otra que se vincula a la manifestación de la violencia en contextos empobrecidos. Ese segundo enfoque queda patente cuando se analiza los índices de muertes violentas en Brasil, punto que será abordado en el siguiente capítulo. Desde la perspectiva de la efectividad del derecho a la vida, la pobreza interactúa con la “raza” y establece un perfil específico de víctimas: jóvenes negros y pobres.

<sup>91</sup> RIBOTTA, Silvina, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia”, citado, pág. 16.

<sup>92</sup> RIBOTTA, Silvina, *Las desigualdades económicas en las teorías de la justicia. Pobreza, redistribución e injusticia social*, citado, pág. 44-45.

políticos<sup>93</sup>. Desde los derechos sociales, la pobreza puede conllevar la violación del derecho a la salud o a la educación; ya desde el punto de vista de los derechos civiles, la pobreza puede comprometer el derecho a la vida.

La pobreza considerada en esta investigación es aquella contemplada a partir de la realidad de ciertos grupos y relacionada con otras perspectivas, es, por tanto, un estado que ata el género y la etnia a la condición social y como resultado la vulnerabilidad gana mayores proporciones y más persistentes. Las personas en situación de pobreza, además de la exclusión social, están marginadas del poder, del proceso político y de las esferas institucionales y “están” más vulnerables a sufrir las desigualdades y a “disponer de menos recursos materiales y sociales para abordarla o evitarla”<sup>94</sup>. Simplemente no existen o, si son vistas, lo son desde una mirada discriminatoria y de restricción de derechos.

Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad clasifican la pobreza como una de las causas de vulnerabilidad y de exclusión tanto en el plano económico como en los planos social y cultural. Ante tal presupuesto, el documento afirma que la pobreza supone un obstáculo para el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de las personas que se encuentran en esa situación, razón por la cual se debe promover la cultura o alfabetización jurídica y las condiciones para mejorar su efectivo acceso al sistema de justicia. Sobre ese aspecto, Ribotta afirma que “la pobreza aumenta y profundiza la vulnerabilidad ya sufrida, y califica a la misma de más gravosa aún frente al mismo supuesto cuando se difiere en la condición socioeconómica del que la padece”<sup>95</sup>. Examinar la pobreza como causa y efecto de las violaciones de derechos humanos y condición agravante de la vulnerabilidad pone de relieve sus múltiples resultados. La pobreza produce mayores lesiones y discriminaciones, convierte derechos en privilegios, estigmatiza, condiciona la vida de las personas a determinados hechos y crea muros que impiden no solo el acceso a los derechos, sino hace que siquiera sean consideradas sujetos de estos. Dentro del espacio construido por la pobreza, las diversas vulnerabilidades interaccionan y como consecuencia los individuos que allí se encuentran no tienen cualquier perspectiva social,

---

<sup>93</sup> GUIÑAZÚ, Claudio E., “Pobreza, vulnerabilidad y derechos humanos”, citado, pág. 106.

<sup>94</sup> RIBOTTA, Silvina, “Pobreza, hambre y justicia en América Latina y el Caribe. Debatiendo sobre la justicia mientras 53 millones de latinoamericanos sufren hambre”, citado, pág. 157.

<sup>95</sup> RIBOTTA, Silvina, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia”, citado, pág. 4.

política, económica o jurídica y tampoco disponen de estrategias para superar la discriminación y la exclusión que sufren por pertenecer a un grupo económicamente desfavorecido<sup>96</sup>.

Reflexionar sobre cómo la pobreza afecta a los grupos en situación de vulnerabilidad también significa constatar el peso de las desigualdades en la vida de las personas, especialmente las económicas, entendidas como desigualdades que se refieren “al acceso y disponibilidad de recursos satisfactorios de las necesidades para el desarrollo de las capacidades humanas, que generalmente se vinculan al ingreso y a las riquezas de que dispongan las personas”<sup>97</sup>. Como factor que predispone la pobreza, las desigualdades económicas dan lugar a un crecimiento exponencial de otras desigualdades y tornan aún más complejas y profundas la situación de desventaja y fragilidad social, económica, política y jurídica de integrantes de dichos grupos. Es importante enfatizar, sin embargo, que la pobreza no significa solamente ausencia de recursos económicos. Más que su definición en términos numéricos y objetivos, es un concepto relacional –pues siempre se está pobre en comparación con otras personas–; contextual –pues está situada en determinado escenario social, político y económico– y multidimensional –pues comprende no solo la exclusión, sino también una combinación de factores económicos, políticos y sociales<sup>98</sup>–. Independiente de cómo se la contempla, es cierto que no está vinculada a la responsabilidad individual, sino social, en sentido similar a la vulnerabilidad. El problema, por tanto, es de distribución de recursos y de inequidad en el acceso a los bienes entre las personas que componen una sociedad, excluyendo algunas de ellas económica, social y jurídicamente de un sistema que, aparentemente, tiene como fundamento la igualdad. De ahí que la desigualdad en la distribución y acceso se manifestará “en la calidad de vida en general, en el acceso a educación, en la atención a la salud, en las oportunidades de empleo, en la protección de los derechos humanos, en el acceso al poder, en la representación política”<sup>99</sup> y, de acuerdo con los ejes de esta

---

<sup>96</sup> RIBOTTA, Silvina, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia”, citado, pág. 20.

<sup>97</sup> RIBOTTA, Silvina, “Pobreza, hambre y justicia en América Latina y el Caribe. Debatiendo sobre la justicia mientras 53 millones de latinoamericanos sufren hambre”, citado, pág. 156.

<sup>98</sup> GUÍÑAZÚ, Claudio E., “Pobreza, vulnerabilidad y derechos humanos”, citado, pág. 112.

<sup>99</sup> RIBOTTA, Silvina, *Las desigualdades económicas en las teorías de la justicia. Pobreza, redistribución e injusticia social*, citado, pág. 17.

investigación, también en la relación con el Estado, especialmente con sus cuerpos de seguridad.

En este sentido, pertinente lo expuesto por Sen sobre pobreza y su vínculo con la imposibilidad de desarrollo y ejercicio de las capacidades humanas básicas<sup>100</sup>. Es, así, un problema de privación, que afecta diversas esferas de la vida de las personas, causa exclusión social y potencia la violación de los derechos, razón por la cual no se refiere solamente a indicadores objetivos, como la cantidad de ingresos<sup>101</sup>. No atañe, por esta razón, exclusivamente a desigualdad de la renta de cada persona o grupo familiar, sino se refiere a un conjunto de factores que impide que se alcancen niveles mínimos aceptables para el bienestar y el desarrollo de las capacidades básicas de cada ser humano.

Finalmente, hay que recalcar que, aunque vulnerabilidad y pobreza sean conceptos que caminen lado a lado y tengan puntos comunes, no se confunden y actúan de forma distintas. La vulnerabilidad como resultado de la coexistencia de circunstancias sociales y características personales no es privativa de los sectores más pobres de la sociedad. Es, al contrario, un trazo distintivo de determinados grupos y, dentro de ese universo de grupos, la pobreza agudiza la situación de desventaja en que ya se encuentran las personas que los conforman. Por ese motivo, hay que considerar la pobreza como estado transversal a las demás características personales y sociales, siempre teniendo en cuenta su capacidad de empeorar circunstancias por sí mismas graves desde el punto de visto de la exposición a la vulnerabilidad y, siguiendo a Ribotta, de ser la condición de desigualdad social que más impacta en su efecto vulnerabilizador y discriminador<sup>102</sup>. Así, la vulnerabilidad por pobreza y la desigualdad por pobreza tienen un efecto agravante a la ya discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y las personas negras.

---

<sup>100</sup> SEN, Amartya, “Sobre conceptos y medidas de pobreza”, *Revista Comercio Exterior*, vol. 42, n.º 4, 1992, en <http://tinyurl.com/ycrlaoh>.

<sup>101</sup> A propósito de la pobreza como privación de capacidades, véase RIBOTTA, Silvina, *Las desigualdades económicas en las teorías de la justicia. Pobreza, redistribución e injusticia social*, citado, especialmente pág. 77-87.

<sup>102</sup> RIBOTTA, Silvina, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia”, citado, pág. 30.

### 1.3.2 El sistema sexo/género como condición agravante de la vulnerabilidad

A partir del sistema sexo/género es posible examinar las causas de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres y la manifestación de la vulnerabilidad entendida como noción socioestructural en este contexto. Desde lo planteado por Rubin, la mencionada denominación representa la manera por la cual una sociedad organiza la sexualidad biológica y transforma su resultado en impedimentos, posibilidades, obligaciones y derechos distintos para las hembras y los machos de la especie humana<sup>103</sup>. En esta línea, la autora atribuye a la sexualidad un lugar relevante para la comprensión de las diferencias entre las experiencias vividas por mujeres y hombres en la sociedad, subrayando que es una división impuesta socialmente<sup>104</sup>.

Al tratar el sistema sexo/género como elemento de la dinámica que genera y acentúa la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, por ende, es necesario puntualizar que el fundamento de la desigualdad que lo caracteriza se construye a partir de un elemento biológico asociado a una representación construida social, política, cultural y jurídicamente del sexo. Desde tal afirmación, el sistema de patriarcal, elaborado sobre la base de la supremacía histórica de los hombres en oposición a la dominación y exclusión de las mujeres en determinadas esferas sociales y de poder, conlleva un conjunto de desigualdades que se extienden por todos los aspectos de sus vidas y que están impregnadas en todas las estructuras sociales. La división impuesta socialmente comentada en el párrafo anterior, de tal modo, asigna roles, espacios, tareas, derechos, obligaciones y prestigio de manera desigual cuando se mira quién es la persona a que se le atribuye todos esos elementos<sup>105</sup>.

Las desigualdades generadas por ese sistema de subordinación sistémica, opresión y discriminación, marcado por largos periodos de excepción de derechos, caminan en diversas direcciones y una de ellas va hacia la vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, se constata la íntima relación entre mujeres y vulnerabilidad socioestructural, cuyo resultado

---

<sup>103</sup> RUBIN, Gayle, “El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo”, trad. de Stela Matrangelo, *Revista Nueva Antropología*, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, vol. 8, número 30, México, 1986, pág. 95 a 145, pág. 97.

<sup>104</sup> *Idem*, pág. 114.

<sup>105</sup> MAQUIEIRA D’ANGELO, Virginia, “Género, diferencia y desigualdad” en BELTRÁN, Elena y MAQUIEIRA D’ANGELO, Virginia (eds.), *Feminismos: debates teóricos contemporáneos*, Alianza, Madrid, 2012, pág. 127 a 190, pág. 163.



será la desventaja, la exclusión social y la marginación del poder, del proceso político y de las esferas institucionales. La negación o la desigual distribución de poder a las mujeres, atribuyéndolo al conjunto de características exclusivamente masculinas las colocó en una posición de opresión, en particular, de explotación, puesto que tanto el fruto del trabajo material como las energías sexuales y de crianza fueron transferidas a los hombres, beneficiándolos<sup>106</sup>. La exclusión del poder, por ende, vino acompañada de un sistemático proceso de explotación y dio lugar a la producción de una serie de desigualdades injustas que dejaron a las mujeres en permanente situación de desventaja.

Analizar la situación de vulnerabilidad no solo de las mujeres, sino también de otros grupos sociales desde el punto de vista de la carencia de poder, de acuerdo con lo que propone Young como otra de las “caras de la opresión”, pone de manifiesto una relación fundamental para comprender qué significa “estar” vulnerable, dado que la vulnerabilidad socioestructural también es una manifestación de la ausencia de poder. Los grupos que carecen de poder se enfrentan a grandes dificultades para desarrollar y usar sus capacidades, asimismo para lograr el reconocimiento como sujetos de derechos en las mismas condiciones de individuos que pertenecen a grupos no oprimidos<sup>107</sup>. Otro punto relevante asociado a la ausencia de poder es la menor o ninguna valoración en relación con la respetabilidad y con el discurso de las personas que integran los grupos oprimidos. Young formula sus planteamientos, en particular, acerca de la respetabilidad profesional, sin embargo el trato no respetuoso se expande a todas las esferas de la vida de dichas personas, incluso las institucionales<sup>108</sup>. El trato y el valor que se da al discurso de cada ser humano, por consiguiente, serán mayor y más creíble de acuerdo con determinadas características personales o condiciones sociales. Lo afirmado puede ser observado en términos prácticos en la descalificación del discurso de las mujeres cuando relatan crímenes sexuales ante las autoridades públicas o en la asociación del femenino, no importa en qué campo, al ofensivo, al negativo, a la fragilidad y al que tiene menor valor.

De ahí que la discriminación que sufren por el hecho de ser mujer influye en su desarrollo humano, sus experiencias personales y en la construcción de sus planes de vida, que ocurre de forma distinta, es decir, peor, para poner en claro, respecto a los hombres.

---

<sup>106</sup> YOUNG, Iris Marion, “Las cinco caras de la opresión”, citado, pág. 89.

<sup>107</sup> *Idem*, pág. 99.

<sup>108</sup> *Idem*, pág. 101-102.

Son peores condiciones sociales, laborales, domésticas, de salud, educativas y económicas, que las convierten en personas especialmente vulnerables ante las violaciones de derechos humanos por su género asociado a la etnia, edad, religión, orientación sexual, ingresos u otras circunstancias. Por tal razón, y poniendo de manifiesto que las desigualdades materiales experimentadas por las mujeres son el resultado de la discriminación estructural que califican sus vidas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés y en adelante) define, en su primer artículo, en términos amplios la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

La asimetría estructural del sistema sexo/género con respecto a las mujeres también se manifiesta en una forma específica, cruel y más grave de violencia hacia ellas, en que el feminicidio es el resultado más extremo<sup>109</sup>. En este contexto es donde el estado de vulnerabilidad que acompaña sus vidas, en mayor o menor nivel y de distintas formas siempre teniendo en cuenta la diversidad que existe internamente en los grupos, revela su cara más evidente. La violencia, así, está dirigida a las mujeres simplemente porque son mujeres y como subraya Young: “la opresión de la violencia consiste no solo en la persecución directa, sino en el conocimiento diario compartido por todos los miembros de los grupos oprimidos de que están predispuestos a ser víctimas de la violación, solo en razón de su identidad de grupo”<sup>110</sup>. La violencia como práctica social y sistemática, por tanto, así como la condición de la vulnerabilidad tiene un fuerte vínculo con todo lo que representa ser mujer y desde ahí es cierto que a partir del sistema sexo/género se produce una forma más agravada de vulnerabilidad.

Una segunda posibilidad de análisis cuando se aborda el sistema sexo/género es en relación con el colectivo formado por las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, que tienen en común cuestiones relacionadas con la

---

<sup>109</sup> LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, “Del femicidio al feminicidio”, *Desde el jardín de Freud*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, n.º 6, 2006, pág. 216 a 225, pág. 217.

<sup>110</sup> YOUNG, Iris Marion, “Las cinco caras de la opresión”, citado, pág. 108.

sexualidad humana, como la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual y el sexo biológico<sup>111</sup>. Son aspectos distintos y que afectan de forma diversa a la vida de sus integrantes: mientras la orientación sexual se refiere a lesbianas, gays y bisexuales, la identidad de género corresponde a las personas transexuales. A su vez, las personas intersexuales son aquellas que nacen con una anatomía reproductiva o sexual que no parece ajustarse a las definiciones típicas de femenino o masculino y, por ello, se vinculan a conformación del sexo biológico y a la construcción cromosómica fuera del estándar XX y XY<sup>112</sup>.

Es importante poner de relieve que el hecho de que todas estas personas estén unidas bajo un único término, el acrónimo LGBTI+<sup>113</sup>, no significa que tengan las mismas demandas o dificultades o se encuentren en la misma posición de vulnerabilidad. Una vez más se subraya la existencia de diferencias intragrupal y la formación de grupos dentro de otros grupos, con luchas, reivindicaciones y desafíos distintos, lo que conlleva una lectura particular y no uniforme de la situación de cada uno. A título ejemplificativo, se puede mencionar el colectivo transexual que, aunque numéricamente pequeño, es uno de los que más sufren discriminación en términos generales y tiene mayor probabilidad de que sus miembros sean impedidos de ejercer sus derechos. De este modo, las cuestiones planteadas por las personas transexuales son distintas de aquellas que se relacionan con la orientación sexual, pues abarcan el libre ejercicio del derecho a la identidad, cómo

---

<sup>111</sup> En lo que atañe a este trabajo, cabe observar que la relación entre los cuerpos policiales y los colectivos mencionados es compleja y está marcada por numerosas violaciones de sus derechos, de forma que no se puede dejar de comentar, aunque brevemente, su especial situación de vulnerabilidad, no solo en tal ámbito, sino en los demás de sus vidas, cuando se aborda el sistema sexo/género como condición que la agrava. Como ejemplo de prácticas policiales que violan sus derechos, se puede mencionar el cacheo de las personas transexuales sin respetar su identidad de género, la dificultad para identificar un delito motivado por la orientación sexual e identidad de género como delito de odio y la ausencia de datos específicos sobre dichos delitos. Sin embargo la relevancia del tema y la pertinencia de su estudio, sobre todo teniendo en cuenta la formación en derechos humanos para los cuerpos de policía, profundizar esa cuestión excede los objetivos de esta investigación. Sobre la situación de vulnerabilidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales consúltese GRACIA IBÁÑEZ, Jorge, “Autonomía y vulnerabilidad de las personas LGBT: orientación sexual, identidad de género y derechos humanos” en BARRANCO AVILÉS, María del Carmen y CHURRUCA MUGURUZA (eds.), *Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 101 a 138. Acerca de las personas intersexuales, véase GARCÍA LÓPEZ, Daniel J., “Biotecnologías del cuerpo intersexual: Una hipótesis para construir garantías jurídicas” en ROMAY COCA, Juan y VALERO MATAS, Jesús A. (coords.), *El hilo de Ariadna en la sociedad del conocimiento*, Ceasga, Soria, 2016, pág. 76 a 98.

<sup>112</sup> GARCÍA LÓPEZ, Daniel J., “La intersexualidad en el discurso médico-jurídico”, *Eunomía*, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, n.º 8, 2015, pág. 54 a 70, pág. 55-56.

<sup>113</sup> El signo más es utilizado para señalar que la diversidad sexual humana no está restringida a las letras que forman el acrónimo e incluir otras colectividades e identidades.

ponerse delante del mundo y cómo expresar su identidad de género de acuerdo con su vivencia y sentimientos personales, de forma que no se confunde con la atracción física, sexual o afectiva que se puede sentir hacia otra persona, que se refiere a la orientación sexual.

Uno de los aspectos que señala la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran los miembros de esos grupos es el significativo índice de violencia practicada hacia sus cuerpos e identidades, como humillaciones públicas, asesinatos, agresiones físicas, incluyendo mutilaciones, violencia sexual y tortura, lo que hace visible el rechazo a la diferencia, a la autodeterminación del propio género y al libre ejercicio de la orientación sexual. Entre la impunidad de los delitos practicados contra ellas en ciertos países y la persecución penal por agentes estatales en otros en razón de la orientación sexual o de la identidad de género, los grupos formados por lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales reúnen personas que no son consideradas sujetos de derechos. De ahí, son víctimas tanto porque sufren una violencia como porque la forma como está organizado el Estado y sus normas las coloca en esa posición.

Por estar fuera del patrón de lo que se considera “normal”, son grupos que están expuestos a una situación particular de intolerancia y violencia y que tienen más posibilidades de que sean víctimas de crímenes de odio. El hecho de que al menos 76 países mantienen leyes de criminalización y hostigamiento contra personas con motivo de orientación sexual e identidad de género y algunas de ellas sean castigadas con pena de muerte señala la gravedad de la realidad de esos grupos<sup>114</sup>. En este sentido, importa puntualizar que aunque en países donde no haya este tipo de legislación, muchas personas también se enfrentan a la intolerancia y a la violencia diaria y son asesinadas en razón de su orientación sexual o identidad de género. Si bien la violencia no es ejercida explícitamente por el Estado, este, por medio de mecanismos discriminatorios encubiertos, invisibilidad de los delitos de odio e impunidad de los responsables concurre para que la situación de vulnerabilidad perdure<sup>115</sup>.

---

<sup>114</sup> COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR), *Discriminación y persecución por orientación sexual e identidad de género: el camino hacia una vida digna*, CEAR, Madrid, 2015, pág. 14.

<sup>115</sup> De acuerdo con el monitoreo realizado por *Transgender Europe* (TGEU) acerca de la situación de las personas transexuales en 69 países, entre 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2016 fueron asesinadas 2343 personas. Brasil presenta el mayor índice de asesinatos en números absolutos, fueron 936 casos. El segundo país en la relación de la organización no gubernamental es México, con 290 casos

De todo lo anterior se deduce que las oportunidades que esas personas tienen para el reconocimiento y realización de sus derechos, respetabilidad ante en cuerpo social y posibilidades de construir trayectorias personales libremente son inferiores si son comparadas a las personas que se ajustan al régimen heteronormativo, que corresponde a la naturalización o normalización de la heterosexualidad, tratándola como obligatoria<sup>116</sup>. Por consiguiente, las necesidades del colectivo en referencia son superiores a otras que presentan un patrón de comportamiento, una identidad de género o una orientación sexual que estén de acuerdo con dicho régimen.

### 1.3.3 La etnia como condición agravante de la vulnerabilidad

Las aclaraciones terminológicas y conceptuales expuestas en el apartado introductorio de este trabajo aportan informaciones útiles para comprender el motivo por el cual ciertas grupos “están” en situación de vulnerabilidad y cómo sufren los efectos visibles de la discriminación institucionalizada en la medida que características como el color de la piel y otros rasgos fenotípicos definen la expectativa y el modo de vida de cada individuo. A esas personas les fue atribuido un estatus permanente de segunda clase, en la que estaban real y simbólicamente confinadas a determinados lugares, los menos valorados y depreciados, en la sociedad. Asimismo, se les asociaron a determinados estereotipos, roles, lugares y representaciones, como el servilismo, la falta de autonomía, la delincuencia o la designación como un ser sexual, prostituible, exótico y erótico<sup>117</sup>.

La etnia, como el sistema sexo/género, por ende, es una estructura de opresión y los comentarios sobre la teoría de Young acerca de la condición de las mujeres también deben ser considerados cuando se analiza los motivos por los cuales el colectivo negro “está” vulnerable. La explotación de las mujeres por parte de los hombres da lugar a la explotación del grupo social formado por personas negras, las cuales tienen sus energías

---

(TRANSGENDER EUROPE (TGEU), *Trans Day of Visibility 2017 Press Release*, en <http://transrespect.org/en/tdov-2017-tmm-update>.

<sup>116</sup> GRACIA IBÁÑEZ, Jorge, “Autonomía y vulnerabilidad de las personas LGBT: orientación sexual, identidad de género y derechos humanos”, citado, pág. 104.

<sup>117</sup> Especialmente con respecto a las mujeres negras, véase QUINTAS, Fátima (org.), *Mulher Negra: Preconceito, sexualidade e imaginário*, Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) y Massangana, Recife, 1995. Desde una perspectiva histórica, consúltese “Continued devaluation of black womanhood” en HOOKS, bell, *Ain't I a woman: black women and feminism*, citado, pág. 51 a 86.

desposeídas en beneficio de otras, que aumentan su poder y riqueza<sup>118</sup>. En este sentido, Young subraya que la forma de explotación con base en la “raza” puede ser conceptualizada a partir del trabajo de servir al grupo privilegiado, no solo concretizado por el trabajo doméstico y sexual, sino también por trabajos pesados o de escasa preparación intelectual<sup>119</sup>. De ahí que la transferencia de energías para beneficiar a otro grupo, que ya detiene una serie de beneficios, genera distribuciones desiguales de bienes, recursos y poder, profundizando aún más la brecha histórica de desigualdades entre los grupos.

Otra manifestación de la opresión descrita por Young en relación con las personas negras es la marginación, puesto que como resultado de la explotación y de la jerarquización social por criterios físicos, por un lado, se les privó de la participación útil en la sociedad, sujetándoles a graves privaciones materiales, y por otro, se les privó de derechos y del reconocimiento de su titularidad<sup>120</sup>. La privación, por tanto, es un hecho recurrente en la historia de la marginación sufrida por la población negra durante y después del fin del sistema esclavista colonial, como es posible observar a partir del escenario brasileño, descrito más adelante. Privación también educativa, económica, sanitaria, cultural e institucional para el desarrollo de sus capacidades y planes de vida, que se vincula, profundamente, a la carencia de poder, de la misma forma en que fue descrita en relación a las mujeres.

Desde las caras de la opresión, no se puede perder de vista los efectos de la violencia sistemática también sobre las personas negras. Interpretado por Young como un fenómeno de injusticia social, es decir, como existencia en tanto práctica social y no simplemente como un conjunto de actos particulares, las múltiples formas de violencia practicadas hacia ese grupo van desde humillaciones e intimidaciones hasta el exterminio de sus cuerpos por el hecho de pertenecer a ese colectivo<sup>121</sup>. Desde esta perspectiva, es imprescindible tener en cuenta quiénes son los agentes responsables de esos actos, pues

---

<sup>118</sup> YOUNG, Iris Marion, “Las cinco caras de la opresión”, citado, pág. 88.

<sup>119</sup> *Idem*, pág. 91-92.

<sup>120</sup> *Idem*, pág. 94-95.

<sup>121</sup> *Idem*, pág. 107.

no se puede ignorar que parte de ellos son integrantes de los cuerpos de policía durante el ejercicio de sus funciones.

Las categorías comentadas señalan que la experiencia de vivir la negritud es compleja, desigual e injusta y constituyen un proceso que también se vincula a la discriminación racial. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial la define como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. A propósito del concepto institucional de discriminación racial y en complemento con la posición adoptada en este trabajo en cuanto a la terminología relacionada con la comunidad negra, Añón Roig sostiene que tal definición “no parte de bases biológicas o genéticas, sino fundamentalmente sociales, culturales y psicológicas”, lo que también puede ser observado en el preámbulo del documento<sup>122</sup>.

Un punto fundamental cuando se discute la situación de vulnerabilidad de las personas negras es la experiencia vivida, particularmente, por las mujeres. Las mujeres negras pasan por experiencias vitales que no son exactamente las mismas de las mujeres blancas o de los hombres negros, ya que sufren el impacto simultáneo de la combinación entre género y “raza” y, por tal motivo, la importancia en abordar esa situación desde la interseccionalidad. Las dinámicas sociales del sexismo y del racismo se unen y crean experiencias y desafíos únicos para esas mujeres, pues, como subraya hooks, no solo las colocan en el fondo de la pirámide ocupacional, sino también les confieren un estatus social más bajo que el de cualquier otro grupo social<sup>123</sup>. Desde esta posición única, la citada autora argumenta que las mujeres blancas y los hombres negros pueden ser tanto opresores como oprimidos, pues “los hombres negros pueden ser víctimas del racismo, pero el sexismo les permite actuar como explotadores y opresores de las mujeres. Las

---

<sup>122</sup> AÑÓN ROIG, María José, “Discriminación racial: el racismo institucional desvelado”, citado, pág. 138. Según el preámbulo: “(...) toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial”.

<sup>123</sup> HOOKS, bell, “Mujeres negras: dar forma a la teoría feminista” en AA. VV., *Otras inapropiables*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2004, pág. 33 a 50, pág. 49.

mujeres blancas pueden ser víctimas del sexismo, pero el racismo les permite actuar como explotadoras y opresoras de la gente negra”<sup>124</sup>. De tal modo, aunque sea una colectividad heterogénea, las mujeres negras se enfrentan a especificidades y retos comunes, ya que su historia fue construida de forma distinta de las blancas en términos de feminidad, sexualidad, cualidades atribuidas y valoradas y de la propia definición sobre qué significa ser mujer, razón por la cual se debe tener en cuenta sus perspectivas y su voz cuando se aborda la situación de vulnerabilidad del grupo que es objeto de análisis de ese apartado.

En esta línea de argumento, la Recomendación General XXV sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, reconoce que ciertas formas de discriminación racial repercuten únicamente sobre las mujeres, poniendo de manifiesto en su punto 1 que: “la discriminación racial no siempre afecta a las mujeres y a los hombres en igual medida ni de la misma manera. Existen circunstancias en que afecta únicamente o en primer lugar a las mujeres, o a las mujeres de distinta manera o en distinta medida que a los hombres. A menudo no se detecta si no se reconocen explícitamente las diferentes experiencias de unas u otros en la vida pública y privada”. De ahí, la interseccionalidad intensifica la percepción sobre cómo las mujeres negras desarrollan sus vidas y se relacionan con el entorno que les rodea, asimismo expone las circunstancias trágicas a que son sometidas en todos los ámbitos, incluso en las prácticas que se vinculan a la actuación de los cuerpos de policía. En este sentido, la violencia policial contra las mujeres negras es real y se manifiesta principalmente sobre las más empobrecidas, como será analizado en el capítulo siguiente.

---

<sup>124</sup> HOOKS, bell, “Mujeres negras: dar forma a la teoría feminista” en AA. VV., *Otras inapropiables*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2004, pág. 33 a 50, pág. 49.



## **CAPÍTULO 2. MUJERES Y PERSONAS NEGRAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS CUERPOS POLICIALES EN BRASIL**

El estudio de los grupos en situación de vulnerabilidad elegidos para esta investigación y desde los términos planteados exige situarlos en un determinado contexto y realidad concreta. Para ello, es imprescindible examinar previamente qué significa ser un grupo en dicha condición en Brasil, un país que tiene como una de las marcas que lo define la desigualdad. Desigualdad construida a partir de factores económicos, políticos, culturales, raciales, sociales y de ejercicio y acceso a los derechos. Para el enfoque propuesto, será utilizado el último informe del PNUD, con la finalidad de establecer un panorama general del escenario de desigualdad a partir de los datos relativos al desarrollo humano. Con base en dichos datos, se analizará, concretamente, cómo la desigualdad actúa en la vida de las personas que conforman los grupos en estado de vulnerabilidad en razón del hecho de ser mujer y pertenecer a la comunidad negra según la actuación de los cuerpos de policía.

De acuerdo con el informe de PNUD, Brasil, integrante del grupo de países con “desarrollo humano alto”, ocupa la 79ª posición en el Índice de Desarrollo Humano (en adelante, IDH) en la relación de los 188 países evaluados<sup>125</sup>. La pertenencia al mencionado grupo, sin embargo, no puede enmascarar el hecho de que es uno de los países más desigualitarios del mundo, con una amplia brecha entre pobreza y riqueza y todos los crueles efectos que se generan a partir de esa situación, que pueden ser observados también desde la óptica del sistema sexo/género y de la etnia. Los datos del Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (en adelante, IDH-D) demuestran que Brasil forma parte del grupo de los diez países que concentran los mayores índices de desigualdad, lo que hace que descienda diecinueve posiciones en la

---

<sup>125</sup> El IDH, más allá de tener en cuenta exclusivamente los ingresos de la población de una nación para examinar sus condiciones de bienestar, se centra en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: tener una vida larga y saludable; la capacidad de adquirir conocimientos y la capacidad de lograr un nivel de vida digno. Cada una de esas dimensiones es medida por un componente del índice, respectivamente: longevidad (expectativa de vida al nacer), educación e ingresos de la población. El componente relativo a la educación se divide en dos indicadores: años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad. Los puntos de corte se establecen en valores de IDH inferiores a 0,550, lo que corresponde a países del grupo “desarrollo humano bajo”; 0,550-0,699, relativo al “desarrollo humano medio”; 0,700-0,799 para “desarrollo humano alto” y 0,800 o más para países con “desarrollo humano muy alto”. En el caso de Brasil, el valor del IDH es 0,754. (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano 2016*, PNUD, Nueva York, 2016, pág. 3, 194 y 201).

clasificación del IDH: la distribución de la desigualdad en Brasil, de acuerdo con el IDH-D, sigue una línea creciente con respecto a la longevidad (un 14,4%), educación (un 22,6%) e ingresos (un 37,8%)<sup>126</sup>. Los números confirman la relación entre las disparidades en cuanto a los ingresos y la desigualdad económica y dan lugar a distintos modos, siempre peores e injustos, de desarrollo de las condiciones de vida de las brasileñas y los brasileños.

En este punto cabe subrayar que la relación entre desigualdad de ingresos y desigualdad económica no es sinónima, sino que se desarrolla en diferentes niveles, en que la primera es apenas uno de los componentes de la segunda, esa sí que se refiere al acceso a la disposición de los satisfactores adecuados para el desarrollo de los funcionamientos básicos y capacidades personales<sup>127</sup>, entre los cuales las dimensiones que integran el IDH. El IDH-D es la cara empírica de la construcción teórica presentada en el capítulo anterior sobre el vínculo indisoluble entre pobreza, derechos humanos y vulnerabilidad. La pobreza que se manifiesta en contextos de desigualdades económicas, por ende, es transversal a cualquier situación de vulnerabilidad asociada al sistema sexo/género o la etnia y aunque no esté presente en todas ellas, es cierto que si se manifiesta el estado de amenaza o de daño será más grave y perjudicial.

Si por un lado Brasil sigue siendo uno de los países más desigualitarios del mundo, por otro el porcentaje y el número de personas en situación de pobreza por ingresos se redujeron significativamente entre 2003 y 2013: de América Latina y Caribe, fue el país que concentró la mitad del descenso regional de la pobreza por ingresos experimentado en ese periodo, con una reducción superior a 37 millones de personas<sup>128</sup>. El dato positivo

---

<sup>126</sup> El IDH-D puede interpretarse como el nivel de desarrollo humano cuando se tiene en cuenta la desigualdad. El índice considera la desigual distribución en materia de longevidad, educación e ingresos entre la población, que no ocurre de la misma forma para todas y todos, y tiene por objetivo retratar de modo más fidedigno los distintos matices de la realidad de un país. La diferencia relativa entre el IDH-D y el IDH es la pérdida debida a la desigualdad en la distribución del IDH en el país. En conclusión, cuantas más desigualdades existen entre los habitantes de un país, más diferencias habrá entre los dos índices, como pasa en Brasil. Con referencia a Brasil, el IDH-D es 0,561 y la pérdida total teniendo en cuenta el IDH es un 25,6% (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano 2016*, citado, pág. 194 y 209).

<sup>127</sup> RIBOTTA, Silvina, “Pobreza, hambre y justicia en América Latina y el Caribe. Debatendo sobre la justicia mientras 53 millones de latinoamericanos sufren hambre”, citado, pág. 157.

<sup>128</sup> PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), *Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe. Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso*, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, 2016, pág. 51-52. Para más detalles sobre la reducción de la pobreza en Brasil véase pág. 61-62.

se plasma en mejores condiciones para el desarrollo humano, con todo debe ser interpretado en conjunto con otros elementos que retratan la realidad brasileña y una de las posibilidades es a partir de las relaciones institucionales con la ciudadanía, puesto que la disminución en mayor medida del número de personas que se encuentran en el rango de la pobreza no se traduce directamente en efectividad para la fruición de los derechos o enfrentamiento de la situación de vulnerabilidad de los grupos sociales. Lo afirmado puede ser constatado a partir de otros datos presentados por PNUD con respecto a la “condición étnico-racial afrodescendiente”, puesto que se la asocia a menor probabilidad de salir de la pobreza por ingresos. Según el informe, en cuanto a las personas negras en Brasil esa probabilidad se reduce 7,3 puntos porcentuales<sup>129</sup>, lo que indica cómo la fusión de la condición socioeconómica y la condición racial afecta al colectivo negro y demuestra que las personas que conforman ese grupo no se beneficiaron de la misma manera que el resto de la población en cuanto al progreso socioeconómico de los últimos años.

Expuestos el escenario y las condiciones generales de desigualdad de la población brasileña, el enfoque adoptado se centrará en el objeto de estudio de esta investigación y, a partir del contexto descrito en los párrafos anteriores, se expondrá cómo se concreta la desigualdad desde la perspectiva de los grupos elegidos y, particularmente, su relación con los cuerpos de policía brasileños. De tal modo, dentro del marco de la vulnerabilidad establecido en el primer capítulo, la reflexión propuesta partirá de la siguiente pregunta: ¿Qué significa “estar” vulnerable en Brasil ante la actuación de los cuerpos de policía?

Cabe aclarar, inicialmente, que la labor policial no incluye únicamente cuestiones de seguridad pública y de derecho penal y procesal penal, sino también aquellas vinculadas al impacto de sus tareas en el cuerpo social, sobre todo con respecto a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Eso supone afirmar que además del uso legítimo de la fuerza, de la investigación de un delito, su autoría y materialidad, o del encargo por efectuar el patrullaje de las calles, las prácticas policiales muchas veces interfieren, de forma negativa y excluyente, en el acceso y fruición de los derechos de integrantes de dichos grupos y agravan el estado de vulnerabilidad de personas que ya se

---

<sup>129</sup> PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), *Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso*, citado, pág. 70.

encuentran en una situación de desventaja. En este sentido actúan como productoras y reproductoras de discriminaciones, injusticias y mantienen estereotipos y prejuicios hacia dichos colectivos. Desde esta perspectiva, aunque la existencia de un marco jurídico de derechos humanos y la previsión de la dignidad humana como fundamento constitucionalmente garantizado, el Estado brasileño presenta elevados índices de violaciones cometidas por el personal policial durante la realización de sus actividades, razón por la cual es importante analizar las consecuencias de esa forma de actuar sobre los colectivos elegidos y cómo construir cambios a partir de la formación de los miembros de los mencionados cuerpos.

Teniendo en cuenta el enfoque de este trabajo, el estado de vulnerabilidad de las personas que integran los grupos elegidos ante la actuación de los cuerpos de policía se manifiesta de diversas maneras, tales como: invisibilidad en las prácticas policiales y políticas institucionales de seguridad pública, falsa neutralidad de género o de origen socioeconómico en la atención y en el trato, consideración del color de la piel y otros rasgos fenotípicos como factor determinante en las paradas, registros y detenciones policiales, investigaciones penales en delitos de carácter sexual a partir de atribución de responsabilidad a la víctima, impunidad de los agentes y culpabilización de la mujer en los delitos de feminicidio y de violencia sexual, criminalización de la pobreza o violaciones a la integridad física, psíquica, moral y sexual en redadas policiales o personas que están bajo custodia.

Aunque no sea el objetivo de esta investigación, el retrato de la dinámica entre violencia y cuerpos de seguridad en Brasil no estaría completo sin mencionar otra posibilidad de perspectiva, que es aquella en que sus miembros no son protagonistas, sino víctimas. Desde esta mirada, integrantes de los cuerpos de seguridad también conviven con los efectos de la violencia estructural durante el ejercicio de sus funciones y en sus vidas privadas. La forma como perciben dicha relación se materializa en el miedo de ser víctima de homicidio<sup>130</sup>, en las amenazas personales y familiares sufridas a lo largo de la trayectoria profesional, en el asesinato de compañeras o compañeros, en la adopción de ciertos hábitos para evitar que se les reconozcan como integrantes de los cuerpos

---

<sup>130</sup> De acuerdo con el *Fórum Brasileiro de Segurança Pública*, la fuerza policial de Brasil mata y muere. Entre 2009 y 2015, los miembros de los cuerpos de policía brasileños murieron un 110% más en servicio que los estadounidenses (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, *10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública*, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo, 2016, pág. 5-6 y 27).

policiales y en las condiciones precarias de trabajo, especialmente en términos de preservación de la propia seguridad<sup>131</sup>.

La complejidad del problema de la seguridad pública en Brasil y los profundos impactos que generan en la vida de cada persona, grupos y en el cuerpo social de una forma general señalan que resulta insuficiente abordar la cuestión de la violencia reduciéndola a una oposición superficial entre la construcción de un cuerpo de seguridad que viola los derechos humanos *versus* un cuerpo de seguridad que también puede ocupar la posición de víctima. Abordar una perspectiva no invalida o anula la otra y tampoco las coloca como contradictorias. Sin embargo, desde cómo se configura la policía brasileña y se concretan sus prácticas, es cierto que su modo de actuar debe ser analizado a partir de la reflexión sobre la necesidad y urgencia de efectiva realización de los derechos humanos y la visibilidad de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como para promover de cambios en su rutina.

## **2.1 “Direitos humanos para humanos direitos”: la construcción de una jerarquía de titulares de derechos**

Antes de abordar el punto que será desarrollado en este apartado, cumple explicar lo que significa “direitos humanos para humanos direitos”, una de las frases que como otras que serán presentadas en esta investigación retratan de forma contundente como se plasma en la realidad brasileña un pensamiento todavía presente en la sociedad y que, en ocasiones, justificaría la violación o el no reconocimiento de derechos a algunas personas. Asimismo, ofrece medios para comprender la espiral de violencia estructural de la sociedad brasileña y cómo sus integrantes reaccionan a eso.

El estudio de las expresiones cristalizadas y construcciones lingüísticas propias de una lengua y difundidas en una sociedad es un recurso útil para analizar las posiciones, percepciones, representaciones y sentidos sobre determinados temas, sobre todo los que tienen gran carga emotiva. Dichas expresiones y construcciones integran una de las dimensiones del discurso, la comunicación de las creencias, y por medio de esa

---

<sup>131</sup> Sobre el tema, consúltese BUENO, Samira y HANASHIRO, Olaya (coords.), *Pesquisa de vitimização e percepção de risco entre profissionais do sistema de segurança pública*, Fórum Brasileiro de Segurança Pública y Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas-FGV/EAESP, São Paulo, 2015.

interacción verbal, “los usuarios del lenguaje pueden realizar, confirmar o desafiar estructuras e instituciones sociales y políticas más amplias”<sup>132</sup>. Desde lo planteado, el examen propuesto también puede aportar elementos relevantes para comprender empíricamente cómo, por medio de las palabras, es posible identificar algunas marcas que caracterizan una sociedad y sintetizar posiciones personales, sociales e institucionales pese a que no sean explícitas o intencionales. En particular, las relacionadas con la seguridad pública y con la criminalidad también abarcan la reflexión sobre los límites punitivos estatales y las prácticas judiciales y policiales, sobre todo las que se vuelven hacia la figura del individuo sospechoso o del delincuente al igual que de integrantes de colectivos como los formados por personas negras y empobrecidas.

La frase del título, presente en discurso de la sociedad brasileña fue dejada en portugués por su fuerte simbolismo de la lógica punitiva y criminalizadora hacia determinadas personas y su asociación a la selectividad en cuanto a la titularidad de los derechos. El juego de palabras que forma su significado parte del uso de la palabra *direito* (derecho) en el sentido de persona que respeta las leyes, las normas morales y éticas y las “buenas costumbres” decretadas por un código previamente establecido. La inversión del orden de las palabras para formar la “máxima” implica un nuevo significado, conclusivo, según el cual a ciertas personas no se les debería garantizar los derechos, ya que no cumplen con las reglas y condiciones impuestas por ese código de conducta. Son construidas, de tal modo, dos categorías de grupos, la “buena”, correspondiente a la ciudadanía y, por tanto, a la que estaría permitida la concesión de derechos, y la “mala”, a la que no se reconocería a sus miembros como titulares de derechos.

La negación de concesión de derechos, en consecuencia, estaría direccionada a todas las personas que infringen la ley o a aquellas que no se ajustan a un cierto patrón de ser humano, lo considerado correcto o “derecho”. Como resultado, las mencionadas personas no estarían protegidas de las violaciones de derechos cometidas hacia ellas y en muchos casos esas violaciones estarían legitimadas, ya que ellas sí violan los derechos de los individuos “correctos”, que viven de acuerdo con los parámetros sociales y legales estipulados. Desde ahí, se establece la mencionada jerarquía del título que no solo sintetiza el pensamiento de una parte de la población brasileña, sino también establece

---

<sup>132</sup> VAN DIJK, Teun A., “El estudio del discurso”, citado, pág. 23 y 59.

pautas –no oficiales– de cómo los cuerpos de policía deberían actuar para lidiar con la criminalidad o con los “desajustados”.

Presentar la conformación de la policía brasileña y sus rasgos fundamentales en un apartado como el que fue denominado arriba, por tanto, es intencional y permite una primera aproximación al contexto de su actuación y delimita el *locus* desde el cual se parte en esta investigación para pensar sobre las prácticas policiales en Brasil. La comprensión del impacto de esa “máxima” en la labor policial es imprescindible para examinar la cuestión de la seguridad pública y de los grupos en situación de vulnerabilidad en el país. Desde este enfoque, la desigualdad como marca de Brasil se centra, específicamente, en las relaciones establecidas entre el ejercicio de la autoridad legítimamente concedida a los cuerpos policiales y la ciudadanía y cómo esta dinámica contribuye a la formación de la jerarquía mencionada en el título. Jerarquía, que por su propio significado, genera diferencia, pues la “gradación de personas, valores o dignidades”<sup>133</sup> conlleva atribuir derechos que serán distribuidas en distintos niveles. La desigualdad, en definitiva, incide en esa organización jerárquica y más allá de diferencia, produce injusticia, pues a ciertos colectivos les serán asignados los puestos más bajos en tal disposición, dónde, en ocasiones, no llegarán los derechos.

El Estado brasileño, sea en la Constitución Federal vigente –promulgada en 1988– sea en las disposiciones legales infraconstitucionales y en los tratados internacionales ratificados, contempla generosamente el imperio de los derechos humanos en su Ordenamiento jurídico. De tal manera, la norma constitucional reconoce la dignidad humana como fundamento de la República Federativa de Brasil, según el artículo 1º<sup>134</sup>. Como uno de sus desdoblamientos, declara el derecho a la vida como derecho fundamental inviolable del Estado Democrático de Derecho (artículo 5º)<sup>135</sup> y establece

---

<sup>133</sup> Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.

<sup>134</sup> Artículo 1º: “La República Federativa de Brasil, formada por la unión insoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamentos: I. la soberanía; II. la ciudadanía; III. la dignidad de la persona humana; IV. los valores sociales del trabajo y la libre iniciativa; IV. el pluralismo político” (traducción de la autora).

<sup>135</sup> Artículo 5º: “Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad (...)” (traducción de la autora).

como principio de sus relaciones internacionales la prevalencia de los derechos humanos (artículo 4º)<sup>136</sup>.

Por otro lado, el ya mencionado artículo 144 declara que la seguridad pública es deber del Estado y derecho de todos y se ejerce para garantizar la integridad de las personas. Interpretados conjuntamente, la lectura de los dispositivos constitucionales lleva a la conclusión de que la seguridad pública debe garantizar a toda la ciudadanía no solo la integridad física, sino también permitir el ejercicio de todos los derechos previstos en la Constitución, entre los cuales el derecho a la vida, sin amenazas e independientemente de factores como situación socioeconómica y penal u otros que privilegien solo una parte de la población. Para la consecución de las finalidades comentadas, el Estado brasileño organizó sus fuerzas y cuerpos de seguridad a partir de un modelo basado en la asignación de atribuciones y objetivos institucionales a diversos órganos según sus funciones y espacios geográficos. Asimismo, el modelo adoptado para los cuerpos policiales es un modelo coercitivo, en que predominan la utilización de armas de fuego y el empleo de la fuerza física<sup>137</sup>. Ante lo expuesto, la adopción de tal modelo sumada al proceso histórico del país es clave para comprender cómo se configuran los cuerpos de seguridad y el modo por el cual realizan sus tareas.

Según fue expuesto en el apartado sobre aclaraciones terminológicas y conceptuales de este trabajo, los cuerpos policiales analizados integran el modelo de organización referido en el párrafo anterior y por ello, en este momento, es importante desmenuzar sus atribuciones y principales características. Son instituciones independientes, pero que trabajan de forma complementaria, con dirección de mando propia y subordinadas al gobierno de cada estado brasileño. Con respecto a la Policía Civil, le corresponden las funciones de Policía Judicial y Administrativa y su principal actividad es la investigación de las infracciones penales, con el objetivo de recoger pruebas, descubrir delitos, localizar autores y preparar los procedimientos para la presentación de una acción penal por el Ministerio Público y juicio por el Poder Judicial.

---

<sup>136</sup> Artículo 4º: “La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios: I. independencia nacional; II. prevalencia de los derechos humanos; III. autodeterminación de los pueblos; IV. no intervención; V. igualdad entre los Estados; VI. defensa de la paz; VII. solución pacífica de los conflictos; VIII. repudio al terrorismo y al racismo; IX. cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad; X. concesión de asilo político” (traducción de la autora).

<sup>137</sup> PISARELLO, Gerardo y ASENS, Jaume, “Policía, seguridad y cultura antirrepresiva” en *No hay derecho(s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis*, Icaria, Barcelona, 2011, pág. 43 a 66, pág. 30.



A su vez, las tareas de Policía Administrativa son las de vigilancia del cumplimiento de la normativa y autorizaciones o prohibiciones de actividades a particulares. La Policía Militar, uniformada, es la responsable de la preservación del orden público, el patrullaje de las calles y la prevención de actos delictivos. Como el propio nombre señala, es una institución basada en la jerarquía, rangos y disciplina militar, como las fuerzas armadas.

Sin embargo la máxima garantía a los derechos expuesta en la Constitución Federal y reflejada en las normas infraconstitucionales, los cuerpos de policía brasileños, como se verá más adelante, siguen practicando conductas que los violan y que todavía forman parte de una praxis policial encubierta y negada oficialmente. A partir de la promulgación de la nueva Constitución el discurso oficial reclamaba que los cuerpos de seguridad fueran formados y actuaran de acuerdo con la matriz discursiva de respeto y promoción de los derechos humanos. En contraste con el conjunto normativo de garantías que se formó tras 1988 y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos<sup>138</sup>, prácticas basadas en la violencia y conductas arbitrarias por parte del personal policial todavía son rasgos significativos en su conformación.

Así, mantener un patrón de actuación contrario a los derechos humanos se convierte en uno de los más graves problemas de efectividad de derechos en Brasil<sup>139</sup>. Sus causas son múltiples, pero uno de los factores relevantes es la herencia del modelo policial de la dictadura militar en Brasil entre 1964 y 1985. Durante tal régimen, las fuerzas y cuerpos de seguridad brasileños, sobre todo las Policías Civiles y Militares, fueron puestas al servicio de la lucha contra los “enemigos” del Estado, de forma que sus actuaciones eran conducidas hacia la idea de combate y no para la defensa de la población

---

<sup>138</sup> Entre ellos, es importante destacar los siguientes: Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979), Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), Conjunto de Principios Para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988), Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (1989), Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990) y Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía (2003).

<sup>139</sup> Sobre lo comentado, la Revisión Periódica Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para verificar la situación en materia de derechos humanos de los Estados Miembros, y realizada por tercera vez en Brasil señala las principales dificultades del país para la efectividad de los derechos humanos. En este sentido, se puso de relieve la forma de actuar de los cuerpos policiales estatales, la desproporcionalidad en el uso de la fuerza y la excesiva violencia ejercida por su personal especialmente hacia la población negra y pobre. El enfrentamiento del racismo institucional y de la violencia de género también fueron mencionados en las recomendaciones formuladas por otros Estados Miembros. El proyecto del informe de resultados con las recomendaciones hechas a Brasil fue divulgado el 9 de mayo de 2015 (A/HRC/WG.6/27/L.9).

y garantía de sus derechos<sup>140</sup>. Los derechos humanos, a consecuencia, no pertenecían a la agenda del Estado brasileño, pues eran considerados un riesgo a la seguridad nacional.

La “herencia” dejada por el régimen dictatorial fue incorporada al desarrollo de los modelos y procedimientos de los actuales cuerpos de seguridad, lo que limitó la capacidad de cambio estructural de dichas instituciones y demuestra que una legislación redactada sobre la base de los derechos humanos no conlleva, automáticamente, respetarlos y tampoco garantiza que las personas que representan el Estado pautarán sus conductas basadas en ese sistema de garantías y protección<sup>141</sup>. Las experiencias pasadas –institucionales y sociales– que todavía sobreviven en la sociedad brasileña y en las prácticas policiales comprometen los efectos positivos de los esfuerzos que Brasil sigue haciendo para concretar los derechos humanos como eje de articulación de sus políticas.

Es importante puntualizar que hasta hoy, aunque de forma más sutil, la idea de derechos humanos en determinados espacios o representaciones sociales, sobre todo aquellos vinculados a la seguridad pública, simbolizan una idea de “riesgo”, de selectividad en cuanto a la titularidad de los derechos, de condescendencia con las personas que infringen la ley o como mecanismo que perjudica la lucha contra la criminalidad<sup>142</sup> y que concede privilegios a los individuos que practican crímenes<sup>143</sup>. El binarismo de una concepción como la de derechos humanos que no debería serlo o la asunción de que deberían ser matizados o negados pueden ser observadas en las prácticas institucionales de seguridad y aunque el cambio positivo que vienen alcanzando en los últimos años, los cuerpos de policía brasileños lo mantienen de modo muy arraigado en su forma de concebir su labor y de actuar.

Profundamente vinculada a la dinámica que fue descrita anteriormente, la violencia alarmante y generalizada de la sociedad brasileña es uno de los ejes que la

---

<sup>140</sup> Acerca de la construcción de la figura del enemigo en la sociedad brasileña, consúltese ZACCONE, Orlando, *Indignos de vida: a forma jurídica de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro*, Revan, Rio de Janeiro, 2015, pág. 216 a 248.

<sup>141</sup> DUBOIS, Marc, “Educação em Direitos Humanos para a Polícia” en CLAUDE, Richard P. y ANDREOPOULOS, George J. (orgs.), *Educação em direitos humanos para o século XXI*, trad. de Ana Luiza Pinheiro, Edusp/NEV, São Paulo, 2007, pág. 455 a 484, pág. 466.

<sup>142</sup> NUCCI, Guilherme, *Direitos Humanos em favor de bandidos?*, 4 de abril de 2017, <http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/direitos-humanos-em-favor-de-bandidos>.

<sup>143</sup> CALDEIRA, Teresa Pires do Rio, “Direitos humanos ou ‘privilégios de bandidos’”, *Novos Estudos Cebap*, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, São Paulo, vol. 30, 1991, pág. 162 a 174, pág. 169.

posibilita, la mantiene y, en algunos casos, la justifica como respuesta posible a la lucha contra la criminalidad. En este sentido, la violencia tiene sus manifestaciones también en el ámbito policial, productor y reproductor de esa espiral. Ilustra la gravedad de la situación el hecho de que un 76% de las personas tengan miedo de ser asesinadas, un 59% tenga miedo de ser víctima de actos violentos por parte de la Policía Militar, un 53% por parte de la Policía Civil y un 70% considera que las fuerzas policiales exageran en el uso de la violencia<sup>144</sup>. Durante 2016, cada 9 minutos una persona fue asesinada de forma violenta en Brasil, lo que alcanzó un total de 58.467 muertes y parte del mencionado número corresponde a muertes decurrentes de intervenciones policiales<sup>145</sup>. Eso explica los elevados índices sobre el miedo que tiene la población de ser víctima de actos violentos por parte de las personas que integran los cuerpos de seguridad y les vincule a violación de derechos humanos, al ejercicio ilegítimo de la violencia, a conductas arbitrarias y al empleo ilegal y abusivo de la fuerza.

Asimismo, en muchas situaciones, sobre todo en lo que atañe a los homicidios, el patrón de actuación policial puede ser el resultado de una especie de *vendetta*, es decir, la venganza entre los clanes mafiosos italianos, la cual, en el caso brasileño, se refiere a agentes de la ley y delincuentes a través de la aplicación del principio “ojo por ojo, diente por diente” que va hacia la dirección opuesta de los principios constitucionales y procesales penales vigentes. Por cada policía asesinado por un criminal, un criminal es asesinado por la policía. La *vendetta*, como instrumento extrajudicial no reconocido por el Ordenamiento jurídico y contrario a los derechos humanos, tiene lugar especialmente en barrios empobrecidos, en los cuales la presencia del Estado y sus instituciones es poca o ninguna y la violencia, en todos sus aspectos, es expresiva y determina el modo y condiciones de vida de las personas.

De ahí, la idea de que la violación de los derechos humanos estaría permitida cuando recae sobre infractores de la ley no solo está presente en las prácticas policiales,

---

<sup>144</sup> FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, *10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública*, citado, pág. 5-6. La encuesta realizada por la organización no gubernamental es una de las más importantes en Brasil en términos de estadísticas criminales e informaciones sobre el rol de las instituciones y las políticas públicas y trabaja a partir de grupos formados en todos los estados de la federación. Los resultados de la encuesta, de tal manera, presentan datos unificados y por cada estado, ofreciendo una amplia visión sobre los temas analizados.

<sup>145</sup> *Ibidem*.

representada por el “disparar antes de preguntar”<sup>146</sup>, por las ejecuciones extrajudiciales y por los abusos cometidos, sino también es compartida por parte de la sociedad brasileña. Según el informe del *Fórum Brasileiro de Segurança Pública*, un 57% de la población está de acuerdo con la frase “bandido bom é bandido morto”, lo que significa que lo mejor para una persona que viola la ley es la muerte, sin que sea sometida a un juicio justo y dentro de los parámetros legales<sup>147</sup>. La violencia es tolerada e incluso considerada legítima o justificable cuando las víctimas son delincuentes o presuntos sospechosos, principalmente si son negras, del sexo masculino, jóvenes y pobres, pues, como subraya Young, “de acuerdo con la lógica social imperante, algunas circunstancias ‘piden’ tal violencia más que otras”<sup>148</sup> y desde lo expuesto, la pertenencia a ciertos colectivos o el hecho de infringir la ley estarían entre las causas que “pedirían” más violencia.

La segunda frase relevante que forma parte del universo por el cual se mueve esta investigación, “bandido bom é bandido morto” señala otro juego de palabras similar que, como el anterior, plantea una conclusión o un hecho contruïdos para demostrar una idea general y con (cuestionable) fuerza argumentativa<sup>149</sup>. La frase señala que con base en la lógica discriminatoria, selectiva y ofensiva a los derechos, la violencia encontraría su justificación en el “deber” de eliminación de los individuos que no estarían dentro del concepto sobre ser un “buen ciudadano”. En este caso, la muerte del “*bandido*” no es cualquier muerte, sino el resultado de un exterminio por su oponente o por los miembros de los cuerpos de policía<sup>150</sup>. Al individuo considerado “*bandido*”, entonces, no le debe

---

<sup>146</sup> Otra “máxima” difundida por el uso popular y que describe la facilidad con que los miembros de los cuerpos de policía pueden atribuir la culpabilidad y matar o herir a las personas antes de indagarlas o averiguar lo que está pasando. La expresión tiene relación con otra, *dedo frouxo* o sus correspondientes en inglés (*easy trigger*) y español (gatillo fácil) (PITA, María Victoria, *Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial*, Editores del Puerto y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Buenos Aires, 2010, pág. 2).

<sup>147</sup> FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, *10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública*, citado, pág. 31

<sup>148</sup> YOUNG, Iris Marion, “Las cinco caras de la opresión”, citado, pág. 108.

<sup>149</sup> FUENTES RODRÍGUEZ, Catalina y ALCAIDE LARA, Esperanza R., *Mecanismos lingüísticos de la persuasión: como convencer con palabras*, Arco/Libros, Madrid, 2002, pág. 80-81.

<sup>150</sup> Es bastante ilustrativo como esa posición se exterioriza en el discurso de los miembros de los cuerpos de seguridad a partir de la frase que fue dicha a la prensa por un coronel de la Policía Militar de Rio de Janeiro después de que un grupo de élite de dicha institución matara a 9 personas en una redada realizada en una favela: “La PM es el mejor insecticida contra el dengue. ¿Conoces aquel producto, SBP? Existe el SBPM. No queda ningún mosquito en pie. La PM es el mejor insecticida social” El SBP es una marca de insecticidas en Brasil y se le agregó la letra “M” para formar la abreviatura “PM”, de Policía Militar (TOLEDO, Malu, “Nove morrem em ação do Bope; coronel diz que PM do Rio é ‘o melhor inseticida

ser concedido el debido proceso penal, tomado como privilegio y no como garantía constitucional, sino un trato que tiene por finalidad la eliminación de la vida y que demuestre públicamente –desde un patrón altamente selectivo– lo que ocurre con quien transgrede la ley<sup>151</sup>. Igualmente, es pertinente observar que el uso de la palabra “*bandido*” ofrece claves de interpretación para evaluar la situación aquí descrita. En portugués, dicha palabra tiene una carga valorativa negativa y no corresponde simplemente a una persona que comete un delito. Más que eso, señala rechazo social y designa a un individuo que practica reiteradamente crímenes o actúa de modo cruel. La atribución de la culpabilidad sobre la cual está construida la frase, de tal forma, justificaría la negación de humanidad, el empleo excesivo e injustificado de la fuerza física y, por consiguiente, la muerte, puesto que, según la lógica construida, un “*bandido*” no podría ser titular de derechos.

Es importante subrayar que ese mecanismo no está presente solo en casos de homicidios ocurridos durante la actuación de los cuerpos de seguridad, sino también en cualquier relación en que se considere que se puede motivar la violencia, como en el caso de mujeres que son violadas pues el violador consideró que la forma como se iba vestida así lo justificaba. La violencia es un hecho frecuente para las personas que conforman ciertos colectivos, de forma que se presenta como una posibilidad plausible y real en situaciones en que no actúan como “deberían”. El juego de la justificación, legitimación y tolerancia de la violencia, así, está presente en distintos ámbitos de las relaciones sociales, pero, teniendo en cuenta que los cuerpos policiales pueden emplear la fuerza dentro de lo permitido por los parámetros legales y están autorizados a utilizar armas de fuego para el desempeño de sus funciones, la situación se torna aún más grave, peligrosa y preocupante.

La actuación contraria a los derechos humanos con respecto a determinadas personas y grupos, así, se aproxima de la legitimidad y es tolerada por el cuerpo social y también por el propio Estado, a través de la impunidad con relación a las actas de resistencia al arresto o en la investigación de conductas policiales, como será examinado más adelante. En efecto, la violencia institucional analizada desde este enfoque se expresa por medio de acciones cometidas por sus representantes e, igualmente, por las omisiones

---

social””, *A Folha de São Paulo*, São Paulo, 16 de abril de 2008, en <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1604200827.htm>).

<sup>151</sup> NUCCI, Guilherme, *Bandido bom é bandido morto?*, 2 de septiembre de 2016, en <http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/bandido-bom-e-bandido-morto>.

del Estado en cuanto a no investigar o investigar de modo insuficiente los actos de funcionarias y funcionarios públicos que reproducen aspectos discriminatorios y menoscaban derechos, transmitiendo la idea de que son aceptables o que las consecuencias de los actos no serán graves.

La situación de violencia legalizada hacia determinados grupos es una de las caras de la violencia del Estado entendida como aceptada cuando son “delincuentes”, como si fuera una especie de “deber” implícitamente impuesto a los cuerpos de policía y que de una manera oculta formaría parte de sus códigos deontológicos y de su rol de preservar el orden público. Planteada la cuestión en estos términos, es cierto que la asociación de la violencia a las prácticas policiales en términos generales es un fenómeno recurrente y ampliamente documentado, lo que plantea cuestionamientos acerca de la capacidad de los cuerpos de seguridad en, efectivamente, garantizar la seguridad y actuar consonante a los parámetros de los derechos humanos, especialmente cuando se vuelve la mirada hacia el estado de vulnerabilidad de los grupos en estudio. En esta línea de argumentos, cumple destacar lo que Young expone con respecto al lugar que las instituciones ocupan en esta dinámica: “En la medida en que las instituciones y las prácticas sociales alientan, toleran o permiten que se lleve a cabo la violencia contra miembros de grupos determinados, dichas instituciones y prácticas son injustas y deberían reformularse”<sup>152</sup>. A partir de lo planteado por la autora, una de las estrategias que pueden ser formuladas para dicho cambio es la formación en derechos humanos a los cuerpos de policía desde la perspectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad, tema central del último capítulo de este trabajo.

A continuación, serán investigadas situaciones específicas de vulnerabilidad teniendo en cuenta el género, la “raza” y la combinación entre esas categorías en el ámbito policial. Son distintas formas de materialización del estado de vulnerabilidad de los colectivos que se vinculan a dichas categorías y no se reducen a las situaciones a seguir examinadas. En tal sentido, cabe observar que fueron privilegiadas las más recurrentes en cada colectivo con la finalidad de ofrecer un retrato panorámico de los efectos negativos de la labor policial desde lo planteado en relación con el acceso y fruición de los derechos de integrantes de dichos colectivos. Sin embargo la multiplicidad de situaciones, los

---

<sup>152</sup> YOUNG, Iris Marion, “Las cinco caras de la opresión”, citado, pág. 110.

puntos en común que tienen esos grupos en este contexto, como fue subrayado *supra*, es que viven bajo la amenaza de la violencia en sus distintas manifestaciones –como institucional, física, verbal y sexual– y sufren la descalificación como sujetos de derechos. Y desde esta perspectiva son ubicados en el peldaño más bajo de la jerarquía simbólicamente construida de la ciudadanía.

## 2.2 La situación de vulnerabilidad de las mujeres

El escenario de desventaja descrito en el capítulo anterior acerca del estado de vulnerabilidad de las mujeres se manifiesta de modo muy particular en las esferas institucionales y, en ocasiones, es potenciado por la conducta de los propios agentes públicos en situaciones de interacción con ellas y en momentos críticos de necesidad de atención<sup>153</sup>. Sea por ausencia o deficiencia en la formación, sea por expresar convicciones personales discriminatorias durante la actuación en el servicio público o por reproducir patrones sociales machistas, es cierto que las mujeres que interactúan con las instituciones policiales están especialmente desprotegidas y sufren las consecuencias de eso cuando, por ejemplo, están bajo custodia de un policía, son detenidas o son víctimas de delitos de carácter sexual<sup>154</sup> y los reportan al Estado. El propósito de este apartado, de tal modo, es analizar –a partir del marco teórico desarrollado en el capítulo 1 y los materiales

---

<sup>153</sup> La lectura a la mención a los agentes públicos debe tener presente que gran parte de los efectivos de los cuerpos de seguridad está compuesta por hombres y aunque las mujeres también puedan reproducir comportamientos discriminatorios y machistas direccionados a otras mujeres, las relaciones desiguales de poder como elemento estructural son acentuadas cuando una de las partes, el hombre, se encuentra en una posición de autoridad legalmente constituida como es el caso de los hombres que integran dichos cuerpos.

<sup>154</sup> El sentido de la expresión “delitos de carácter sexual” utilizada en este trabajo se enlaza con la definición de la Organización Mundial de Salud (OMS) sobre violencia sexual, considerada “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, *Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Panorama general*, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de Salud, Washington DC, 2013, pág. 2). Agregado a tal definición, hay que considerar que no solo por coacción puede ocurrir la violencia sexual, sino también por medios que perjudiquen el consentimiento de la víctima, como la ingestión de bebida alcohólica o de sustancia estupefaciente, o estados que no le permiten ejercer la capacidad de elección, como el sueño o la discapacidad mental. La definición de la OMS señala que la violencia sexual tiene distintas expresiones y como resultado puede corresponder a diversos tipos penales consonante al Ordenamiento jurídico de cada país. Es cierto que de todas las manifestaciones la violación corresponde a la forma más grave de violencia sexual, al configurarse como ataque a la dignidad de las mujeres y expresión de fuerza y de poder, que se materializa por el desprecio al cuerpo y el acceso violento al espacio más privado que hay, tanto en términos físicos como psicológicos. Son, igualmente, los delitos más reportados a la policía, de tal manera que la referencia a los delitos de carácter sexual en este trabajo considera, especialmente, la violación.

empíricos seleccionados, que consisten en casos concretos noticiados en la prensa brasileña— el cuadro actual de la situación de vulnerabilidad de las mujeres brasileñas de forma panorámica y cómo tales vulnerabilidades se concretan en el ámbito de las prácticas policiales.

Como punto de arranque del análisis, una vez más se recurrirá a los datos del último informe de PNUD sobre el desarrollo humano, concretamente en cuanto a la situación de las mujeres, para destacar cómo, a partir de su realidad y el contexto en que viven, se abren espacios para la incidencia de la vulnerabilidad. Tanto el Índice de Desarrollo de Género (en adelante, IDG) como el Índice de Desigualdad de Género ofrecen informaciones relevantes sobre cómo la desigualdad entre mujeres y hombres se da en cada país con base, respectivamente, en las disparidades con respecto al IDH entre los géneros y en otras tres dimensiones aplicadas específicamente a las mujeres (salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral)<sup>155</sup>. Conviene poner de relieve que la diferencia entre los índices cuando son analizados por separado señala que en todos los países hay brechas en razón del género, en las que las mujeres siempre están en una posición de desigualdad en cuanto a los ingresos, por ejemplo. En sentido similar, es importante observar que teniendo en cuenta los procesos de discriminación, opresión y exclusión, muchos grupos están en desventaja, pero las privaciones sistémicas que sufren las mujeres en relación con los hombres merecen ser destacadas porque el colectivo formado por ellas constituye la mitad de la población mundial. Desde ahí, las privaciones que se enfrentan son la barrera más extrema al progreso global en términos de desarrollo humano.

Acerca del IDG, que presenta los indicadores de desarrollo humano separados por género, el IDH de las mujeres es 0,754 y de los hombres, 0,751, reflejando un mejor rendimiento educativo y mayor longevidad del primer grupo. A pesar del mayor nivel educativo de las mujeres, los hombres todavía tienen un indicador de ingresos

---

<sup>155</sup> De acuerdo con lo expuesto en el informe, la salud reproductiva se mide por el índice de mortalidad materna y la tasa de natalidad entre las adolescentes; el empoderamiento, por la proporción de escaños en el parlamento ocupados por mujeres y la proporción de población que cuenta con al menos algún tipo de educación secundaria; el mercado laboral, por la participación en la fuerza de trabajo (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano 2016*, citado, pág. 195).



significativamente más alto (US\$ 17,736 frente a US\$ 10,672)<sup>156</sup>. En lo que concierne al Índice de Desigualdad de Género, Brasil ocupa el puesto 92 en la clasificación de los países evaluados<sup>157</sup>. Específicamente, en los datos sobre el empoderamiento, solamente un 10,8% mujeres ocupan los escaños en el parlamento; a su vez, sobre la educación, un 59,1% de las mujeres y un 55,2% de los hombres accedieron a la educación secundaria (no significa que la terminaron). En cuanto a la tasa de participación en la fuerza de trabajo, la diferencia llama la atención: un 56,3% de las mujeres participan del mercado laboral contra un 78,5% de los hombres, lo que demuestra la desigualdad en el reparto de la responsabilidad en las tareas domésticas y familiares y el persistente mantenimiento del rol de cuidado exclusivamente a cargo de la mujer.

Otros datos del informe de PNUD, si bien no están detallados por género como los citados en los párrafos anteriores, son fundamentales para comprender cómo viven las mujeres brasileñas y cómo se concreta la situación de vulnerabilidad que las afecta<sup>158</sup>. Según los datos correspondientes a la seguridad humana, la tasa de homicidios en Brasil es 24,6 por cada 100.000 personas<sup>159</sup> y el indicador de violencia contra la mujer, que se manifiesta en todos los niveles socioeconómicos y de educación, un 38,8%<sup>160</sup>. Ambos indicadores, si son comparados con los de otros países del mismo grupo de desarrollo humano, son elevados y señalan uno de los puntos críticos a los que se enfrentan las autoridades y población brasileñas: la cuestión de la seguridad (o falta de) en que la mujer está doblemente afectada, pues los indicadores hacen referencia a la seguridad pública de forma general y a la seguridad relativa exclusivamente a su género.

Con respecto al primer punto, solamente un 36% de las personas contestaron sí a la pregunta “¿Se siente seguro de noche caminando solo por la ciudad o la zona donde

---

<sup>156</sup> PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano 2016*, citado, pág. 213.

<sup>157</sup> *Idem*, pág. 217.

<sup>158</sup> Los datos expuestos en este apartado también serán de interés para el análisis de la situación de vulnerabilidad de las personas negras en Brasil, analizada a continuación.

<sup>159</sup> El informe explica que los números se refieren a muertes ilícitas infligidas deliberadamente a personas por parte de otras (*Idem*, pág. 245 y 247).

<sup>160</sup> En relación con ese componente, el informe de 2016 no menciona los datos relativos a Brasil, de forma que se mantuvo los números de 2015. Ese índice corresponde a “porcentaje de la población femenina de 15 años o más que ha sufrido alguna vez un acto de violencia física o sexual cometido por su pareja o por una persona que no es la pareja” (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano 2015*, PNUD, Nueva York, 2015, pág. 261 y 263).

vive?”, número que da importantes pistas para comprender la relación de la ciudadanía con la seguridad<sup>161</sup>. Brasil, en cuanto a este dato, se sitúa nada más por encima de cuatro países<sup>162</sup>, lo que está vinculado a las causas estructurales de la violencia, a los altos índices de prácticas delictivas, a las consecuencias de las políticas de seguridad pública adoptadas por las autoridades gubernamentales, a la percepción de las personas frente a esta realidad y a la sensación de ocupar constantemente el lugar de víctimas potenciales. Conviene subrayar, sin embargo, que en un país en que cada 9 minutos hubo una muerte violenta intencional, como ya fue presentado más arriba, y 125 personas fueron violadas por día durante 2015<sup>163</sup>, la ausencia de seguridad no es una percepción, sino algo tangible, que determina la vida de las personas de forma general y, particularmente, cruel, con respecto a las mujeres.

A propósito de los números sobre la sensación de seguridad, cumple destacar un importante matiz. El hecho de ser mujer crea otra categoría de violencia, aquella que

---

<sup>161</sup> PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano 2016*, citado, pág. 253 y 255. En este sentido, es importante observar que la sensación de seguridad, desde un punto de vista objetivo, tiene relación con el fenómeno delictivo en sí, con las políticas públicas sobre el tema, con la actuación de los cuerpos de seguridad y de los órganos judiciales y con el nivel de confianza de la ciudadanía en dichas instituciones. Por otro lado, también tiene un fuerte componente subjetivo, es decir, cómo cada individuo vive y siente la seguridad o la inseguridad a partir de sus propias características, experiencias y percepciones. Cómo cada persona percibe la seguridad, por tanto, depende de diferentes contextos, así como de condicionantes externos y características individuales, como género, etnia, edad y nivel socioeconómico. Es cierto que la sensación de seguridad de una mujer negra, lesbiana y pobre caminando sola por la calle o la zona donde vive será distinta de la de un hombre blanco, heterosexual y económicamente privilegiado caminando por su barrio. De todo lo expuesto, se infiere que esta percepción afecta a la calidad de vida de las personas y cómo será su relación con los actores públicos. Respeto a la policía, la baja sensación de seguridad es uno de los factores que conlleva la falta de credibilidad en sus órganos y agentes, lo que se reflejará en el desconocimiento de determinados delitos por parte de las autoridades porque las víctimas prefieren no denunciarlos, pues no creen en el sistema de justicia penal.

<sup>162</sup> Son los siguientes: Afganistán (34%), Siria (32%), Gabón (35%) y Venezuela (22%). Con el mismo porcentual (36%) están El Salvador y Zambia.

<sup>163</sup> FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, *10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública*, citado, pág. 6-7. Sobre esta información es relevante aclarar dos puntos. El primero es que tal dato se refiere al número total de violaciones cometidas durante el año de 2015, que fue de 45.460, es decir, relativo a mujeres y a hombres, pero las principales víctimas son del sexo femenino —un 89% (*Idem*, pág. 38). El segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que la cifra negra en esos casos es especialmente relevante, pues los datos oficiales no reflejan la realidad respecto a los números de violaciones u otros delitos de carácter sexual, puesto que, por diversas razones, las víctimas no desean dar publicidad a lo que les pasó y, de este modo, no los denuncian a los órganos oficiales. Los casos de subregistro de dichos delitos se relacionan con el sentimiento de vergüenza, con el temor en el descrédito en su versión por parte de las autoridades y la respuesta negativa que puedan darle, con el miedo de juicios morales, insultos o humillaciones, no solo en el espacio público e institucional, sino también en el privado, con la culpabilización por haber sido víctima o con la consideración de que es inútil denunciar, pues no se castigará al victimario. Más allá de los datos oficiales, se calcula que en Brasil, el número de violaciones, tentadas o consumadas, es de, aproximadamente, 527 mil, de los cuales solo un 10% es reportado a las autoridades (*Idem*, pág. 39).

existe en razón del género, y, por consiguiente, nuevas dimensiones de análisis para verificar la sensación de seguridad, pues, en esta hipótesis, también se considera el espacio privado. En otras palabras, cuando se aborda la sensación de seguridad en el caso de las mujeres, hay que tener en cuenta la distinción entre aquella relativa al espacio público y al espacio privado, pues la inseguridad para ellas puede estar dentro y fuera del hogar. El espacio privado, por ende, también puede convertirse en *locus* de inseguridad, donde las personas más próximas pueden ser sus victimarios. El componente de género, de tal manera, también aquí es un elemento determinante para reflexionar sobre la vulnerabilidad y los diversos espacios en que está presente.

A consecuencia del cuadro descrito y de los datos presentados en los párrafos precedentes, se puede entablar un análisis sobre la situación actual de Brasil en los temas de desarrollo humano para las mujeres y sacar conclusiones para comprender algunos de los motivos por los cuales se “están” vulnerables. La primera es que, a pesar de vivir y estudiar más que los hombres, ellas tienen menores ingresos, lo que influye de forma negativa en importantes esferas de su vida y se refleja en el proceso de toma de decisiones, en los rumbos de sus planes y en el libre ejercicio de su autonomía. En este sentido, la autonomía económica permitida por el trabajo remunerado, sin embargo no es la única vía para el empoderamiento, representa un importante medio para alcanzar otras formas de empoderamiento, con el educativo y el cultural, y concederles más poder de decisiones en el seno de la unidad familiar.

Si se analizan tales números en conjunto con los presentados por el Índice de Desigualdad de Género del PNUD, es posible constatar que el empoderamiento es un largo camino a ser recogido y enfrenta obstáculos estructurales, contruidos socialmente, los cuales hacen que las mujeres estén atrapadas en los roles que les fueron tradicionalmente designados, sobre todo aquel que se vincula al trabajo doméstico y cuidado familiar. Desde el punto de vista planteado en este trabajo, una mujer empoderada, dotada de confianza y seguridad, tendrá más y mejores herramientas para interactuar de manera distinta de aquellas que no lo están con los agentes públicos. De ahí, la ausencia de empoderamiento asociada al estado de vulnerabilidad en que se encuentran por el hecho de ser mujer sumada a la manera como la sociedad construye sus patrones lleva a que sean más susceptibles a la violación de sus derechos o que encuentren mayores impedimentos para el acceso y fruición de ellos también en las esferas estatales.

En cuanto a los datos relativos a la seguridad, es imprescindible que sean analizados teniendo en cuenta la perspectiva de género no solo por retratar de manera más fidedigna la sociedad, sino también porque el modo por el cual mujeres y hombres sienten y sufren las diversas formas de violencia, incluso la institucional, es diferente. Los matices pueden ser observados por los datos de los informes de PNUD y por los del *Fórum Brasileiro de Segurança Pública* respecto a las violaciones y a la percepción sobre las instituciones policiales cuando se trata de delitos de carácter sexual<sup>164</sup>.

Cuando se aborda las formas de violencia contra la mujer, hay que considerar el menosprecio no solo en cuanto a su integridad física y a su vida, sino también a sus derechos. Sus cuerpos suelen acumular una serie de violencias, desde humillaciones y rechazo social hasta aquellas que les quita la vida y, bajo esta constatación, las instituciones públicas participan de forma más o menos aparente en esta dinámica. Dicho lo anterior, el espacio estatal también se convierte en campo donde la violencia y la persistencia o intensificación del estado de vulnerabilidad de las mujeres se hacen presentes, pues a través de determinadas conductas practicadas por sus agentes mantiene mecanismos de exclusión y discriminación.

De manera puntual, considerando las prácticas policiales abusivas, la vulnerabilidad de las mujeres puede materializarse de diversas formas, en gran parte vinculadas al trato dado a la violencia doméstica y familiar y a los delitos de carácter sexual, al mantenimiento de ciertos estereotipos respecto a los roles que ejercen y formas de comportamiento, a la preservación de relaciones desproporcionales de poder y al ejercicio ilegal de la autoridad por parte de los agentes públicos. Como ejemplo, se puede citar la atribución de exclusiva responsabilidad o minimización por la violencia sufrida, eximiendo de responsabilidad al autor; la descalificación de la ofensa que pasa a ser tomada como un piropo o una broma; el trato recibido en las dependencias policiales tras reportar una denuncia de delito sexual; los parámetros utilizados para la investigación de dichos delitos basados en los mencionados estereotipos y la utilización de la violencia, incluso sexual, como forma de castigo y humillación por parte de sus miembros cuando hay mujeres que están bajo su autoridad.

---

<sup>164</sup> FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, *#APolíciaPrecisaFalarSobreEstupro. Percepção sobre violência sexual e atendimento a mulheres vítimas nas instituições policiais*, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo, 2016.

En este contexto de violencia diaria e institucionalizada, un 50% de las personas entrevistadas para la realización de una encuesta relativa a la percepción sobre la violencia sexual y la atención a mujeres víctimas en las instituciones policiales brasileñas<sup>165</sup> piensa que la Policía Militar<sup>166</sup> no está bien preparada para tratar casos de violencia sexual. Por otro lado, un 44% cree que las mujeres víctimas de violencia sexual no son bien acogidas en las comisarías de policía<sup>167</sup>. El ambiente de falta de atención adecuada, desprotección, incredulidad y de eventual menosprecio y humillación, de tal manera, está presente, en ocasiones, en el modo de actuar de ambas fuerzas policiales y, aunque en este trabajo la formación en derechos humanos se refiere a la Policía Civil del Estado de São Paulo, los datos presentados señalan la urgente necesidad de cambios institucionales, sobre todo respecto a los delitos sexuales, en la conducta del personal de ambas instituciones.

El escenario descrito en el párrafo anterior convierte la experiencia con el Estado en un proceso complejo, frustrante e insatisfactorio, en que la víctima experimenta el sentimiento de estar perdiendo su tiempo, de que no recibirá toda la atención que merece o que será ignorada<sup>168</sup>. El temor de recurrir a las instancias policiales y los frecuentes relatos de mujeres que tuvieron una mala experiencia cuando lo hicieron no estimulan que cualquier forma de violencia ejercida contra ellas sea reportada a la policía, al contrario, causan rechazo, desconfianza y miedo y pueden llevar a victimización secundaria<sup>169</sup>. Frases como “eso no es delito y aquí solo trabajamos con delitos”, “¿estás

---

<sup>165</sup> FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, *#APolíciaPrecisaFalarSobreEstupro. Percepção sobre violência sexual e atendimento a mulheres vítimas nas instituições policiais*, citado, pág. 16.

<sup>166</sup> La referencia en la encuesta a la Policía Militar significa que en la mayor parte de los casos son agentes de este cuerpo de seguridad los que primero tienen contacto con la víctima y que se encargan de tomar las medidas iniciales de acogida y llevarlas a la comisaría de policía para la elaboración de los documentos pertinentes y procedimientos relativos a ese tipo de delito.

<sup>167</sup> Las comisarías de policía son órganos de la Policía Civil donde son formalizadas las denuncias y tomadas las medidas de Policía Judicial con la finalidad de investigar la autoría y la materialidad del delito. También tienen por función la atención al público y pueden ser especializadas, como las que se encargan de los delitos que tienen como víctimas a las mujeres.

<sup>168</sup> LOBO, Yolanda Pecharromán, “Victimología” en COLLADO MEDINA, José (coord.), *La investigación criminal y sus consecuencias jurídicas*, Dykinson, Madrid, 2010. pág. 365 a 392, pág. 374.

<sup>169</sup> La victimización secundaria, derivada de las relaciones establecidas entre la víctima y el sistema de justicia penal, es tan grave como la propia experiencia individual del delito y sus consecuencias (victimización primaria), puesto que “es el propio sistema el que victimiza a quién se dirige a él pidiendo justicia y protección y porque la víctima se siente frustrada en sus expectativas, quedando afectado, de esta manera, el prestigio del propio sistema de justicia” (*Ibidem*). Cuanto mayor es la brecha entre lo esperado por las víctimas cuando recurren a las instituciones policiales –apoyo y una solución para el caso– y lo que efectivamente ocurre –cuestionamientos, trato deshumanizado, estereotipado y burocrático– mayor será la probabilidad de que sufran victimización secundaria.

segura de que quieres denunciarlo?”, “¿si fue tan grave como me estás contando por qué no viniste antes?”, “¿seguro que no hiciste nada, no lo provocaste?”, “¿cuánto bebiste?”, “¿si te golpeó dónde están las lesiones?”, “¿por qué no lo denunciaste la primera vez que te hizo daño?”, “¿otra vez aquí?”, “¿si no te acuerdas, cómo voy a saber que estás diciendo la verdad?”, “¿quieres que el padre de tus hijos sea arrestado?”, “¿cómo vas a vivir si lo dejas y tú no trabajas?”, “¿pero no fuiste violada de verdad, no?” ilustran el escenario que las mujeres tienen que enfrentarse cuando deciden denunciar los delitos de que fueron víctimas<sup>170</sup>.

No solo por medio del discurso ofensivo se concretan las prácticas que violan la dignidad y los derechos de las mujeres. La arquitectura y la organización del espacio en las dependencias policiales no están pensadas para acoger a las víctimas. En muchos casos, el primer contacto de la víctima con la persona encargada de atender al público es realizado sin cualquier privacidad, al lado de otras personas que esperan su vez. Los motivos de estar allí y lo que le pasó pasan a ser compartidos entre todas, incluso cuando el agresor también está presente. Esa exposición fragiliza aún más a la víctima; no hay un entorno seguro, en términos de confianza, acogida, comprensión y buen trato por parte de los agentes públicos, al contrario, lo que prevalece es la idea de menosprecio, malos tratos, juicios de valor estigmatizantes y discriminatorios y descalificación de la violencia, lo que hace que revivan las experiencias traumatizantes y una vez más se conviertan en víctimas<sup>171</sup>.

El contexto en que se producen tales interacciones, el modo por el cual son tratadas y la perspectiva adoptada cuando las víctimas son mujeres afectan a la calidad de la investigación de los hechos, pues no será una investigación diligente e imparcial, en cambio, partirá de determinados estereotipos y patrones discriminatorios, llegando al punto de comprometer su metodología, las providencias adoptadas y excluir ciertas líneas de investigación. En este sentido, cabe subrayar que al contrario de otros delitos, como el robo de un coche, en que se demuestra apoyo y solidaridad a la víctima, aquellos que conciernen a las mujeres, sobre todo los sexuales, son blanco de preguntas sobre sus

---

<sup>170</sup> Las frases fueron recogidas durante el ejercicio profesional de la investigadora.

<sup>171</sup> Las comisarias especializadas en la atención a las mujeres suelen tener sus equipos formados preferencialmente por mujeres, pero esto no es una regla, de manera que, en ocasiones, el primer contacto institucional de una mujer que fue víctima de violencia puede ser con un policía. Sin embargo lo comentado, el hecho de que sea una funcionaria la primera persona que interactúa con la víctima tampoco garantiza un buen trato.

hábitos, comportamiento, ropas y prácticas comunes, de modo que cualquier elemento puede ser utilizado para poner en duda la violencia y la reputación de quien la sufrió. Para luchar contra ese cuadro resulta particularmente importante, por ende, que las autoridades a cargo de la investigación de delitos de violencia contra la mujer la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado en erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales encargadas de su protección.

Otro lado de la vulnerabilidad a la cual están expuestas las mujeres en el contexto de las prácticas policiales corresponde a las violaciones de derechos cometidas por los miembros de los cuerpos de policía durante el ejercicio de funciones legítimas, como procedimientos rutinarios, redadas policiales o en situaciones en las que ellas infringen la ley. Son violaciones a la integridad física, psíquica, moral y sexual y ocurren dentro de una relación de poder en que la otra parte está completamente subyugada a las decisiones del individuo que tiene el uso legítimo de la fuerza. Estas prácticas son manifestaciones particulares de la violencia de género y se fundamentan en la situación de subordinación y discriminación estructural de las mujeres en la sociedad. Lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las mujeres en este contexto es el hecho de que las conductas parten de representantes del Estado, que, como fue mencionado, tienen legítimamente el uso de la fuerza y ejercen un rol de autoridad. En determinado momento, con todo, exceden los límites del uso del poder y actúan en disconformidad con la ley y con los parámetros de derechos humanos constitucionalmente establecidos, pasando de encargados de la protección de la población a agentes de la violencia.

La gravedad de la conducta se manifiesta también si se considera todo lo que fue observado anteriormente con respecto a los obstáculos enfrentados por las mujeres cuando denuncian un delito de carácter sexual. En esta línea, en principio, los miembros de los cuerpos de policía, como agentes públicos que son, tienen cierta presunción de veracidad en cuanto a sus actos y declaraciones, lo que puede transformarse en una “ventaja” cuando se les acusa de cometer un delito y no hay –o no son considerados en la investigación o durante el proceso– testigos de sus actos. Sirve de ejemplo para esta y otras situaciones aquí descritas, el caso Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira y otros (Favela Nova Brasília) con respecto a la República Federativa de Brasil, remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de mayo de 2015, en que la palabra

de los agentes públicos tuvo lugar destacado en la investigación de los hechos que les fueron atribuidos sin que fueran considerados otros medios de prueba.

El asunto es emblemático para el análisis de la violencia policial en Brasil y su relación con algunos de los principales grupos en situación de vulnerabilidad por algunos motivos: 1) fijó la atención de la comunidad internacional en el contexto de violencia policial en Brasil, marcada por patrones de empleo excesivo de la fuerza, falta de rendición de cuentas y tolerancia institucional, las cuales creaban una atmósfera incompatible con la efectiva protección de los derechos humanos; 2) fue el primer caso del período democrático brasileño en que ejecuciones sumarias colectivas cometidas por representantes del Estado (integrantes de cuerpos policiales estatales) llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 3) retrató múltiples violaciones de derechos humanos durante el ejercicio de la labor policial contra diversos colectivos históricamente en situación de vulnerabilidad, así como la estigmatización hacia ellos; 4) puso de manifiesto la impunidad que predominaba en los delitos practicados por los miembros de los cuerpos de seguridad y los mecanismos utilizados por el sistema de justicia penal para justificar ejecuciones, como será examinado en el apartado siguiente. Aunque sea mencionado en este momento para ilustrar la situación de las mujeres ante la actuación policial el caso también se refiere a violación de derechos de personas negras y pobres, residentes en favelas y, así, debe ser considerado en la lectura del próximo apartado.

El caso se relaciona con la ejecución extrajudicial de 26 residentes de la favela Nova Brasília, ciudad de Rio de Janeiro, seis de ellos niños, y abusos sexuales, entre los cuales la violación y tortura, practicados contra tres mujeres y niñas durante dos incursiones efectuadas por la Policía Civil el 18 de octubre de 1994 y el 8 de mayo de 1995. Con respecto a la violencia de género, los actos fueron practicados mediante el uso excesivo de la fuerza y de la posición de autoridad de los agentes y tuvieron como objetivo humillarlas, intimidarlas y castigarlas por no haber dado informaciones sobre los sospechosos o por tener una relación de proximidad con ellos. Las muertes y los actos de tortura y violencia sexual descritos en el caso fueron marcados por la impunidad: las investigaciones de los homicidios fueron lentas e incompletas, los autores no fueron identificados, las acciones penales respecto a los casos prescribieron a nivel interno y las familias de las víctimas no fueron indemnizadas. Con respecto a la violencia sexual, las autoridades brasileñas no investigaron los hechos y las víctimas tampoco recibieron



ningún tipo de reparación por la violencia sexual sufrida. La omisión del Estado brasileño en investigar de forma adecuada o no investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las muertes y de los actos de violencia sexual hizo que las víctimas se convirtiesen otra vez en víctimas, pues el objetivo de las investigaciones no fue averiguar la autoría de las muertes o responsabilizar sus autores, sino justificarlas delante de la legitimidad de la acción, apuntándolas como personas que se resistieron a la intervención policial pues estaban implicadas en prácticas criminales.

En su 117º período ordinario de sesiones, la Corte Interamericana emitió la sentencia relativa al caso, que fue notificada a Brasil el 12 de mayo de 2017. El país fue considerado responsable internacionalmente por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal en perjuicio de familiares de las personas que fueron asesinadas y de las mujeres víctimas de violencia sexual. Entre las medidas de reparación ordenada por la Corte al Estado brasileño están:

1) Publicar anualmente un informe oficial con los datos relativos a las muertes producidas durante operativos de la policía en todos los estados del país y con información actualizada anualmente sobre las investigaciones realizadas respecto a cada incidente que provocó la muerte de cualquier parte involucrada en los hechos (civiles o miembros de los cuerpos policiales);

2) Establecer los mecanismos normativos necesarios para que en supuestos de presuntas muertes, tortura o violencia sexual derivadas de intervención policial, en que *prima facie* aparezca personal policial como posible imputado, se encargue la investigación a un órgano independiente y diferente de la fuerza pública involucrada en el incidente;

3) Adoptar las medidas necesarias para que el estado de Rio de Janeiro establezca metas y políticas de reducción de letalidad y violencia policial;

4) Implementar, en un plazo razonable, un programa o curso permanente y obligatorio sobre atención a mujeres víctimas de violación sexual para las Policías Civil y Militar de Rio de Janeiro;

5) Adoptar las medidas necesarias para uniformar la expresión “lesión corporal u homicidio derivada de intervención policial” en los reportes e investigaciones realizadas

por la Policía o el Ministerio Público en casos de muertes o lesiones causadas durante la intervención policial. El concepto de “oposición” o “resistencia” a la actuación policial debe ser abolido de los documentos oficiales.

El siguiente ejemplo señala que incluso la mujer integrante de los cuerpos de policía se encuentra en posición de vulnerabilidad, de manera que la pertenencia a la institución no le deja libre de la violación de sus derechos. Conviene ilustrar lo afirmado con un caso que ocurrió en el estado de São Paulo, en febrero de 2011, en el interior de una comisaría de policía<sup>172</sup>. Durante la investigación de una agente policial por el delito de corrupción, tres miembros del órgano correccional de la Policía Civil (hombres), dos de ellos con jerarquía superior a la suya, ante su negación en dejarse registrar, le sujetaron y quitaron sus pantalones a la fuerza, mientras gritaba y pedía ayuda, en una escena que más se acerca a una violación que a una actuación policial, bajo la justificación de recoger el dinero que había obtenido ilegalmente y que estaría escondido en su ropa interior. Aunque hubiera mujeres en el momento de los hechos, ninguna de ellas pertenecía a la Policía Civil, sino a otros cuerpos de seguridad y por ello no les fue autorizado realizar el cacheo. Los hechos tuvieron gran repercusión no solo el ámbito estatal sino también federal, ante la gravedad de la violación a los derechos humanos practicada contra la agente de policía y las fuertes imágenes de la escena descrita, que fue grabada por los propios funcionarios y ampliamente difundida<sup>173</sup>.

Los episodios elegidos para ilustrar cómo se materializa la situación de vulnerabilidad de la mujer brasileña en el contexto policial señalan que la violación a sus derechos y la discriminación son marcas estructurales del *modus operandi* de los cuerpos de seguridad. Dichas marcas forman parte de la violencia institucional de género, definida

---

<sup>172</sup> G1 SÃO PAULO, “Ex-escrivã que teve roupa tirada em delegacia é absolvida em SP”, *G1*, 27 de mayo de 2014, <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/05/ex-escriva-que-teve-roupa-tirada-em-delegacia-e-absolvida-em-sp.html>.

<sup>173</sup> Los agentes, tras los debidos procesos penal y administrativo, fueron condenados. En el Ordenamiento jurídico brasileño está permitido el registro de una mujer por un hombre con carácter excepcional, con la finalidad de no retrasar o perjudicar la diligencia (Código Procesal Penal, Decreto-Ley n.º 3.689, de 3 de octubre de 1941, artículo 249). Como es posible observar, no fueron respetados los patrones mínimos de registro a una persona, especialmente, a una mujer, pues teniendo en cuenta que la redada fue planeada, podría haber sido designada una policía de la institución para acompañar el equipo y llevar a cabo los procedimientos de intervención corporal necesarios de manera adecuada y compatible con los parámetros establecidos. Además, la funcionaria fue sometida, de manera violenta y humillante, al poder de las autoridades, la cual no encuentra amparo en el Ordenamiento jurídico. Por los motivos expuestos, la prueba obtenida (el dinero fue encontrado en dicha ropa interior), fue invalidada por el Poder Judicial y la funcionaria, absuelta.

por Lagarde y de Los Ríos como la que proviene de “la omisión, negligencia o complicidad de las autoridades con los agresores (...) o la que se debe a la normalización de las desigualdades, la discriminación y la violencia, que refuerza la permanencia de estructuras estatales que perpetúan la desigualdad entre los géneros y no reconocen ni garantizan los derechos de las mujeres. Por el contrario, actúan en defensa del patriarcalismo tanto en la sociedad como en el Estado mismo”<sup>174</sup>. Establecido desde la base la omisión, ante los casos relatados anteriormente, se puede añadir al concepto desarrollado por la mencionada autora también la conducta activa de los representantes del Estado, practicadas durante el ejercicio de sus funciones y que se concretan a través de actos que van desde humillaciones y ofensas verbales hasta la violación y la tortura.

Bajo esta línea de ideas, la autora observa que el comportamiento de los representantes del Estado establece un vínculo de complicidad entre agresores y autoridades, vínculo no necesariamente pactado con antelación, pero de forma ideológica y políticamente activa<sup>175</sup>. Esa complicidad normaliza los actos de violencia hacia la mujer y crea un entorno en que los propios miembros de los cuerpos de seguridad ocupan el lugar de agresores, bajo la justificativa de ejercicio de sus funciones. De igual modo, perpetúa la discriminación y la persistencia de estereotipos de género en el sistema policial, jurídico y social, enviando un mensaje de tolerancia sobre esas conductas tanto para la ciudadanía como para los individuos que integran los cuerpos de seguridad.

Asimismo, la complicidad que puede conducir a la impunidad, por un lado, y la sensación de inseguridad de las víctimas (física o institucional, vinculada a la falta de confianza en los órganos públicos), por otro, aumentan exponencialmente la situación de vulnerabilidad de las mujeres en la medida que tienen la participación del propio Estado y contribuyen al mantenimiento de estructuras desiguales y excluyentes, de acuerdo con lo que subraya una vez más Lagarde y de los Ríos al afirmar que “(...) ésta en su mayor parte es una violencia ejercida por hombres contra mujeres, pero no sólo por hombres, por hombres colocados en supremacía social, sexual, jurídica, económica, política,

---

<sup>174</sup> LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, “Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres” en BULLEN, Margaret Louise y DÍEZ MINTEGUI, María Carmen (coords.), *Retos teóricos y nuevas prácticas*, Ankulegi, San Sebastián, 2008, pág. 209 a 240, pág. 233.

<sup>175</sup> *Ibidem*.

ideológica y de todo tipo, sobre mujeres en condiciones de desigualdad, de subordinación, de explotación o de opresión, y con la particularidad de la exclusión”<sup>176</sup>.

El examen de la situación de vulnerabilidad de las mujeres a partir de las relaciones con los cuerpos de policía arroja luz al planteado por Lagarde y de los Ríos y pone de manifiesto cómo se puede intensificar en casos en que a los hombres, ya en una posición de supremacía en razón de las estructuras sociales construidas histórica y culturalmente, les es concedida más autoridad. Igualmente, y desde la óptica de documentos internacionales como la CEDAW, especialmente en el artículo 2º, “d”<sup>177</sup>, y la Convención de Belém do Pará, en particular su artículo 2º, “c”<sup>178</sup>, señalan que el Estado brasileño todavía sigue siendo responsable de prácticas que están en desacuerdo con los documentos firmados. La consecuencia que se extrae de los artículos mencionados es el deber de debida diligencia ante un acto de violencia contra una mujer y dicha diligencia debe estar presente tanto en las investigaciones acerca de los delitos de violencia practicados hacia ellas como en el modo de actuar del personal policial.

Es cierto que hay buenas prácticas y conductas que están de acuerdo con la matriz discursiva de derechos humanos adoptada por el Estado brasileño, principalmente concretadas en los últimos años, pero lo importante para la discusión propuesta en esta investigación es subrayar las múltiples violaciones de derechos que sufren las mujeres por el hecho de ser mujer. Y, bajo esta óptica, analizar por qué conductas como las relatadas anteriormente todavía están arraigadas en las prácticas policiales y cómo la ausencia de la perspectiva de género en la formación y en la praxis de los cuerpos de seguridad interfieren en esta dinámica.

---

<sup>176</sup> LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, “Del femicidio al feminicidio”, citado, pág. 221.

<sup>177</sup> Artículo 2, “d”: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación”.

<sup>178</sup> Artículo 2, “c”: “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.

### 2.3 La situación de vulnerabilidad de las personas negras

El primer dato fundamental para abordar la situación de las personas negras en Brasil se refiere a los números relativos a ese grupo<sup>179</sup>. El último censo demográfico realizado en el país, en 2010, muestra que cerca de 82 millones de personas se autodeclararon *pardas*, lo que corresponde a un 43,1%, y 15 millones, *pretas*, representando un 7,6% del total de la población. Eso significa que, de acuerdo con la clasificación del órgano oficial de estadística, en Brasil un 50,7% de su población es negra<sup>180</sup>. Teniendo en cuenta la realidad brasileña, por tanto, la “raza” es una categoría fundamental para comprender el proceso histórico y de conformación de Brasil como nación y el modo por el cual sus instituciones fueron configuradas<sup>181</sup>. En sentido similar, arroja luz a las consecuencias del pasado colonial de esclavitud, a la construcción de profundas desigualdades entre la población, al racismo estructural todavía presente en la sociedad y a las acentuadas diferencias en cuanto a la movilidad social y oportunidades de las personas negras. Asimismo, aporta herramientas para comprender la situación

---

<sup>179</sup> Tomando en cuenta la diversidad étnica de la población brasileña y la existencia de una serie de términos relativos a las personas que forman parte del grupo en estudio (muchos de ellos con un valor no solo semántico, sino también político y social) y los intensos debates que se producen en torno de ellos, es imprescindible aclarar qué significa la mención a “personas negras” en Brasil. El *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística* de Brasil (IBGE) utiliza el término “*negro*” en la realización de las estadísticas demográficas que tienen por finalidad la identificación “étnica/racial” de sus habitantes. La clasificación de “color o raza”, expresión utilizada por el IBGE, señala el color de las personas y define los consecuentes grupos étnicos/raciales formados a partir del citado criterio. El término “*negro*” abarca a las personas *pretas* y *pardas*, que se suman a las *brancas*, a las *indígenas* y a las *amarelas* (relativo a la población de origen asiático) para formar los cinco grupos étnicos/raciales identificados por el órgano oficial. Hay que tener en cuenta, aun, que la indicación del color/raza y la pertenencia a un grupo es resultado de la autoatribución, es decir, la persona, durante la realización de la encuesta, informa, a partir de los criterios presentados, cuál es su color/raza. Es importante observar que esa clasificación se fundamenta en el proceso histórico, en los movimientos migratorios y en las particularidades de la población brasileña y, por ello, es única, formada a partir de elementos locales, de acuerdo con lo que explica Osório en su artículo (OSÓRIO, Rafael Guerreiro, “O sistema classificatório de “cor” ou “raça” do IBGE”, *Texto para discussão*, IPEA, Brasília, noviembre 2003, pág. 18-20). Por tal motivo, este trabajo seguirá el criterio de clasificación adoptado por el mencionado instituto y utilizará el término “negro” para las referencias al grupo formado por las personas *pretas* y *pardas*.

<sup>180</sup> INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), *Censo Demográfico 2010: Características gerais população, religião e pessoas com deficiência*, IBGE, Rio de Janeiro, 2010, pág. 62. El último censo demográfico realizado en Brasil por IBGE indicó que la población negra por primera vez era más numérica que la blanca: 97 millones de personas contra 91 millones, respectivamente (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), *Comunicado n.º 91 - Dinâmica demográfica da população negra brasileira*, IPEA, Brasília, 2011, pág. 3). Teniendo en cuenta que las encuestas sobre el perfil de la población son el resultado de la autoidentificación, cabe puntualizar que ese aumento en parte es derivado de los procesos de valoración de la cultura negra y del empoderamiento de las personas que conforman el colectivo.

<sup>181</sup> Para un estudio detallado sobre el tema, consúltese SCHWARCZ, Lilia Moritz, *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930*, Companhia das Letras, São Paulo, 1993.

pasada y presente de discriminación y exclusión social de tal comunidad, la razón de la desigualdad en el acceso a los sistemas de educación, de justicia, de participación política y de toma de decisiones e, igualmente, el motivo de las mayores tasas de victimización por homicidio y por letalidad policial de esas personas, como será desarrollado a continuación. Como telón de fondo para los aspectos comentados, cabe enfatizar, que el racismo actúa tanto como causa y efecto para mantener estados de vulnerabilidades, desigualdades y discriminaciones.

Además de ser un criterio numérico, que debe ser considerado cuando se analiza las características de la población, la “raza” también fue y sigue siendo un elemento determinante en los procesos de estratificación social, intensificación de la vulnerabilidad y exclusión de la comunidad negra. En este sentido, Paixão explica que los motivos por los cuales esa categoría actúa como un criterio para establecer los tipos de relaciones y experiencias de ese colectivo en Brasil pueden ser resumidos en dos<sup>182</sup>. El primero concierne a la herencia dejada por el proceso de abolición de la esclavitud que mantuvo la propiedad y el poder en manos de un pequeño grupo privilegiado y negó derechos sociales y económicos a los descendientes de los antiguos esclavos. El segundo se refiere a la adopción, en los primeros 30 años del siglo XX, de políticas que llevaron a la exclusión de la población negra de las esferas políticas, económicas y sociales e, igualmente, el mantenimiento de prácticas discriminatorias a lo largo del siglo en contra de dicha población en distintos ámbitos estatales y civiles, como el Poder Judicial, escuelas y agencias de empleo, lo que impidieron que esas personas pudieran moverse física y socialmente<sup>183</sup>. En el cuadro de persistente y prolongada desigualdad, la violencia general del contexto brasileño se agrega al componente racial y a la pobreza y como resultado profundiza aún más la situación de vulnerabilidad de las personas

---

<sup>182</sup> PAIXÃO, Marcelo J. P., *Desenvolvimento humano e relações raciais*, DP&A, Rio de Janeiro, 2003, pág. 28.

<sup>183</sup> Como ejemplos de conductas discriminatorias: la criminalización de prácticas culturales y religiosas de la comunidad afrodescendiente recién libertada y la reducción de la mayoría penal a 9 años exclusivamente para esas personas (*Idem*, pág. 69). Sobre el Poder Judicial, merece destacar que aunque el objetivo de esta investigación esté centrado en las prácticas policiales, es cierto que la cuestión de la desigualdad y del racismo institucional puede ser contemplada en todos los órganos del sistema de justicia penal. En tal sentido, la percepción del Poder Judicial sobre qué conductas caracterizan el delito de racismo y otros actos de discriminación en el Ordenamiento jurídico brasileño en muchos casos es distinta de la percepción de las víctimas y tomada solamente como una ofensa o ejercicio de la libertad de expresión, sin tener en cuenta el componente vinculado a la “raza”. Para más detalles, consúltese SANTOS, Gislene Aparecida dos, “Nem crime, nem castigo: o racismo na percepção do judiciário e das vítimas de atos de discriminação”, *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, Universidade de São Paulo, São Paulo, n.º 62, 2015, pág. 184 a 207.

afrodescendientes, que, por ello, están más expuestas a la violación de sus derechos y a la imposibilidad de ejercerlos en términos de igualdad si son comparadas a las de otros grupos. Ocupan, como las mujeres, un puesto de segunda categoría de ciudadanía, en que la subordinación a los parámetros y normas del grupo estándar sigue siendo un trazo relevante en sus relaciones sociales e interacción con el mundo.

Los mecanismos de discriminación y de exclusión, de tal modo, se intensifican de acuerdo con el tono de la piel y otros rasgos fenotípicos, como el tipo de cabello<sup>184</sup> y la forma de la nariz y de la boca, lo que se convierte en una gradación en cuanto al acceso y disfrute de los derechos y en la composición de una escala de desigualdades, en que el blanco ocupa una posición privilegiada. Como resultado de esa escala, la atribución del color por sí o por terceros y la pertenencia a un grupo u otro pueden cambiar en razón de parámetros sociales y económicos. Esto significa que puede ocurrir un proceso de “blanqueamiento” si una persona negra asciende económica o socialmente, pues así estaría más cerca del patrón establecido por el ideal de blancura todavía vigente en la sociedad brasileña<sup>185</sup>. Esa dinámica establece lo que Osorio denomina “la variación social de color”<sup>186</sup> y, por medio de la reivindicación de la blancura, una mujer o un hombre negro pueden tener más o menos reconocidos y garantizados sus derechos, de modo que más que un criterio objetivo, la identificación del color de la piel tiene un fuerte componente subjetivo y socioeconómico<sup>187</sup>.

---

<sup>184</sup> Los sesgos negativos hacia el cabello natural de las mujeres negras y la imposición de un determinado patrón de belleza (el cabello liso) señalan como dichos mecanismos actúan. El pelo afro es considerado “malo”, feo, menos atractivo y sucio. Esa percepción genera discriminaciones como las producidas en el mercado laboral y afecta a la autoestima y la construcción de la identidad individual. A propósito, véase HOOKS, bell, “Alisando nuestro pelo”, *La Gaceta de Cuba*, Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), La Habana, n.º 1, 2005, pág. 70 a 73.

<sup>185</sup> OSÓRIO, Rafael Guerreiro, *O sistema classificatório de “cor” ou “raça” do IBGE*, citado, pág. 13.

<sup>186</sup> *Ibidem*.

<sup>187</sup> La mención a los rasgos fenotípicos que viene siendo hecha a lo largo de este trabajo es especialmente relevante, pues, de acuerdo con Nogueira, en Brasil la discriminación racial tiene la forma de “prejuicio racial de marca” (*preconceito racial de marca*), en que las características aparentes de los seres humanos (rasgos fenotípicos), sobre todo el color de la piel, son la base del racismo, al contrario de la ascendencia (*preconceito racial de origem*), como ocurre en Estados Unidos (NOGUEIRA, Oracy, “Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: sugestão de um quadro de referência para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil”, *Tempo social*, Universidade de São Paulo, São Paulo, vol. 19, n.º 1, junio de 2007, pág. 287 a 308, pág. 292). Desde la conformación de los procesos de discriminación en estos términos en el escenario brasileño, el proceso de “blanqueamiento” se explica, puesto que permite acercarse al patrón caucásico por medio de modificaciones estéticas en la apariencia.

La traducción en números de la realidad social del colectivo negro que será hecha a continuación señala que a pesar de ser la mayoría numérica de la población brasileña, sus miembros tienen sus derechos vulnerados en mayor grado, experimentan mayores discriminaciones, están menos representados en las esferas públicas, ocupan menos espacios de poder en la jerarquía social y sufren de modo más acentuado los efectos de la violencia. Dentro del escenario en que la blancura es valorada y establece un grado de fruición de los derechos, la intensificación del estado de vulnerabilidad y la discriminación son consecuencias de las estructuras sociales que históricamente asociaron la negritud a un estatus marcado por la desigualdad y la inferioridad. Teniendo como base los datos suministrados por PNUD y desmenuzados en el inicio de este capítulo, por ende, es posible constatar que muchas de las desigualdades del país y la distancia que separa las poblaciones en cuanto al gozo de sus derechos se fundamentan sobre el criterio analizado en este apartado. De tal manera, las personas negras se encuentran en peor situación económica, sanitaria, social, educativa y laboral en comparación con las blancas e, indudablemente, eso tiene efecto en la relación con el Estado. Lo que fue comentado demuestra que el criterio racial en Brasil debe ser considerado cuando se analiza el grado de desarrollo humano de su población a partir de los componentes de longevidad, educación e ingreso. Como el informe de PNUD no desagrega los datos por etnia, serán utilizados otros documentos para establecer las condiciones de vida del colectivo en Brasil y demostrar cómo se concretan las “desigualdades sociorraciales brasileñas”<sup>188</sup>.

Con respecto al primer punto, las personas negras se enfrentan a peores condiciones de vida y a una carga más intensa de violencia ejercida específicamente hacia ellas, lo que compromete el ejercicio del derecho a la vida. Los sujetos del grupo analizado, si son comparados a otras personas, tienen un 147% más de probabilidad de ser víctimas de homicidio<sup>189</sup>. En cuanto a tal afirmación, el índice de victimización relativo a las mujeres negras aumentó de forma significativa a lo largo de diez años: si en 2004, las mujeres blancas representaban un 44% de las víctimas de homicidio y las negras

---

<sup>188</sup> PAIXÃO, Marcelo J. P., *Desenvolvimento humano e relações raciais*, citado, pág. 12.

<sup>189</sup> Ese dato se refiere a las personas de veintiún años, que, de acuerdo con IPEA, es la edad en que hay mayor probabilidad de victimización por homicidio (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÓMICA APLICADA (IPEA), *Atlas da Violência 2016*, IPEA, Brasília, 2016, pág. 22).



un 48%, en 2014, esos números pasaron al 32,5% y al 62%, respectivamente<sup>190</sup>. El informe no explica las causas de esa discrepancia, pero la interacción entre género y “raza” que fue desarrollada en el capítulo 1 puede ofrecer algunas pistas sobre los motivos de ese resultado.

En cuanto a la educación, en 2014, la tasa de analfabetismo de la población brasileña de 15 años o más fue un 7,9%. Si los datos son desagregados considerando la raza, la tasa pasa al 5,1% (personas blancas) y al 10,6% (personas negras)<sup>191</sup>. Si se observa los datos disponibles desde 1995, es posible verificar que esa tasa viene disminuyendo de un modo general a lo largo de los años, pero todavía conserva una relación del doble o más con respecto a las personas negras. En lo que se refiere a la misma categoría etaria, el promedio de tiempo de estudio de las personas negras y blancas en 2014 fue de 7,6 y 9 años, respectivamente, y a lo largo de los años también aumentó<sup>192</sup>. Aunque haya una disminución en la tasa de analfabetismo y un aumento progresivo en los años de estudio, las personas negras permanecen en situación de desventaja educativa. El breve panorama presentado señala que el nivel educativo de negras y negros es considerablemente más bajo si comparado a blancas y blancos y que hay ciertos espacios donde, de forma simbólica, no se les es permitido acceder, sobre todo en aquellas profesiones consideradas de mayor prestigio social. De ahí, se extrae uno de los argumentos que pueden ser utilizados para explicar la poca presencia de estas personas en los puestos de trabajo más calificados o que conceden mayor reconocimiento y estatus social<sup>193</sup>. Otra posible conclusión es que el analfabetismo o los pocos años de

---

<sup>190</sup> FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, *10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública*, citado, pág. 132.

<sup>191</sup> INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), *Retrato das desigualdades de gênero e raça*, IPEA, Brasília, <http://www.ipea.gov.br/retrato>.

<sup>192</sup> *Ibidem*.

<sup>193</sup> Con el objetivo de deslegitimar el mito de la democracia racial y arrojar luz a las contundentes desigualdades entre personas negras y blancas en diversos aspectos de sus vidas y ámbitos sociales, los movimientos negros en Brasil proponen un método empírico para verificar la existencia o no del racismo en espacios públicos, denominado “test del cuello”. El test consiste en examinar la representatividad de personas negras en los medios de comunicación y en ambientes como hospitales, universidades, órganos de los Poderes Públicos, escuelas de alto patrón, partidos políticos, cárceles y orfanatos teniendo en cuenta cuál es el rol que ocupan y la proporción numérica en cada espacio. Probablemente, esas personas se encontrarán en situación de subordinación y desprestigio social, ejerciendo funciones menospreciadas y mal pagadas o tendrán poca o ninguna representatividad. Acerca de lo comentado, véase: <http://www.geledes.org.br/existe-racismo-brasil-faca-o-teste-pescoco-e-descubra/#gs.HBYpgy8> y <http://www.geledes.org.br/quer-saber-se-ainda-o-racismo-existe-no-brasil-faca-o-teste-pescoco-parte-ii/#ixzz3ZBGnGRpC>. Específicamente sobre la población carcelaria, el Departamento Penitenciario de Brasil afirma que el perfil de los detenidos es el siguiente: un 55,07% tiene entre 18 y 29 años, un 61,6% son negros y un 75,08% estudiaron hasta la enseñanza fundamental completa, que va hasta los 14 años

permanencia en la enseñanza formal pueden conllevar la falta de conocimiento de sus derechos o las formas de reivindicarlos. Eso es especialmente importante en la interacción con el Estado y, en particular, frente a la actuación de sus cuerpos de policía.

Con respecto a los ingresos, también es posible observar el alto grado de desigualdad racial que persiste en Brasil<sup>194</sup>. El promedio de la renta de la población negra, en 2014, correspondía a R\$ 886 y a su vez la de la población blanca era de R\$ 1.552,80. Si los datos son desagregados, con la finalidad de poner de relieve la perspectiva de género asociada a la “raza”, la renta media es todavía más baja. Las mujeres negras tuvieron una renta media de R\$ 675,20 y a partir de las categorías utilizadas (población negra y blanca, mujeres blancas, hombres blancos, mujeres negras y hombres negros), ellas son las que están situadas en el último nivel en cuanto a la renta.

Como asevera Paixão en el estudio que desagregó los componentes del IDH según personas afrodescendientes y blancas en Brasil, cualquiera que sea el indicador elegido para analizar las desigualdades raciales, las primeras siempre estarán en peores posiciones que las segundas<sup>195</sup>. Asimismo, sea cual sea la región del país, los indicadores con respecto al colectivo negro siempre serán menos favorables en comparación con el blanco y, desde esta perspectiva, si se desagregan los datos también por género, las mujeres negras estarán en peores condiciones que todas las otras personas (hombres blancos, mujeres blancas y hombres negros).

En respuesta a esta situación de desigualdad estructural en razón de la “raza”, el 20 de julio de 2010 fue promulgado el Estatuto de la Igualdad Racial (Ley Federal n.º 12.288), cuya finalidad es garantizar a la población negra la efectiva igualdad de oportunidades, la defensa de sus derechos étnicos individuales y colectivos y luchar contra la discriminación. La definición de discriminación racial de esa ley es similar a la de Naciones Unidas y recalca la asimetría en las condiciones de acceso y ejercicio de los

---

(BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN), *Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN–dezembro 2014*, DEPEN, Brasília, 2016, pág. 36, 41, y 46).

<sup>194</sup> INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), *Retrato das desigualdades de gênero e raça*, citado.

<sup>195</sup> PAIXÃO, Marcelo J. P., *Desenvolvimento humano e relações raciais*, citado, pág. 80.

derechos de la ciudadanía negra<sup>196</sup>. Además del mencionado concepto, hay otros que son fundamentales para el debate sobre “raza” en el escenario brasileño, como el de desigualdad racial<sup>197</sup> y desigualdad de género y “raza”<sup>198</sup>.

El Estatuto fue un hito jurídico y social en la forma como hasta entonces el Estado trataba el tema racial y, especialmente, el grave problema de la discriminación y de las desigualdades contundentes en el país. Por un lado, descalificó el discurso tradicional y hegemónico de integración cordial y armónica de las razas, el mito de la democracia racial y la inexistencia de racismo en la sociedad brasileña, considerándolo un problema grave que afecta a la mitad de su población y que debe ser enfrentado<sup>199</sup>. Los tres puntos mencionados sintetizan la raíz de las causas de la discriminación y de la agravada situación de vulnerabilidad de negras y negros y exponen el pensamiento predominante en la sociedad brasileña y la persistencia en la creencia en la democracia racial, como observa Arocena: “Los brasileños, orgullosos de la ausencia de racismo en su sociedad, raramente percibieron la estrecha asociación entre las divisiones raciales y el profundo abismo que separa a los que tienen riqueza de los que no la tienen”<sup>200</sup>. De ahí, en razón del modo como la discriminación racial fue incorporada a la sociedad brasileña, las dimensiones raciales pueden ser ocultadas, enmascaradas o desplazadas a otras categorías de identidad, como el género, la pobreza, la orientación sexual, la ausencia de educación formal, la juventud o la transgresión de la ley, con base en la justificación de que no hay racismo en Brasil y que la “raza”, por tanto, no es un factor determinante para explicar las contundentes disparidades entre la vida de personas negras y blancas. En tal dinámica,

---

<sup>196</sup> Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 1: “En la presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

<sup>197</sup> Artículo 1º, II: “Toda situación injustificada de diferenciación de acceso y fruición de bienes, servicios y oportunidades, en la esfera pública o privada, en razón de raza, color, descendencia u origen nacional o étnico” (traducción de la autora).

<sup>198</sup> Artículo 1º, III: “Asimetría existente en el ámbito de la sociedad que acentúa la distancia social entre mujeres negras y los demás seguimientos sociales” (traducción de la autora).

<sup>199</sup> AROCENA, Felipe, “Brasil: de la democracia racial al estatuto de la igualdad racial”, *Argumentos*, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, vol. 20, n.º 55, 2007, pág. 97 a 115, pág. 100. Sobre el mito de la democracia racial y la consideración de que, por ello, no hay racismo en Brasil consúltese también GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo, “Democracia Racial: el ideal, el pacto y el mito”, *Estudios Sociológicos*, El Colegio de México, Ciudad de México, vol. 20, n.º 59, 2002, pág. 305 a 333.

<sup>200</sup> *Ibidem* (AROCENA).

la discriminación racial no se percibe como elemento central que modela las experiencias de las personas negras, puesto que el énfasis recae sobre dimensiones socioeconómicas, vinculadas, sobre todo, a la profunda brecha entre pobreza y riqueza en el contexto brasileño<sup>201</sup>.

Por otro lado, el Estatuto reafirmó una serie de derechos a las personas negras que ya habían sido reconocidos constitucionalmente a la ciudadanía de una forma general y estableció acciones afirmativas y mecanismos para el alcance de la igualdad material entre el colectivo negro en todos los niveles de las instituciones públicas. Sobre la base de dicho marco legal es posible efectuar dos lecturas sobre el contexto en que viven las personas que componen el grupo en estudio: la primera, en cuanto a los avances en la protección y a la posibilidad de más efectividad de sus derechos a partir de un texto elaborado exclusivamente para enfrentar las desigualdades raciales; y la segunda, que examina el otro lado de ese sistema de garantías y protección y señala en qué campos y cómo se concreta la violación de derechos hacia las personas negras y por ello deben ser destacados en la ley para que así se les conceda mayor protección.

De tal modo, la ley pone de manifiesto los puntos débiles, de mayor vulnerabilidad de esa población, y que por tal motivo recibieron atención especial del Poder Legislativo, como salud, educación, libertad religiosa, trabajo y acceso a la tierra y a la vivienda adecuada. Un aspecto de interés para este trabajo se refiere a las instituciones policiales y está recogido en el artículo 53 del Estatuto: “el Estado adoptará medidas especiales para cohibir la violencia policial que incide sobre la población negra”<sup>202</sup>. Como complemento, el artículo siguiente refuerza que los actos de discriminación practicados por funcionarios hacia las personas negras serán cohibidos. Al especificar en un artículo que la población negra es víctima de la violencia cometida por los propios representantes del Estado, el Estatuto llamó la atención sobre uno de los temas sensibles relativos a las instituciones que emplean legítimamente la fuerza y que más presentes se hacen en el cotidiano de la ciudadanía, los cuerpos de policía. Confirma, así, que es un grupo especialmente frágil en

---

<sup>201</sup> AMAR, Paul, “Táticas e termos de luta contra o racismo institucional nos setores de polícia e segurança” en RAMOS, Sílvia y MUSUMECI, Leonarda, *Elemento suspeito: abordagem policial e discriminação na cidade do Rio de Janeiro*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2005, pág. 230 a 281, pág. 239.

<sup>202</sup> Traducción de la autora.

términos de protección de sus derechos cuando las relaciones se enmarcan en el campo de la seguridad pública.

Ante lo explicado, conviene subrayar que la vulnerabilidad a la que están expuestas las persona negras frente a las prácticas policiales tiene características distintas en relación a aquellas que afectan a las mujeres. En cuanto a las primeras, la vulnerabilidad se materializa, por ejemplo, en la intensificación de la violencia hacia sus cuerpos, en el componente racial como factor determinante para decidir si una persona será parada y registrada, en el número elevado de víctimas durante las intervenciones realizadas por los miembros de los cuerpos de seguridad o en la clasificación como persona sospechosa en razón de sus rasgos fenotípicos. Algunas de las conductas descritas señalan la formulación de un juicio previo de culpabilidad por parte del personal policial y ese será el punto de partida para el análisis de la situación de vulnerabilidad de esas personas en el contexto policial.

El modo de actuar descrito en el párrafo anterior corresponde a la concreción del racismo institucional, manifestación en que, de forma encubierta o indirecta, son adoptadas prácticas discriminatorias en el ámbito público o privado en razón del color o de la etnia de una persona. Son el resultado de elecciones actuales o pasadas hechas por las instituciones y reeditadas por decisión o por inercia del Estado<sup>203</sup>. Esas prácticas y comportamientos reproducen y naturalizan las desigualdades existentes y también agravan la situación de vulnerabilidad del colectivo negro. Bajo esta perspectiva, las instituciones y organizaciones públicas “operan de forma distinta en la distribución de los servicios, beneficios y oportunidades a los diferentes grupos raciales”<sup>204</sup>, lo que produce y reproduce una jerarquía que sitúa la negritud en el nivel más bajo de esa organización, legitima conductas excluyentes, mantiene los privilegios del grupo estándar e impide la rendición de cuentas y atribución de responsabilidad por las violaciones de derechos.

De tal modo, los mecanismos del racismo institucional van más allá de las relaciones interpersonales y pasan a formar parte de las conductas cotidianas de los

---

<sup>203</sup> WERNECK, Jurema, *Racismo institucional: uma abordagem conceitual*, Geledés, São Paulo, 2013, pág. 39.

<sup>204</sup> INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), “A promoção à igualdade racial em 2006 e o Programa de Combate ao Racismo Institucional” en JACCOUD, Luciana (org.), *A construção de uma política de promoção da igualdade racial: uma análise dos últimos vinte anos*, IPEA, Brasília, 2009, pág. 147 a 170, pág. 157.

representantes del Estado durante el ejercicio de sus funciones, convirtiéndose en un trazo propio de la institución. El resultado de esta dinámica discriminatoria es el “fracaso colectivo de las organizaciones e instituciones en promover un servicio profesional y adecuado a las personas en razón de su color, cultura, origen racial o étnico”<sup>205</sup> en todos sus niveles y la preservación de una cultura institucional basada en criterios discriminatorios, que se expresa por la contradicción entre los parámetros constitucionales y la realidad. En el caso de las instituciones policiales, el racismo, además de indicar el fracaso colectivo en cuanto a ese tema, pone de manifiesto las graves y reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas hacia las personas negras, pues no solo el juicio arbitrario de culpabilidad será, en ocasiones, orientado a un determinado tipo de ser humano, sino también la violencia practicada contra ellas será más intensa.

Dentro del punto de vista planteado, cabe recalcar, en términos más categóricos, el vínculo entre racismo institucional y vulnerabilidad comentado por Werneck <sup>206</sup>. De acuerdo con la autora, la relación entre los dos conceptos desplaza la mirada y la responsabilidad individual por la situación de riesgo a un campo más amplio, para sacar a la luz diferentes factores que llevan al mantenimiento de ese escenario e, igualmente, exponer planes de acciones, políticas y, principalmente, derechos. En esta línea de argumentos, hay tres dimensiones interconectadas que pueden actuar en la producción de mayor o menor vulnerabilidad hacia las personas en determinados contextos: la individual, la colectiva y la política o programática. La primera se refiere a las características personales; la siguiente, a las condiciones políticas, culturales, económicas u otras que producen o legitiman la vulnerabilidad y la última, a la acción institucional direccionada a la generación de la protección o la reducción de la vulnerabilidad de individuos y grupos desde la perspectiva de los derechos humanos. El racismo institucional pertenece a esa dimensión y, por ende, corresponde a “las acciones políticas institucionales capaces de producir la vulnerabilidad de individuos y grupos sociales victimados por el racismo”<sup>207</sup>.

---

<sup>205</sup> INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), “A promoção à igualdade racial em 2006 e o Programa de Combate ao Racismo Institucional”, citado, pág. 157.

<sup>206</sup> WERNECK, Jurema, *Racismo institucional: uma abordagem conceitual*, citado, pág. 18.

<sup>207</sup> *Ibidem*.

Werneck añade, todavía, que en la dinámica del racismo institucional hay diversos mecanismos selectivos de privilegio y de construcción de barreras, como el grado de internalización de la subordinación, la situación de desprotección social, educación, renta, capacidad de comunicación, conocimientos y enfrentamientos a estereotipos y prejuicios<sup>208</sup>. Todos ellos tienen profunda relación con la realidad de las personas negras y, ciertamente, dificultarán o impedirán la plena realización de sus derechos y la adecuada atención a sus necesidades. Como resultado, se instaurarán procesos, procedimientos y conductas que influirán en la cultura institucional, perpetuando la exclusión racial.

Una de las consecuencias más graves del racismo institucional puede ser observada a través de la diferencia en el nivel de letalidad policial entre personas blancas y negras. Como se desprende de lo que ya fue dicho sobre la violencia policial, es cierto que los cuerpos de seguridad presentan significativos índices de muertes durante sus intervenciones. De las 58.467 muertes violentas intencionales durante 2015, 3.320 ocurrieron durante dichas intervenciones. Además, un 73% del número total de muertes violentas corresponde a personas negras y un 54% a jóvenes entre 15 a 24 años<sup>209</sup>. En algunos estados de Brasil, ese cuadro se agrava de forma exponencial, como en Rio de Janeiro. Amnistía Internacional indica que en 2014 un 15,6% de los asesinatos en tal ciudad tuvieron como autor un policía. Afirma, asimismo, que entre 2010 y 2013, de las 1.275 víctimas de homicidios decurrentes de intervención policial un 99,5% eran hombres, un 79%, negros y un 75% tenían entre 15 y 29 años<sup>210</sup>.

A partir de estos datos es posible trazar un perfil de las víctimas y llegar a un modo de actuar que no configura un conjunto de acciones puntuales que pueden ocurrir durante el ejercicio de la labor policial, sino un patrón operacional institucional, que impacta directamente en el ejercicio del derecho a la vida de personas con un perfil definido: el joven negro pobre. De ahí, es relevante formular algunas observaciones con respecto a los homicidios decurrentes de la intervención policial, pues afectan de forma particular a las personas negras. Los homicidios que ocurren durante las intervenciones policiales en Brasil son una cuestión grave y urgente no solo en términos de seguridad pública, sino

---

<sup>208</sup> WERNECK, Jurema, *Racismo institucional: uma abordagem conceitual*, citado, pág. 19.

<sup>209</sup> FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, *10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública*, citado, pág. 6-7.

<sup>210</sup> ANISTIA INTERNACIONAL, *“Você matou meu filho!”: homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro*, Anistia Internacional, Rio de Janeiro, 2015, pág. 5-6.

también, y principalmente, de derechos humanos. Las víctimas tienen características determinadas (hombres jóvenes, negros y pobres) y la justificación para ello debe ser analizada a partir de la perspectiva racial, de modo que la semejanza en los perfiles no es mera casualidad.

Las muertes ocurridas en un contexto que puede ser inicialmente legítimo de ejercicio de la función muchas veces son manifestaciones del empleo indebido de la fuerza letal por parte del personal policial y resultan de enfrentamientos armados entre agentes públicos y transgresores de la ley o sospechosos. Si por un lado existe el empleo del legítimo uso de la fuerza, en otros las muertes presentan características de ejecuciones extrajudiciales o de “limpieza social”, las cuales son justificadas por documentos denominados “actas de resistencia al arresto”<sup>211</sup> y que, si bien empiezan en el ámbito policial, el proceso de impunidad y justificación de un homicidio practicado en condiciones arbitrarias, de abuso de poder y uso excesivo de la fuerza sigue por el Ministerio Público y es legitimado por el Poder Judicial<sup>212</sup>. El encubrimiento de las muertes a través de tal procedimiento lleva a la falta de rendición de cuentas de las acciones policiales, al subregistro del número de homicidios, disfrazando las estadísticas, ya que el delito no es mencionado en los documentos oficiales, y protege a agentes estatales que violan los derechos humanos, contribuyendo a la impunidad y a la falta de credibilidad en el Poder Público, especialmente cuando investiga violaciones de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Dichas actas no permiten una detallada investigación de los hechos, pues indican anticipadamente que el autor de la muerte actuó amparado por la ley, utilizando los medios necesarios para defenderse o vencer la resistencia. Esa situación hace que la conducta no sea punible funcional y criminalmente,

---

<sup>211</sup> Las muertes descritas en el Caso Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira y otros (Favela Nova Brasília), comentado en el apartado sobre las mujeres brasileñas, son un ejemplo del resultado de las intervenciones policiales que tienen características de ejecución extrajudicial. Las víctimas, todas con las características mencionadas (jóvenes, negros y pobres), presentaban lesiones típicas de actos de ejecución y de defensa, como disparos en la espalda, en la sien, en la nuca y en las manos y fueron clasificadas como traficantes de drogas por los agentes que participaron en las redadas.

<sup>212</sup> En este sentido, Zaccone, en su estudio sobre la participación de otras instituciones que componen el sistema de justicia penal brasileño en la legitimación de las ejecuciones extrajudiciales, afirma que la policía mata, pero no mata sola, ya que el sistema, por medio de un expediente burocrático y racional para la producción de la verdad jurídica, viabiliza la idea de una violencia conforme el derecho, legitimada por fiscales de la ley e integrantes del Poder Judicial (ZACCONE, Orlando, *Indignos de vida: a forma jurídica de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro*, citado, pág. 23).



pues, sin investigaciones detalladas, las actas de resistencia al arresto son, tras el consentimiento del Ministerio Público, archivadas por el Poder Judicial.

Ante la alarmante situación y la constatación de que se trataba de un patrón de actuación de los cuerpos de seguridad, a partir de 2012 fueron dictadas resoluciones y recomendaciones en nivel federal y de los estados en el sentido de no utilizar más en los documentos policiales términos genéricos como “resistencia” y “resistencia seguida de muerte” para casos de muertes decurrentes de intervención de los miembros de los cuerpos de seguridad<sup>213</sup>. El avance más reciente para la extinción de las actas de resistencia al arresto fue una resolución conjunta del Consejo Superior de Policía, órgano de la Policía Federal, y Consejo Superior de los Jefes de la Policía Civil<sup>214</sup> con la finalidad de uniformizar los procedimientos y extinguir el uso de los términos “acta de resistencia al arresto” y “resistencia seguida de muerte” en los registros e informes de la Policía Federal y de las Policías Civiles de los estados. En el ámbito legislativo, actualmente se tramita en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley n.º 4471, presentado el 19 de septiembre de 2012, cuyo propósito es establecer parámetros y conductas que garanticen la efectiva investigación en casos de muerte producidas por agentes estatales.

La importancia de la extinción de las actas de resistencia al arresto, aunque en un primer momento parezca solo un cambio de denominación, se encuentra en la efectiva e imparcial investigación de los hechos, realizada a partir de una investigación penal que garantice los derechos humanos y el respeto a los principios constitucionales y procesales penales y lleve a la punición de los culpables, miembros de los cuerpos de seguridad o no. Lo que se evidencia, a partir de los cambios, no es más la resistencia del transgresor de la ley (y así la atribución de culpa por su muerte), sino el hecho que hubo un homicidio y que esta muerte fue producida por un representante del Estado en un contexto que pudo ser de uso excesivo (e ilegítimo) de la fuerza.

---

<sup>213</sup> Resolución n.º 8, de 20 de diciembre de 2012, del Consejo Nacional de los Derechos Humanos; Resolución n.º 5, de 7 de enero de 2013, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo (a la cual están subordinadas las Policías Civiles y Militares de los estados) y *Portaria DGP* n.º 5, de 30 de abril de 2013, de la Policía Civil del Estado de São Paulo. Los documentos pueden ser consultados, respectivamente, en <https://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cndh/resolucoes/2012/resolucao-08-auto-de-resistencia> y <https://www.imprensaoficial.com.br>, *Diário Oficial do Estado de São Paulo*, edición de 8 de enero de 2013, Poder Ejecutivo–Seção 1, pág. 5).

<sup>214</sup> Resolución n.º 2, de 13 de octubre de 2013 (disponible en <https://www.imprensaoficial.com.br>, *Diário Oficial do Estado de São Paulo*, edición de 30 de noviembre de 2017, Poder Ejecutivo–Seção 1, pág. 65)

Volviendo al tema objeto de análisis, el racismo institucional hacia el colectivo negro también se manifiesta por medio de los procedimientos de identificación por perfil étnico o, más específicamente, de “filtro racial”<sup>215</sup>, los cuales, si, por un lado, no son adoptados de modo explícito e intencional por los cuerpos policiales, por otro, tampoco tienen justificaciones objetivas y razonables. De cualquier modo, pertenecen a una cultura jurídica y policial implícita en que ciertas decisiones tomadas por agentes públicos reflejan la discriminación racial, estereotipos y prejuicios y que muchas veces son encubiertas por justificaciones técnicas o alegaciones que minimizan o descalifican el racismo, lo que dificulta asumir que el Estado, a través de conductas de sus representantes, produce y mantiene prácticas discriminatorias dirigidas a mitad de la ciudadanía.

La identificación por perfil étnico consiste en el “uso de generalizaciones basadas en la etnia, la raza, el origen nacional o la religión, en lugar de en pruebas objetivas o el comportamiento individual, como elemento determinante (aunque no sea el único) para aplicar el Derecho y/o en investigaciones sobre quién ha participado en actividades delictivas o que puedan serlo”<sup>216</sup>. Desde esta perspectiva, la identificación por perfil étnico se exteriorizaría en la aplicación del Derecho de una forma general, como en la actuación policial ordinaria, la lucha contra el terrorismo, la toma de decisiones en las cuestiones de inmigración, asilo o en el control de fronteras, como detallan García Añón y otros autores<sup>217</sup>. En cuanto al segundo procedimiento, el término “filtro racial” utilizado en esta investigación a partir del trabajo de Barros hace referencia, específicamente, a las actividades de control ejercidas por los cuerpos policiales y, concretamente, a las paradas

---

<sup>215</sup> BARROS, Geová da Silva, “Filtragem racial: a cor na seleção do suspeito”, *Revista Brasileira de Segurança Pública*, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo, vol. 2, n.º 1, 2008, pág. 134 a 155. Tanto “identificación por perfil étnico” como “filtro racial” son traducciones del término en inglés *racial profiling*, que surgió en el contexto estadounidense para describir la conflictiva relación entre la comunidad negra y los cuerpos policiales de Estados Unidos y la selectividad en las paradas de vehículos. Dicha expresión puede tener diferentes traducciones, pero todas se refieren a conductas que, basadas en determinadas características personales, seleccionan, de modo tendencioso, ciertos seres humanos y motivan la intervención de agentes estatales en su esfera personal. Para fines de esta investigación será hecha la distinción comentada en el párrafo, con las particularidades del significado de la expresión en portugués traducida al español (“*filtragem* racial” y “filtro racial”) pues, de tal manera, pone acento, específicamente, en la actuación de los cuerpos de policía y, así, se acercan mejor a la realidad brasileña. Sobre lo comentado, véase AMAR, Paul, “Táticas e termos de luta contra o racismo institucional nos setores de polícia e segurança”, citado, pág. 236 a 238.

<sup>216</sup> GARCÍA AÑÓN, José; BRADFORD, Ben; GARCÍA SÁEZ, José António, GASCÓN CUENCA, Andrés y LLORENTE FERRERES, Antoni, *Identificación policial por perfil étnico en España. Informe sobre experiencias y actitudes en relación con las actuaciones policiales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 39.

<sup>217</sup> *Idem*, pág. 39-40.

policiales de vehículos y personas en la vía pública para seleccionar quiénes son consideradas sospechosas y pararlas con base en el color de la piel<sup>218</sup>. Es importante puntualizar que la actividad de parada se sitúa en el legítimo ejercicio de las atribuciones policiales y es el primer contacto de la policía con el individuo. Puede ser realizada para identificar a alguien, obtener o verificar informaciones o como medida que antecede al registro o cacheo, definido como “el registro superficial del perímetro corporal de una persona, de sus ropas, efectos y enseres personales que lleve en su poder o tenga a su inmediata disposición para saber si oculta elementos, sustancias u objetos que puedan servir como prueba de un delito”<sup>219</sup>. En unos términos más restrictivos y ya con un sentido discriminatorio, implica un previo juicio sobre la culpabilidad de un individuo por la práctica de algún delito, como suele ocurrir en el caso de las personas negras y pobres en sus interacciones con los miembros de los cuerpos de seguridad<sup>220</sup>.

Barros ofrece un interesante panorama sobre la situación aquí analizada y cómo se concreta la incidencia desproporcionada del “filtro racial” en su artículo realizado a partir de una investigación sobre los parámetros de identificación de una persona como sospechosa en razón del color de la piel y la percepción de los miembros de los cuerpos policiales sobre la práctica del racismo institucional<sup>221</sup>. La investigación concluyó que en un control de policía una persona negra conduciendo un coche de lujo será considerada más sospechosa que una blanca en las mismas condiciones. También confirmó que durante sus actividades ordinarias y por iniciativa propia, los miembros de los cuerpos policiales abordarían más y en primer lugar a las personas negras que a las blancas. Los relatos recogidos señalan, por un lado, la presencia del racismo en los criterios de parada y, por otro, demuestran que tales acciones siguen presentes en la cultura institucional y muchas veces son realizadas de manera mecánica, intuitiva, sin cualquier reflexión sobre el porqué de la conducta discriminatoria.

---

<sup>218</sup> BARROS, Geová da Silva, “Filtragem racial: a cor na seleção do suspeito”, citado, pág. 136-137.

<sup>219</sup> RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Alicia, “Prueba y proceso penal” en COLLADO MEDINA, José (coord.), *La investigación criminal y sus consecuencias jurídicas*, Dykinson, Madrid, 2010, pág. 273 a 333, pág. 292.

<sup>220</sup> Sin embargo no esté evidenciado en las definiciones de identificación por perfil étnico o de “filtro racial”, importa tener en cuenta que otros “filtros”, como el geográfico, el social, el etario, el de género y la situación laboral también son componentes determinantes en tales interacciones y, asociados, agravan la situación de vulnerabilidad de las personas que los comparten.

<sup>221</sup> BARROS, Geová da Silva, “Filtragem racial: a cor na seleção do suspeito”, citado, pág. 138-140.

Como fue observado anteriormente, los procedimientos aquí tratados, por basarse en conductas discriminatorias, sin justificación objetiva o razonable, suelen exteriorizarse de forma muy sutil y si son atribuidos al racismo prontamente son negados, bajo la justificación de la “democracia racial”, de la negación del racismo en las prácticas de agentes del Estado y de la dificultad en identificar, en razón de la diversidad de la población, a cuál grupo étnico pertenecería cada persona. En algunos casos concretos, sin embargo, las conductas dirigidas a un determinado grupo de personas en razón del color de la piel pueden ser observadas en documentos oficiales. Una situación que ilustra la naturalización de la selectividad en la parada e identificación de personas a partir de un determinado perfil ocurrió en el estado de São Paulo, en diciembre de 2012. Un comandante de la Policía Militar expidió un documento oficial en el que ordenaba a sus subordinados la parada de personas en actitud sospechosa en un barrio de alto nivel socioeconómico, principalmente las pardas y las negras, con edades comprendidas entre 18 y 25 años, pues se organizaban para robar residencias en aquella localidad. En el documento oficial no constaba la descripción de los sospechosos o razones para la selectividad en la conducta policial, solo la mención, de forma muy general, al perfil mencionado y al rango etario<sup>222</sup>.

Además de las características personales, otro elemento que debe ser considerado cuando se analiza el patrón de parada e identificación policial y la construcción de la sospecha por parte es el geográfico. Eso significa que en un país con contundentes desigualdades como Brasil, la geografía social y la distribución de la población en regiones que reflejan las desigualdades económicas pueden colaborar en la toma de decisión sobre a quién parar e identificar si las personas viven en determinados escenarios, como favelas o barrios empobrecidos, considerados espacios exclusivos de la criminalidad y que, por ello, estaría permitido no respetar los derechos<sup>223</sup>. El estigma territorial, por ende, guarda profunda relación con la pobreza y la etnia y construye una paradoja según la cual las regiones menospreciadas tendrán menos protección policial,

---

<sup>222</sup> Noticia disponible en BRANDT, Ricardo, “PM de Campinas determina abordagem de suspeitos de ‘cor parda e negra’”, *O Estado de São Paulo*, 23 de enero de 2013, <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pm-de-campinas-determina-abordagem-de-suspeitos-de-cor-parda-e-negra,987908>.

<sup>223</sup> RAMOS, Sílvia y MUSUMECI, Leonarda, *Elemento suspeito: abordagem policial e discriminação na cidade do Rio de Janeiro*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2005, pág. 36.

pero más presencia de la policía para ejercer el control social y la sospecha generalizada sobre sus residentes.

Desde el punto de vista del derecho interno, el tema de los criterios utilizados por el personal policial para parar o registrar a una persona, aunque sea una de sus funciones legalmente atribuidas, genera grandes discusiones, pues se basa en la “sospecha fundada”, según lo dispuesto en los artículos 240, párrafo 2º<sup>224</sup>, y 244<sup>225</sup> del Código Procesal Penal brasileño. El debate es controvertido y se fundamenta en la ausencia de definición legal para la expresión “sospecha fundada”, lo que deja espacio para la formulación de juicios arbitrarios que permiten la incidencia del racismo institucional, que se puede manifestar por medio de la criminalización del color de la piel. Es importante recalcar que tal procedimiento señala que determinadas formas de actuar y de comprender lo que abarca la “sospecha fundada” están enraizadas en las prácticas policiales y en la forma como sus agentes construyen la imagen del potencial sospechoso o criminal. En este sentido, Barros observa que el racismo debe ser considerado a partir de las consecuencias negativas de las acciones de los miembros de los organismos estatales y no de la intencionalidad del acto<sup>226</sup>. Ese cambio de perspectiva refuerza el carácter institucional de la discriminación racial y la caracterización de la vulnerabilidad de las personas negras a partir del modo como la sociedad está estructurada.

Pese a que se manifieste de otra forma en relación a las mujeres, la vulnerabilidad a la que está expuesta ese colectivo también determina cómo será la realización de sus derechos, sobre todo en los que se refieren a la expectativa de vida y sus condiciones y a la atribución previa de culpabilidad por la práctica de algún delito. En este sentido, la posición institucional en cuanto al objeto de estudio de este apartado es la misma que existe hacia las mujeres: por un lado de invisibilidad y, por otro, de violación de sus derechos por conductas tan arraigadas en el *modus operandi* policial que ya forman parte de su cultura institucional.

---

<sup>224</sup> Artículo 240, párrafo 2º: “Se procederá al registro personal cuando hubiese sospecha fundada de que alguien oculte consigo armas prohibidas u objetos (...)” (traducción de la autora)

<sup>225</sup> Artículo 244: “El registro personal no dependerá de la orden en el caso de detención o cuando hubiese sospecha fundada de que la persona esté en posesión de armas prohibidas u objetos o papeles que constituyan el cuerpo del delito, o cuando la medida fuera determinada en el curso del registro domiciliario” (traducción de la autora).

<sup>226</sup> BARROS, Geová da Silva, “Filtragem racial: a cor na seleção do suspeito”, citado, pág. 137.

Finalmente, de acuerdo con la línea de investigación de este trabajo y adoptando la organización del capítulo 1 para abordar los grupos en situación de vulnerabilidad, cabe llamar la atención sobre la condición de las mujeres negras en esta dinámica, no solo por sus experiencias marcadas por la articulación entre género y negritud, sino también porque comúnmente son invisibilizadas cuando se plantean reflexiones críticas sobre la violencia policial y sus efectos en el colectivo de mujeres y de personas afrodescendientes. Una de las hipótesis para eso, más allá del ocultamiento de sus experiencias en términos sociales generales y desde la particular óptica de los cuerpos de seguridad, es que dentro de las prácticas policiales prevalecen la cuestión de las mujeres como grupo homogéneo (que se enfrentan a los obstáculos y violencias descritas *supra* como si fueran los mismos para todas) y de los hombres negros, que son las principales víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y aquello que más son asesinados los principales blanco de las paradas y registros policiales.

Una vez más, se ocultan a las mujeres negras como sujetos con experiencias, vulnerabilidades y discriminaciones únicas, razón por la cual hay que enfatizar que el nivel de violencia al que se enfrentan es tal que muchas veces no sobreviven a los encuentros con los integrantes de los cuerpos de seguridad. Además de lo expuesto en el apartado anterior, las mujeres negras sufren violencias que son sentidas de modo más intenso y cruel, que son el resultado de la combinación de distintas formas de discriminación también producidas y reproducidas a través de la praxis policial. Y, para ilustrar la situación en que viven, en sentido similar, se recurrirá a casos concretos para exponer como lo que fue teorizado se plasma empíricamente en esta investigación.

El primer caso, ocurrido en la ciudad de São Paulo, es de una mujer negra, pobre y lesbiana que fue golpeada por tres policías militares delante de su familia el 8 de abril de 2016 y después de cinco días en el hospital murió debido a un traumatismo craneoencefálico<sup>227</sup>. La víctima era blanco frecuente de registros policiales en la región en que vivía y en el día de los hechos, ya había sido registrada cuatro veces. La violencia que llevó a su muerte fue producida en uno de esos contextos de parada. Las causas del cacheo no fueron aclaradas por los agentes, que afirmaron que estaban ejerciendo procedimientos rutinarios y que la víctima fue violenta. La justicia militar archivó el caso

---

<sup>227</sup> PRADO, Débora y SANEMATSU, Marisa (orgs.), *Feminicídio #InvisibilidadeMata*, Instituto Patrícia Galvão, São Paulo, 2017, pág. 43 a 50.

por entender que no hubo delito militar y tras un conflicto para determinar cuál era la justicia competente para juzgarlo, el asunto todavía sigue pendiente en la justicia estatal criminal.

El segundo caso, ocurrido en la ciudad de Rio de Janeiro, es de una mujer negra y pobre, que el 16 de marzo de 2014, tras ser disparada en el cuello y la espalda durante un fuego cruzado en una redada realizada por la Policía Militar en la región en que vivía, fue rescatada para ser llevada al hospital. La víctima fue colocada en el maletero de un coche de policía y durante el trayecto su cuerpo cayó y, enganchado por su ropa, permaneció colgado y fue arrastrado durante 250 metros por el asfalto hasta que los policías se dieron cuenta de que parte de su cuerpo estaba fuera del vehículo<sup>228</sup>. Los tres policías fueron arrestados al día siguiente por su muerte, pero fueron puestos en libertad algunos días después. Dos de los tres agentes ya estaban involucrados en otros casos de muertes durante el ejercicio de la función. El caso sigue pendiente en la justicia estatal criminal.

Los dos casos expresan de forma contundente los matices de la violencia estatal cuando se vuelve hacia las mujeres negras y la habitualidad que caracteriza sus ocurrencias, llegando a configurar un feminicidio de Estado<sup>229</sup>. La excesiva violencia, el desprecio por sus vidas y la objetificación de sus cuerpos amplían la dimensión de vulnerabilidad en que se encuentran y en cuyos cuerpos se concentran todas las causas que la intensifican: la pobreza, el género y la “raza”. En el primer caso, además, hay que tener en cuenta el componente de la orientación sexual, otra condición agravante de la vulnerabilidad, pues por su apariencia, en desacuerdo con los patrones sociales impuestos sobre lo femenino y lo masculino, uno de los policías que la golpeó dijo: “Ella quiso hacerse el hombre, tuvimos que calmarla”<sup>230</sup>. La historia de esas mujeres y todas las demás que fueron expuestas en esta investigación arrojan luz a uno de los temas más complejos de la realidad brasileña y permite un enfoque situado y concreto, fundamental

---

<sup>228</sup> Informaciones consultadas en MARTÍN, María, Un “saco” com quatro filhos, *El País*, 18 de marzo de 2014, [http://brasil.elpais.com/brasil/2014/03/18/politica/1395103567\\_408081.html](http://brasil.elpais.com/brasil/2014/03/18/politica/1395103567_408081.html).

<sup>229</sup> En Brasil, el concepto de feminicidio fue introducido en el Ordenamiento jurídico por medio de la Ley Federal n.º 13.104 de 9 de marzo de 2015 e incorporado al Código Penal en el artículo 121, que trata de los delitos de homicidio. Según la definición legal, es el homicidio practicado contra la mujer por razones de la condición del sexo femenino y que tiene relación con la violencia doméstica y familiar o con el menosprecio o discriminación a dicha condición.

<sup>230</sup> PRADO, Débora y SANEMATSU, Marisa (orgs.), *Feminicidio #InvisibilidadMata*, citado, pág. 46. Traducción de la autora.

cuando se tiene como objeto de estudio prácticas policiales y cómo tales prácticas se exteriorizan de distintas formas de acuerdo con el sujeto o el grupo a quien se dirigen.

La cuestión que surge del análisis de ese escenario, entonces, es la siguiente: ¿Por qué esas vidas perdidas no generan la misma cantidad de atención como la pérdida de vidas de los hombres negros o las múltiples violaciones de los derechos de las mujeres consideradas como un grupo más amplio? Tal vez una primera respuesta fuera que se trata de una cuestión de números, pues los datos señalan que los hombres son más asesinados que las mujeres y son las principales víctimas de la violencia urbana y policial o que las violaciones de los derechos de las mujeres, como un colectivo más grande, son más recurrentes que los casos que específicos de las mujeres negras. Tal respuesta, sin embargo, resulta insuficiente y superficial. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no hay un enfoque asociado de género y “raza” en las encuestas sobre seguridad pública y violencia policial, lo que puede ser observado incluso en los informes utilizados en esta investigación, lo que hace que no se pueda saber, efectivamente, cuáles son los números exactos de la violencia hacia ese colectivo. En este sentido, el conocimiento del nivel de violencia general y policial que experimentan las mujeres negras es muy bajo. En segundo lugar, tampoco hay ese recorte en términos institucionales: o se parte del género o de la “raza” y si se utiliza tal categoría, seguramente los hombres tendrán más atención por los motivos que fueron presentados. Eso puede explicar el motivo de la ausencia de datos estadísticos específicos o que esa problemática sea poco debatida en los medios policiales, tanto en la formación de los nuevos miembros como en el efectivo ejercicio de sus atribuciones. En cambio, una de las hipótesis posibles para comprender la cuestión de las mujeres negras en el contexto policial es partir de las respuestas ofrecidas por la interseccionalidad, que trata de llamar la atención sobre el ocultamiento de esas mujeres, poniendo de manifiesto su existencia y su lucha por la conquista del reconocimiento de sus derechos. En tal sentido, lo planteado por la interseccionalidad puede sacar a la luz sus vivencias y los problemas a los que se enfrentan también en el ámbito de la seguridad pública. De igual modo, puede contribuir a que sean producidos datos estadísticos en tal campo que incluyan la articulación entre género y “raza”.



### **CAPÍTULO 3. EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS A LOS CUERPOS POLICIALES BRASILEÑOS ADOPTANDO LA PERSPECTIVA DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD**

En vista de lo que fue desarrollado en los capítulos antecedentes, una de las cuestiones más significativas en esta investigación es la profunda contradicción entre lo establecido por el Ordenamiento jurídico en cuanto a la protección y garantía de los derechos y la realidad de las prácticas policiales dirigidas a algunos grupos sociales en la sociedad brasileña, en que las violaciones de derechos humanos son sistemáticamente producidas y reproducidas. Una de las posibilidades de análisis del problema tanto para su comprensión como para plantear nuevas perspectivas que puedan aportar reflexiones importantes para cambios institucionales es a partir de la formación en derechos humanos de los nuevos miembros de los cuerpos de seguridad<sup>231</sup>.

Sin ignorar que el tema de la educación en derechos humanos es amplio y corresponde a un vasto campo de investigación y debates teóricos que pueden ser aplicados en distintos niveles y ámbitos educativos<sup>232</sup>, específicamente en lo que concierne al objeto de estudio de esta investigación la reflexión se centrará en el ámbito profesional, a partir de la formación en derechos humanos de los cuerpos de policía en Brasil, concretamente los cuerpos policiales estatales (Policía Civil y Policía Militar). Asimismo, cumple aclarar que para la aproximación empírica al tema serán analizados, en el segundo apartado, los dos últimos programas de la asignatura “Derechos Humanos” adoptados por la Academia de Policía Civil del Estado de São Paulo en sus cursos de formación para distintos cargos policiales<sup>233</sup>. La elección se explica por algunos motivos: por mantener la coherencia con los casos mencionados anteriormente, que abarcan

---

<sup>231</sup> Las actividades vinculadas a la enseñanza policial pueden ser realizadas en distintas etapas: durante el curso de formación de los nuevos miembros y a lo largo de la carrera profesional, como la formación complementaria, los cursos de actualización y de reentrenamiento policial. Esta investigación se centrará en el curso de formación, puesto que interesa examinar cómo es el primer contacto de los nuevos miembros con los derechos humanos desde la perspectiva policial y dentro de la institución.

<sup>232</sup> Sobre el tema, consúltese RIBOTTA, Silvina (ed.), *El desafío del siglo XXI. En Educación en derechos humanos: la asignatura pendiente*, Dykinson, 2006; OSPINA, Johanna, “La educación para la paz como propuesta ético-política de emancipación democrática. Origen, fundamentos y contenidos” *Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política*, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, n.º 11, enero 2010, pág. 93 a 125 y JARES, Xesús, R., *Educación para la paz en tiempos difíciles*, Bakeaz, Bilbao, 2004.

<sup>233</sup> En Brasil, el organigrama de la Policía Civil está compuesto por diversos cargos con diferentes categorías jerárquicas. A todos ellos se accede por oposición. Las promociones internas no hacen que los miembros cambien de cargo solamente de nivel.

situaciones ocurridas en el estado de São Paulo; por la enseñanza impartida en dicha academia de policía al ser un referente para otras en Brasil y por el acceso de esta investigadora a los programas que serán analizados.

Para contextualizar mejor lo que se irá desmenuzar en este capítulo, las cuestiones que pautarán la reflexión propuesta serán las siguientes: 1) ¿Si hay una policía formada en derechos humanos; si la asignatura “Derechos Humanos” forma parte de los cursos de formación policiales; si hay una preocupación gubernamental en tal sentido, que se refleja en guías específicas hacia personas en situación de vulnerabilidad<sup>234</sup>, por qué la frecuencia de los actos que violan los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad llega a ser una de las principales características de los cuerpos de seguridad de Brasil? y, aun considerando las condicionales anteriores, 2) ¿Por qué las cifras, la percepción de la población, los relatos de las víctimas, las ejecuciones extrajudiciales, el “filtro racial” en las paradas y cacheos y el estado de la cuestión dicen otra cosa?

Una posible respuesta de acuerdo con la perspectiva de la enseñanza, pues hay otras que no se vinculan a los propósitos formulados en este trabajo y que se refieren a cambios institucionales, políticos y sociales, es porque todavía falta la clave que puede aportar cambios significativos en esa realidad: la incorporación de los grupos en situación de vulnerabilidad y todo el marco teórico que lo fundamenta en la formación de los miembros de los cuerpos de policía no solo como contenido de la asignatura “Derechos Humanos”, sino también de forma transversal a las demás asignaturas, como se pretende demostrar a continuación. De tal modo, un primer acercamiento a la cuestión propuesta para este capítulo es la constatación de que las interacciones entre instituciones policiales y los colectivos formados por mujeres y personas negras señalan que algo no está funcionando. Y ese “algo” puede ser comprendido a partir de los sistemas estructurales del racismo y del sexismo y sus dimensiones específicas en los ámbitos institucionales. Un

---

<sup>234</sup> BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, *Atuação Policial na Proteção dos Direitos Humanos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade*, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Brasília, 2013. Este manual orienta como el personal de las Policías Militares debe interactuar con las personas que componen los grupos en situación de vulnerabilidad durante situaciones rutinarias de su labor. En el ámbito de las Policías Civiles, sin embargo, no hay nada similar. Considerando sus atribuciones constitucionales de investigación del delito, los protocolos podrían ser formulados a partir de directrices que establezcan parámetros y rutinas de investigación teniendo en cuenta el género y la “raza” y también los delitos de odio motivados por dichas categorías, especialmente como detectarlos, puesto que el modo como son tipificados determinan si dependerán de denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, así como el grado y la extensión de las penas, lo que, directamente, influye en la consideración de la gravedad o no del delito.

segundo aspecto previo es que la formación policial, dentro de las discusiones sobre seguridad pública, ocupa un puesto importante en el debate sobre la interacción de los miembros de los cuerpos de policía y el cuerpo social, puesto que se la considera un mecanismo relevante para articular procesos de cambio y mejorar el servicio policial. En esta línea, los demás procesos de cambio institucional y modernización organizacional también pueden ser potenciados mediante las actividades realizadas por los centros de instrucción policial.

Asimismo, la formación es un punto fundamental cuando se discute sobre cuál es el modelo de policía que una sociedad pretende tener: si como agente represor y de control social (selectivo, preservando el orden vigente) o de promoción y garante de los derechos humanos. La reflexión sobre cuál es la formación profesional de los cuerpos de seguridad, de tal modo, implica discutir la propia concepción de seguridad pública y determina qué será enseñado, cuáles competencias serán valoradas y cómo serán las actividades formativas prácticas. ¿Qué significa formar en seguridad pública? es una cuestión que se incluye elaborar un programa, elegir un currículo y organizar un curso de formación técnico-profesional y que también evidencia la concepción de seguridad adoptada por un Estado y cómo la relación entre policía y sociedad se plasmará en contextos reales. En este escenario, la configuración de la asignatura “Derechos Humanos” puede dar relevantes informaciones sobre dicha relación y aportar nuevas perspectivas para el avance de la enseñanza policial y perfeccionamiento de los procedimientos adoptados por los miembros de los cuerpos de seguridad, de modo que los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad tengan real efectividad en la actuación policial.

### **3.1 La formación en derechos humanos para los cuerpos de policía brasileños**

La educación en derechos humanos en Brasil es reciente y fue formalmente reconocida e instituida como política pública en 2003, por medio del *Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos* (PNEDH, en adelante)<sup>235</sup>, que formaba parte de un proyecto más amplio de integración de los derechos humanos a todas las instancias del el

---

<sup>235</sup> En 2007, tras un proceso continuo de revisión y debates realizados durante 2004 y 2005 con la participación de representantes de la sociedad civil y del gobierno, fue publicada la versión final del *Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos*.

Estado brasileño. El proyecto en el campo de la educación tuvo como objetivo adoptar una matriz discursiva de derechos humanos y posicionarlos como herramienta para que se cumplieran los propósitos de la Constitución Federal de 1988 y se convirtieran en política de Estado y empezó en 1996, con el *Programa Nacional de Direitos Humanos 1* (PNDH-1, en adelante) <sup>236</sup>, del Ministerio de Justicia, y la creación de la Secretaria Nacional de Derechos Humanos. Todas esas medidas hicieron que Brasil fuera evaluado como el país de América Latina que más avanzó, en términos institucionales, en la implementación de la educación en derechos humanos y demuestran la gran actividad que, en aquel momento, se produjo en este campo<sup>237</sup>.

A partir del PNEDH, el país inició un trabajo sistemático e institucionalizado para posibilitar y promocionar la educación en derechos humanos en distintos campos: la educación básica; la educación superior; la educación no formal; la educación de las y los profesionales de los sistemas de justicia y seguridad y educación y medios de comunicación. La mención al sistema de seguridad y el desarrollo de un eje específico en ese tema señala la importancia de relacionar derechos humanos, seguridad pública y educación y la necesidad en llevar a cabo un programa especialmente dirigido a esos campos. El mencionado documento, por tanto, permitió que la formación de los cuerpos de seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos fuera planteada como objetivo gubernamental e instrumento para fortalecer la democracia y el respeto a los derechos fundamentales y a partir de ese hito se produjeron una serie de documentos, programas, planes de estudio y medidas para incentivar las acciones formativas en el campo analizado<sup>238</sup>. Cabe subrayar que el contexto en que se produjo dicho hito se relaciona con

---

<sup>236</sup> El PNDH-2 fue elaborado en 2002 y el PNDH-3, en 2010.

<sup>237</sup> SILVA, Aida Maria Monteiro y TAVARES, Celma, “Educação em direitos humanos no Brasil: contexto, processo de desenvolvimento, conquistas e limites”, *Educação*, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, vol. 36, n.º 1, 2013, pág. 50 a 58, pág. 52.

<sup>238</sup> Un ejemplo de lo comentado fue la creación, en 2007, del Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (PRONASCI) por medio de la Secretaria Nacional de Seguridad Pública (SENASP, en adelante), vinculada al Ministerio de Justicia. La medida fue uno de los resultados concretos de la segunda versión del PNEDH (2007). El programa, que sigue vigente, promueve cursos a distancia de derechos humanos y otros temas relacionados con la labor policial para profesionales de los cuerpos de seguridad, así como concede becas de posgrado que tienen por objetivo la investigación en seguridad pública y derechos humanos. La idea del programa es que el propio personal policial, consciente del rol que ejerce para el fortalecimiento y defensa de los derechos humanos, sea protagonista del cambio de paradigma en la seguridad pública, produciendo material científico sobre el tema y aplicándolo en sus instituciones.

la valoración de la enseñanza en el ámbito policial y la necesidad de mejorar la formación que los cuerpos de seguridad recibían y las prácticas policiales de un modo general.

Bajo la óptica del PNEDH, el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad comprometidos con la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos es un deber del Estado Democrático de Derecho y la formación es fundamental para las categorías profesionales vinculadas a la seguridad y la justicia, pues ocupa un puesto relevante para cambiar el cuadro de violencia y violación de los derechos de la ciudadanía en el contexto brasileño<sup>239</sup>. Los principios y acciones descritos en el documento parten de una concepción amplia de enseñanza, que contempla distintos aspectos de la acción educativa, como la elaboración de un programa básico y contenidos curriculares obligatorios, la construcción de una nueva mentalidad y protagonismo en la defensa de los derechos humanos y el incentivo al debate y producción científica acerca del tema<sup>240</sup>. Un aspecto que merece atención es que su punto 16 establece como una de las medidas que deben ser implementadas acciones educativas que incentiven el compromiso de funcionarias y funcionarios de seguridad y del sistema de justicia con el respeto y trato adecuado a grupos como los formados por mujeres y personas afrodescendientes<sup>241</sup>.

Las propuestas del PNEDH fueron desarrolladas y profundizadas en su versión final<sup>242</sup>, en la que se puso más atención a las causas socioestructurales de la violencia, a la diversidad y a la especial situación de las mujeres y de la comunidad negra, consideradas “categorías históricamente vulnerables”<sup>243</sup>. En lo que concierne a los cuerpos de seguridad, como en la primera versión, la violencia policial fue puesta de manifiesto y, en sentido similar, la necesidad de que sus miembros pasen por capacitación para que sean agentes de la consolidación de la democracia y del respeto a los derechos<sup>244</sup>.

---

<sup>239</sup> BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, *Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos*, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Brasília, 2003, pág. 35.

<sup>240</sup> *Idem*, pág. 35-36.

<sup>241</sup> *Idem*, pág. 42.

<sup>242</sup> BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, *Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos*, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Brasília, 2007.

<sup>243</sup> *Idem*, pág. 21.

<sup>244</sup> *Idem*, pág. 48.

Como fue mencionado, la actual versión del PNEDH aborda ciertas cuestiones desde una perspectiva más analítica y no solamente expositiva como en el documento anterior. En esta línea, subraya como principios de la enseñanza policial en derechos humanos los siguientes: 1) la lectura crítica de los contenidos y de la práctica social e institucional de los órganos que componen los sistemas de justicia y de seguridad; 2) explicitar las contradicciones y conflictos presentes en los discursos y prácticas de las categorías profesionales en referencia; 3) la lectura crítica de los modelos de formación y acción policial que emplean prácticas que violan la dignidad de las personas<sup>245</sup>. La postura crítica y reflexiva sobre el servicio policial, los conflictos que la siguen y la discusión sobre las prácticas que violan la dignidad de las personas, desde el punto de vista del documento, están presentes en el modelo de enseñanza pretendido y señalan otros caminos en el modo de enseñar, aprender y actuar, pero, como será expuesto más adelante, no se configuran de esta manera cuando se analiza lo que, efectivamente, es transmitido a los nuevos miembros de los cuerpos policiales. Es importante resaltar esa cuestión, pues el marco educativo que fue expuesto profundiza aún más las disparidades que existen cuando se analiza cómo el servicio policial se configura y cuál es la percepción de la ciudadanía sobre el tema.

Pasando hacia otro nivel de análisis, la formación técnico-profesional policial se caracteriza por sus finalidades particulares y multiplicidad de contenidos, que abarcan tanto aspectos prácticos como teóricos y relativos a distintos campos del conocimiento, como Derecho, Ciencias Sociales, Medicina Forense, Psicología, Criminología y Administración. Por centrarse en el campo profesional, está dirigida al desarrollo de habilidades específicas, que pueden ser conocimientos, aptitudes y la construcción de un saber hacer, de manera que tiene un objetivo más concreto en cuanto a sus propósitos. La adquisición de dichas habilidades trabajará conocimientos que serán puestos en práctica y permitirá a las alumnas y alumnos actuar a partir de un patrón que tiene por objetivo la uniformidad y la profesionalidad en la ejecución de sus tareas.

En Brasil, todas las personas que ingresan en los cuerpos de policía antes de empezar a ejercer sus funciones pasan por un periodo de formación técnico-profesional, en que son impartidas asignaturas prácticas y teóricas, con la finalidad de capacitarlas

---

<sup>245</sup> BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, *Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos* (2007), citado, pág. 49-50.

para la realización de sus atribuciones, aportar conocimientos específicos sobre las conductas policiales –de policía judicial y administrativa o militares, de acuerdo con cada institución– y reflexionar sobre las medidas que deben ser adoptadas ante situaciones reales en que será necesario intervenir actuando según los tres ejes que fundamentan la formación y la práctica policial: ético, técnico y legal. El contenido del programa, la organización de las asignaturas y la duración de los cursos dependen de las políticas gubernamentales sobre la formación de los cuerpos de seguridad y normas acerca del tema de cada estado brasileño y por ello pueden materializarse de distintas maneras, siempre teniendo como parámetro el PNEDH y la *Matriz Curricular Nacional Para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança Pública* (Matriz, en adelante), analizada a continuación<sup>246</sup>.

Antes de entrar en el análisis de la Matriz, cabe comentar que ambos documentos se complementan y deben ser considerados en conjunto, pues si bien el primero establece principios generales y acciones programáticas, el segundo se centra en la organización pedagógica y define los componentes curriculares que serán impartidos. Eso significa que la Matriz es un documento más concreto, en que se definirá el modo de desarrollo de las competencias y habilidades<sup>247</sup> profesionales pretendidas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, el objetivo de cada asignatura, la carga horaria y las formas de evaluar el aprendizaje. Sin embargo las diferencias de cada estado de un modo general y también la diferencia entre el contenido impartido por cada policía (Policía Civil y Policía Militar) en sus unidades de enseñanza, la Matriz establece un referencial teórico-metodológico que tiene por finalidad fijar un núcleo común de contenidos conceptuales (vinculados al saber), procedimentales (vinculados al saber hacer) y actitudinales (vinculados al ser)

---

<sup>246</sup> BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, *Matriz Curricular Nacional Para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança Pública*, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Brasília, 2014. La primera matriz curricular fue elaborada en 2003 y el aquel momento fue considerada un hito institucional en la formación de los miembros de los cuerpos de seguridad. El documento pasó por una revisión en 2005, en la cual se agregó un núcleo común de asignaturas y orientaciones para el planeamiento, seguimiento y evaluación de las acciones formativas. La segunda versión fue publicada en 2009 y, tras un periodo de discusiones metodológicas y estratégicas, con la formación de grupos de trabajo y la participación de diversos actores involucrados con la temática de la seguridad pública, en 2014 fue publicada la versión actual.

<sup>247</sup> Las competencias se refieren a los conocimientos, destrezas y actitudes “que producen resultados adaptativos a ambientes significativos”; a su vez, las habilidades “son conductas verbales y no verbales que facilitan el intercambio social (...) [el] saber actuar, pero sobre todo en momentos significativos, sin caer en la inhibición o en la agresividad” (POSADA RAMOS, José Manuel; JIMÉNEZ VIÑUELA, María Asunción y RODRÍGUEZ DÍAZ, Francisco Javier, “Competencia y habilidades sociales: adaptación e intervención desde el ámbito escolar”, *Abaco*, Centro de Cultura y Ciencias Sociales (CEES), Gijón, n.º 21-22, 1999, pág. 13 a 20, pág. 14-15).

para garantizar la unidad de pensamiento y acción de las personas que pertenecen a los cuerpos de seguridad, de forma que pueda ser aplicado a cualquier nivel o modalidad de enseñanza<sup>248</sup>. Cabe observar que el documento referencia no tiene un carácter vinculante en cuanto a forma como están organizadas las asignaturas o su nomenclatura y la carga horaria, sino de orientación, en que es posible coordinar distintos componentes estructurados en ejes de articulación y áreas temáticas. Estos elementos deben ser adaptados a las particularidades de cada estado brasileño teniendo en cuenta la necesidad de formar al nuevo personal de acuerdo con las características de cada región, su organización sociocultural y las distintas incidencias de delitos y formas de criminalidad. Asimismo, el documento prevé, además del núcleo común, una parte específica, dirigida a las especificidades de cada cargo policial.

Los ejes de articulación establecidos por la Matriz corresponden a un conjunto de contenidos de carácter transversal que deben estar presentes en asignaturas, objetivos, contenidos y orientaciones didácticos-pedagógicas. Son los siguientes:

- 1) Sujeto e interacción en el contexto de la seguridad pública;
- 2) Sociedad, poder, Estado y espacio público y seguridad pública;
- 3) Ética, ciudadanía, derechos humanos y seguridad pública;
- 4) Diversidad étnico-sociocultural, conflictos y seguridad pública<sup>249</sup>.

Todos ellos pueden ser desarrollados por medio de seminarios, talleres u otras formas de organización de aprendizaje, vinculados a una asignatura o a un proyecto interdisciplinar, y el objetivo primordial es orientar “para el desarrollo personal y la conducta moral y ética, refiriéndose a las finalidades generales de las acciones formativas, *estimulado el cuestionamiento permanente y reflexivo sobre las prácticas profesionales e institucionales en el contexto social y político en que ocurren*”<sup>250</sup>. Merece particular atención los puntos 3 y 4 de los ejes de articulación, pues son los que abordan la temática desarrollada en esta investigación. En ellos, son presentados ejemplos de temas que pueden formar parte de los contenidos impartidos, entre los cuales están: “prácticas de

---

<sup>248</sup> BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, *Matriz Curricular Nacional Para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança Pública*, citado, pág. 11.

<sup>249</sup> *Idem*, pág. 41.

<sup>250</sup> *Ibidem*. Cursivas añadidas. Traducción de la autora.



los profesionales del área de seguridad pública de acuerdo con las normas y de los valores de derechos humanos” (punto 3) y “diversidad como fenómeno cultural y derecho fundamental de la ciudadanía; diversidad étnico-sociocultural; grupos en situación de vulnerabilidad; valoración de la diferencia y la actuación de los órganos de seguridad pública, conflictos generados por la intolerancia y la discriminación” (punto 4)<sup>251</sup>. Es importante tener en mente lo que fue destacado en ese párrafo y los próximos puntos con cursivas añadidas, pues serán útiles para el análisis de la formación en derechos humanos de los cuerpos policiales y la discrepancia que existe entre lo que fue formalmente establecido y los contenidos impartidos.

Las áreas temáticas, a su vez, corresponden al núcleo común y obligatorio y deben contemplar los contenidos indispensables a la formación policial y a la capacitación para el ejercicio de la función, reuniendo un conjunto común de conocimientos que compondrán el currículo de los cursos. Son las siguientes:

- 1) Sistemas, instituciones y gestión integrada de seguridad pública;
- 2) Violencia, crimen y control social;
- 3) Conocimientos jurídicos;
- 4) Modalidades de gestión de conflictos y eventos críticos;
- 5) Valoración profesional y salud del trabajador;
- 6) Comunicación, información y tecnologías en seguridad pública;
- 7) Cultura, cotidiano y *práctica reflexiva*;
- 8) Funciones, técnicas y procedimientos en seguridad privada<sup>252</sup>.

Las áreas temáticas que interesan para esta investigación corresponden a los puntos 2, 3, 4 y 7 y en todas ellas hay ejemplos de temas que pueden ser desarrollados durante la formación policial. En el punto relativo a la violencia (2) son ejemplos que pueden ser desarrollados durante las clases, entre otros: a) violencia estructural,

---

<sup>251</sup> BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, *Matriz Curricular Nacional Para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança Pública*, citado, pág. 43-44. Traducción de la autora. El documento menciona “grupos vulnerables y grupos en situación de vulnerabilidad” pero no hace ninguna distinción conceptual. Según la Matriz, son los grupos compuestos por mujeres, niñas y niños, adolescentes, personas con discapacidad, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, personas mayores, víctimas de la criminalidad o del abuso de poder, usuarios y adictos a las drogas ilegales, personas sin hogar, personas negras y pueblos indígenas (*Idem*, pág. 52). Por los motivos que fueron expuestos en el primer capítulo de este trabajo, la referencia será solamente a la segunda expresión.

<sup>252</sup> *Idem*, pág. 44-45.

institucional e interpersonal; b) *violencia y corrupción policial*; c) violencia y grupos en situación de vulnerabilidad; d) violencia contra la mujer y e) violencia contra personas negras<sup>253</sup>. Los derechos humanos fueron contemplados en el punto 3, que aborda los conocimientos jurídicos. El área temática que trata sobre la gestión de conflictos y eventos críticos (4) contiene los siguientes ejemplos: a) uso de la fuerza, legitimidad y límites; b) formas de uso de la fuerza, responsabilidad y ética; c) responsabilidad de los aplicadores de la ley. Finalmente, el punto que concierne a la cultura, cotidiano y práctica reflexiva (7) menciona: a) *prácticas individuales e institucionales polémicas*, b) reflexión sobre las rutinas; c) prácticas policiales emblemáticas; d) actuación para la protección de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad<sup>254</sup>.

En el contexto que fue descrito anteriormente están las asignaturas “Derechos Humanos” y “Diversidad étnico-sociocultural” en la formación policial<sup>255</sup>. La primera asignatura, integrada al área temática de los conocimientos jurídicos, lo que ya dice mucho sobre cómo es concebida, pone de manifiesto la necesidad de reformular la concepción presente en la sociedad brasileña sobre la relación antagónica entre derechos humanos y seguridad pública. Asimismo, subraya el compromiso ético que el personal policial debe tener con el respeto y protección de los derechos fundamentales, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad. En los aspectos actitudinales están previstas la vigilancia para la conducta discriminatoria frente a las personas en situación de vulnerabilidad, buscando superarlas con prácticas inclusivas y humanizadas, y la deconstrucción de que los derechos humanos son derechos “*de bandidos*”. Otro punto que merece atención en dichos aspectos se refiere a la sensibilización de las y de los profesionales de seguridad pública para que, como agentes de intervención social, sean protagonistas en los derechos humanos, respetándolos y promoviéndolos. Esa idea es uno de los componentes más fuertes en la matriz discursiva de derechos humanos para la formación policial, fundamenta cómo debe ser el servicio policial y refleja el modo por el cual la Constitución Federal brasileña organizó el sistema de protección y garantías de

---

<sup>253</sup> BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, *Matriz Curricular Nacional Para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança Pública*, citado, pág. 47. El documento utiliza el masculino genérico (*negros*), pero, en consonancia con lo expuesto en este trabajo sobre el lenguaje, se optó por esa expresión.

<sup>254</sup> *Idem*, pág. 48-51.

<sup>255</sup> La descripción de las asignaturas puede ser consultada en [http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/seguranca-publica/livros/matriz-curricular-nacional\\_versao-final\\_2014.pdf](http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/seguranca-publica/livros/matriz-curricular-nacional_versao-final_2014.pdf) (pág. 112 a 118 y pág. 186 a 189, respectivamente).

los derechos desde las atribuciones de los órganos de seguridad pública: a partir de una cultura de seguridad ciudadana y de la inclusión de los derechos humanos en la seguridad pública como instrumento para fortalecer y mantener una sociedad democrática<sup>256</sup>.

En cuanto a la asignatura “Diversidad étnico-sociocultural”, es importante mencionarla también, pues su objetivo central es discutir sobre la diversidad étnica de la población y la construcción histórica de desventaja y desigualdad de ciertos colectivos en Brasil mencionados por la Matriz, como los negros, los indígenas y los gitanos. La asignatura fue el resultado de políticas públicas dirigidas a la seguridad pública y a la promoción de la igualdad entre los diversos grupos étnicos que conforman la sociedad brasileña y tiene por finalidad desarrollar habilidades personales y profesionales destituidas de prejuicios y discriminación racial, así como concienciar a los nuevos miembros de las fuerzas policiales sobre la importancia del rol que ejercen para promover la igualdad étnico-racial. Asimismo, la descripción de la asignatura enfatiza la necesidad en reconocer y respetar las identidades, culturas e historias de dichos colectivos y crear espacios para reflexionar sobre los patrones de discriminación que conllevan la categorización de la ciudadanía.

El análisis crítico acerca de los aspectos ausentes en la formación en derechos humanos para los cuerpos de policía será desarrollado de manera detallada en el próximo apartado, pero, en este momento, es relevante subrayarlos ya, pues las contradicciones y la necesidad de aportar otras perspectivas y mejorar los contenidos impartidos podrán ser observadas mejor en el análisis de los programas de “Derechos Humanos” de la Academia de Policía Civil del Estado de São Paulo. Igualmente, es importante tener en cuenta que la postura y pensamientos críticos que circundan la Matriz no se concreta en los mismos términos en la práctica. Pese a los puntos positivos que fueron mencionados, es posible verificar que, en cuanto al contenido del programa “Derechos Humanos”, aunque minucioso y completo, es extremadamente teórico. Esto en sí mismo no es un aspecto negativo, puesto que es imprescindible que los nuevos miembros tengan conocimientos sobre legislaciones internacionales y nacionales, sistemas, conceptos y principios constitucionales que estén vinculados a los derechos humanos. Pero, teniendo en cuenta

---

<sup>256</sup> La idea del doble rol de los miembros de los cuerpos de seguridad está desarrollada en BALESTRERI, Ricardo Brisolla, *Direitos humanos: coisa de polícia*, Berthier, Passo Fundo, 1998. El libro sigue siendo un referente en la discusión sobre derechos humanos y seguridad pública y suele formar parte de la bibliografía básica de la asignatura “Derechos Humanos” en los cursos de formación de los centros de enseñanza policiales.

la especificidad de la enseñanza policial y, sobre todo, el escenario brasileño de violencia, injusticias, desigualdades, discriminaciones y vulnerabilidades socioestructurales, no es suficiente. En enfoque dado a la asignatura, ubicándola en el área temática de los conocimientos jurídicos, resulta insatisfactorio si lo que se pretende es alcanzar los puntos que fueron destacados con las cursivas anteriormente añadidas y, efectivamente, promocionar el doble rol del personal policial en el marco de una sociedad democrática.

Con respecto a la asignatura “Diversidad étnico-sociocultural”, algunos puntos merecen ser considerados. Lo que más llama la atención es el enfoque dado, sin cualquier mención al racismo institucional o a procedimientos discriminatorios presentes en las prácticas policiales, como la parada y cacheo como manifestación del “filtro racial”. Hay que mencionar, además, que pese a la breve referencia a las experiencias específicas de las mujeres negras en la descripción de la asignatura en una cita relativa a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia<sup>257</sup>, las formas diferenciadas de sufrir la discriminación o su relación con la labor policial no son desmenuzadas en el documento. En tal sentido, aunque las mujeres negras sean nombradas en el contenido del programa, la Matriz, a lo largo de sus disposiciones, no aborda el resultado de la articulación entre género y “raza”, cómo esta dinámica se plasma en la realidad brasileña o cuáles son las formas de violencia específicas hacia ellas. Otro punto que merece ser comentado es que, sin embargo la importancia conferida a los espacios de reflexión, dicho documento no plantea como problema los motivos de los altos índices de letalidad policial de los jóvenes negros y pobres en la actuación policial o el hecho de que más de la mayoría de la población carcelaria de Brasil sea negra y pobre. Eso apunta hacia el no reconocimiento político de la cuestión racial como determinante para establecer ciertos patrones de actuación de los cuerpos de seguridad y, tampoco, permite que tales cuestiones sean discutidas en las instituciones. La “ceguera” con respecto al racismo y al mantenimiento de estereotipos hacia la comunidad negra señala que los cuerpos policiales, bajo el argumento de

---

<sup>257</sup> Artículo 69: “Estamos convencidos de que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se manifiestan en forma diferenciada para las mujeres y las niñas, y pueden ser factores que llevan al deterioro de sus condiciones de vida, a la pobreza, la violencia, las formas múltiples de discriminación y la limitación o denegación de sus derechos humanos”.

“neutralidad” en el ejercicio de la función, todavía niegan la existencia de prácticas discriminatorias realizadas por sus miembros<sup>258</sup>.

Por último, sin embargo la violencia hacia la mujer es uno de los puntos que pueden ser abordados en el área temática sobre violencia, no se puede decir que la mención a esa forma de violencia, la clasificación del colectivo formado por mujeres como grupo en situación de vulnerabilidad o la referencia a la legislación nacional e internacional de protección correspondan a una efectiva perspectiva de género. Contemplanla en la formación policial, más allá de los aspectos expuestos, conlleva plantear cuestiones más profundas, como los efectos del sistema patriarcal en sus vidas, la discriminación estructural que sufren, los mecanismos que mantienen la desigualdad entre los géneros y, sobre la base de ese contexto general, abordar específicamente la relación con el servicio policial no solo como institución de protección a sus derechos, sino también como espacio en que se pueden producir violaciones a sus derechos practicadas por su personal. Asimismo, hay que discutir sobre cómo el género puede determinar el trato que será dado a las víctimas durante los procedimientos de formalización de la denuncia y el desarrollo de las investigaciones y también sobre los efectos de la victimización secundaria en la interacción con el Estado.

Por lo que fue expuesto hasta aquí, es posible observar que tanto el PNEDH como la Matriz contemplan algunos de los ejes de esta investigación, como la diversidad, la atención al estado de vulnerabilidad de las mujeres y de las personas negras, la violencia institucional y la postura crítica y reflexiva que deben desarrollar los miembros de los cuerpos de seguridad en la actuación profesional y también como sujetos en el mundo e integrantes de una realidad social concreta. Sin embargo, como se puede inferir por medio del cuadro que fue presentado en el capítulo 2, la disonancia entre norma y realidad no se restringe al nivel de lo establecido por el Ordenamiento jurídico en fuerte contraste con las prácticas policiales. La discordancia también puede ser percibida, particularmente, en el nivel educativo, puesto que en términos de modelos de enseñanza, planes de intervención y contenidos de las asignaturas aquí tratadas el análisis de la vulnerabilidad y la enseñanza-aprendizaje crítica sobre cuestiones problemáticas de la realidad brasileña, como la necesidad de resignificar la relación entre seguridad pública y derechos humanos,

---

<sup>258</sup> AMAR, Paul, “Táticas e termos de luta contra o racismo institucional nos setores de polícia e segurança”, pág. 239.

están presente en la formación policial. En términos prácticos, con todo, se verifica, a partir de los materiales elegidos para este trabajo –los últimos programas de la Academia de Policía Civil del Estado de São Paulo– y examinados a continuación que estos todavía no están en plena consonancia con el marco instituido por el gobierno federal. Desde esta posición se puede formular algunas cuestiones que pautarán la reflexión de los últimos apartados y contribuirán al planteamiento de otras perspectivas de enseñanza policial.

La primera cuestión es la necesidad de desnaturalizar la idea que supone que la transmisión de conocimientos sobre derechos humanos lleva, necesariamente, a la formación en derechos humanos<sup>259</sup>. Esta, además de transmisión de contenidos, conlleva actitudes comprometidas políticamente con la defensa de los derechos humanos y, para que esto ocurra, la alteridad, la empatía y el respeto a la diversidad son imprescindibles<sup>260</sup>. Es, por ende, esencialmente crítica y exige cuestionar las experiencias individuales y colectivas, el poder, el lenguaje, las prácticas sociales y las relaciones con el Estado para evidenciar paradojas como las construidas en torno a la condición socioeconómica, el género y la etnia<sup>261</sup>. De ahí que el hecho de que haya un sistema formativo bien estructurado como lo que fue expuesto en los párrafos anteriores no significa que la enseñanza policial de derechos humanos esté, efectivamente, formando en derechos humanos, puesto que, teniendo en cuenta el principio didáctico de *vivir los derechos humanos*<sup>262</sup>, las y los estudiantes están lejos de la vivencia y de las voces de las personas que componen los grupos en situación de vulnerabilidad, pues sus experiencias no son mencionadas o discutidas durante el proceso formativo. En esta línea, hay que tener en cuenta que para acercarse a la realidad de un grupo social en situación de vulnerabilidad hay que establecer conexiones históricas, sociales y políticas desde una perspectiva teórica, práctica y crítica.

---

<sup>259</sup> CANDAU, Vera Maria Ferrão, “Educação em direitos humanos: questões pedagógicas” en BITTAR, Eduardo (org.), *Educação e metodologia para os direitos humanos*, Quartier Latin, São Paulo, 2008, pág. 285 a 298, pág. 286.

<sup>260</sup> RIBOTTA, Silvina, “Educación en y para los derechos humanos: la educación en convivencia mundial”, en RIBOTTA, Silvina (ed.), *El desafío del siglo XXI. En Educación en derechos humanos: la asignatura pendiente*, Dykinson, 2006, pág. 153 a 194, pág. 154.

<sup>261</sup> VÁZQUEZ ANDRADE, Piedad, *Teoría crítica de la educación y derechos humanos: lineamientos para una propuesta educativa*, Universidad de León, León, 2006, pág. 366.

<sup>262</sup> RIBOTTA, Silvina, “Educación en y para los derechos humanos: la educación en convivencia mundial”, citado, pág. 153-154.

La segunda cuestión se refiere al lugar que ocupa la formación en derechos humanos en el escenario más amplio de la enseñanza policial, es decir, si corresponde a una asignatura más, sin conexión con otras, o puede determinar la labor policial y el modo en como sus prácticas se concretarán, contribuyendo a la redefinición del servicio policial y del modelo de policía adoptado. Y, vinculado a esta cuestión, hay que plantear cuál es el sentido del discurso de la formación en derechos humanos para los cuerpos de seguridad: si sería un discurso solamente normativo, en que son priorizados los conocimientos teóricos, especialmente los jurídicos, o aquel producido a partir de una realidad concreta y, desde ahí, considerar qué y de qué modo será impartido a los nuevos miembros.

Tras la presentación de un documento –la Matriz– en que es posible observar la preocupación con una formación policial crítica y según los derechos humanos, y que, aparentemente, se encuentra en buen estado, tratándose de un problema de efectividad en su implementación, otra consideración que puede arrojar luz a una de las discusiones planteadas en esta investigación y aportar herramientas para responder a las preguntas que fueron formuladas al comienzo de ese capítulo es acerca del currículo formal, currículo real y currículo oculto en las prácticas educativas.

El currículo formal es aquel que transmite, oficialmente, la intención didáctica, las estrategias, los procesos y la metodología de la institución de enseñanza para alcanzar sus propósitos. Corresponde, de tal modo, a documentos que están orientados hacia el trabajo escolar, actividades y situaciones de aprendizaje y resulta de una selección de contenidos valorados como imprescindibles por la autoridad escolar<sup>263</sup>. Como documento oficial, producido en el ámbito institucional, el currículo formal pretende que haya uniformidad en lo que será enseñado. Asimismo, funciona como un mecanismo de control no solo por parte de la jerarquía, sino también por parte del cuerpo docente y del conjunto de estudiantes, pues garantiza que los contenidos impartidos estén dentro de lo que fue previamente trazado<sup>264</sup>.

---

<sup>263</sup> PERRENOUD, Philippe, *El oficio de alumno y el sentido del trabajo escolar*, Popular, Madrid, 2006, pág. 39.

<sup>264</sup> *Idem*, 46-47.

A su vez, el currículo real se caracteriza por ser la transposición pragmática del currículo formal a un contexto concreto, que considera lo que, efectivamente, fue enseñado en clase. Corresponde, así, a experiencias, tareas y actividades que generan o que se supone que generen aprendizajes y, como manifestación de la realidad educativa, el conjunto formado por estudiantes ocupa un lugar relevante en la definición de los términos en que el mencionado currículo será construido, pues, como relación dinámica, sus preferencias o resistencias con respecto a los contenidos impartidos influirán en ese proceso<sup>265</sup>.

Finalmente, el currículo oculto corresponde a las normas, conocimientos, habilidades, creencias, mensajes, actitudes y valores que no están presentes en el currículo prescrito, pero se manifiestan en el funcionamiento de las instituciones y en las relaciones sociales allí desarrolladas, “a un nivel de elevada abstracción o de manera contradictoria, ambigua, incoherente”<sup>266</sup>. Asimismo, el entorno y las aptitudes de los sujetos de la relación pedagógica también componen el conjunto de componentes no intencionalmente planeados o abiertamente reconocidos. Un ejemplo de cómo lo expuesto se materializa puede ser observado en la dinámica entre género y educación formal en sus distintos niveles. Por más que el currículo formal adopte la perspectiva de género en sus materiales, si durante las clases las mujeres o niñas son silenciadas, interrumpidas y excluidas en la exposición de sus ideas, tienen sus argumentos minusvalorados o si se les explica algo con independencia si saben más sobre el tema que ellos, el currículo oculto, en esos casos, apunta hacia dirección opuesta, que refuerza discriminaciones y estereotipos escolares.

Aunque en el dominio del “no dicho”, por tanto, ese currículo puede actuar de forma más eficaz en el aprendizaje, pues, se fundamenta en la dinámica de las relaciones sociales y en la práctica educativa, es omnipresente y puede manifestarse antes del comienzo de la relación educativa<sup>267</sup>. Otro aspecto del currículo oculto es su singularidad, puesto que cada uno se concreta de manera muy particular consonante a las características de cada centro de enseñanza y que pueden estar relacionadas con la clase social del

---

<sup>265</sup> PERRENOUD, Philippe, *El oficio de alumno y el sentido del trabajo escolar*, citado, pág. 52 y 54-55.

<sup>266</sup> *Idem*, pág. 55.

<sup>267</sup> Acerca de lo mencionado, hay determinadas ideas construidas acerca del cotidiano escolar que salen de los muros de los centros de enseñanza y pasan a formar parte de las referencias generales sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, como el deber de obediencia, la estratificación del sistema educativo en niveles, la evaluación por medio de exámenes y notas, la organización burocrática y la relación jerárquica entre los sujetos que componen la relación educativa.



alumnado, los medios socioeconómicos y los materiales utilizados<sup>268</sup>. Desde esta perspectiva, también se puede considerar como elementos que definen el currículo oculto la relación de las instituciones con la sociedad y el lugar que ocupan en este escenario.

Ante lo que fue desarrollado, la distinción entre currículo formal, real y oculto es importante pues permite contrastar lo que está expuesto, oficialmente, en los planes educativos con los valores que implícita, lo que efectivamente fue transmitido y lo que no está mencionado, pero fue aprendido. Igualmente, por medio del análisis del currículo oculto es posible examinar los contenidos encubiertos o no declarados en la práctica educativa, pero que son inculcados, de forma positiva o negativa, en el alumnado. Teniendo en cuenta la enseñanza policial, el currículo formal, elaborado a partir de las directrices de la Matriz, incluye los derechos humanos en sus programas de formación tanto como pauta para la actuación policial como objetivo a ser alcanzado. Por otro lado, existe en la formación de los cuerpos de seguridad un currículo oculto, con valores y prácticas que son transmitidas subliminarmente y que pueden contraponerse al instituido oficialmente y al efectivamente transmitido.

En este sentido, el uso excesivo de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las detenciones arbitrarias y la humillación de las mujeres cuando denuncian delitos de carácter sexual, entre otras violaciones de derechos humanos, no ocurren dentro de un vacío: las personas que componen las fuerzas policiales aprenden que las acciones que violan los derechos de las personas que componen ciertos colectivos son justificadas o que no serán punidas, pues los subsistemas normativos que existen dentro de las instituciones – y que son transmitidos por medio del currículo oculto– las permiten<sup>269</sup>. El mantenimiento de la duplicidad de códigos y de componentes opuestos en los currículos, por tanto, se choca con la legislación sobre derechos humanos y con los parámetros establecidos para la formación de los cuerpos de seguridad y encuentra su máxima exteriorización en los dichos examinados en el capítulo anterior. Desde esta perspectiva, la aprobación por parte de la población de prácticas policiales que violan los derechos humanos de miembros de ciertos colectivos también forma parte del currículo oculto de

---

<sup>268</sup> LUCAS, Ana Sacristán, “En torno al curriculum oculto”, *Aldaba*, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Melilla, n.º 7, 1987, pág. 29 a 36, pág. 34.

<sup>269</sup> DUBOIS, Marc, “Educação em Direitos Humanos para a Polícia”, citado, pág. 467.

la enseñanza policial y se vincula, de modo implícito, al cumplimiento de esas expectativas.

### **3.2 La formación en derechos humanos en la Academia de Policía Civil del Estado de São Paulo**

La asignatura “Derechos Humanos” empezó a ser impartida en la Academia de Policía Civil del Estado de São Paulo a partir de 1998 para la formación técnico-profesional de todos los cargos policiales y con la finalidad de adecuarse a los estándares internacionales de protección y respeto a los derechos humanos, a las exigencias constitucionales y al establecido en los programas y documentos presentados en el apartado precedente. Desde entonces, los derechos humanos empezaron a incorporarse al diseño curricular de los cursos, a los materiales didácticos producidos por la institución y al discurso institucional sobre seguridad pública de una forma general.

Por lo que toca a los materiales didácticos disponibles, una de las principales referencias en la formación de los nuevos miembros es un manual sobre investigación criminal producido por la propia institución, que trata sobre temas vinculados a aspectos prácticos y cuestiones metodológicas de la labor policial<sup>270</sup>. En cuanto al colectivo formado por las mujeres, el manual aborda de forma superficial cómo debe ser la investigación en los delitos de violación o las especificidades para construir el conjunto probatorio relativo a tal delito. Tras una breve explicación sobre aspectos del tipo penal, la única orientación dada hace referencia a la importancia de la declaración de la víctima como fuente principal de informaciones sobre el delito y la necesidad de cuidado en cuanto a la búsqueda y recogida de vestigios y huellas que puedan contribuir a la identificación del autor<sup>271</sup>. En este sentido, es significativa la contradicción entre la valoración de la palabra de la víctima descrita en el material como fuente de prueba y la realidad, en que su narrativa es reiteradamente descalificada, como fue desarrollado en el capítulo 2. No obstante ser un documento técnico, con recomendaciones acerca de la ejecución de la tarea investigativa, también llama la atención el papel que la víctima ocupa

---

<sup>270</sup> SÃO PAULO (ESTADO). POLÍCIA CIVIL, *Manual operacional do policial civil: doutrina, legislação, modelos*, Delegacia Geral de Polícia, São Paulo, 2007.

<sup>271</sup> *Idem*, pág. 97.

en la dinámica de una investigación de crímenes sexuales. No hay ninguna mención sobre cómo debe ser tratada o cuáles son las mejores conductas para favorecer su recuperación y evitar el proceso de revictimización durante el periodo que permanece en la comisaría de policía o se desarrolla la investigación. El cuidado señalado en el manual, por ende, se refiere a aspectos estrictamente técnicos, como los vestigios y la manera de recoger las pruebas, y no a la atención a la víctima y las consecuencias de un trato discriminatorio.

Además del manual mencionado hay otro, dirigido a la aplicación del derecho procesal penal al ejercicio de la función de policía judicial y administrativa<sup>272</sup>. En ello, además del estudio de los documentos policiales y responsabilidades funcionales, hay un apartado que trata sobre los procedimientos formales que deben ser realizados en determinados tipos de delitos, en los cuales no hay ninguna mención a los delitos de carácter sexual. En gran parte, son delitos patrimoniales, especialmente los que tienen relación con viviendas o vehículos, o contra la integridad física de las personas. El único punto del manual que pone de relieve la figura de la mujer es cuando aborda aspectos de la violencia doméstica y familiar, introducido tras la promulgación de la Ley Federal n.º 11.340 de 7 de agosto de 2006, conocida como “*Lei Maria da Penha*”. Es cierto que tras su promulgación, Brasil logró avances significativos en la protección de las mujeres ante esa forma de violencia: el debate sobre la violencia doméstica y familiar se hace presente en el medio académico, institucional y en políticas públicas. Hay, formalmente, una relativa estructura de acogida, procedimientos propios, redes apoyo a las víctimas, comisarías específicas para casos de violencia de género y formación especializada para el personal policial<sup>273</sup>. Teniendo presente las dimensiones geográficas del país y también las disparidades socioeconómicas entre los estados, la distribución de dichas comisarías y el funcionamiento son irregulares: en muchas ciudades no existen, son pocas o de difícil

---

<sup>272</sup> SÃO PAULO (ESTADO). POLÍCIA CIVIL, *Manual de polícia judiciária: doutrina, modelos, legislação*, Delegacia Geral de Polícia, São Paulo, 2010, pág. 429 a 442.

<sup>273</sup> El 13 de enero de 2017 fue publicado en el Boletín Oficial del estado de São Paulo la Resolución n.º 2 de la Secretaria de Seguridad Pública, que instituyó un protocolo único para casos de violencia doméstica y familiar practicada contra la mujer. El protocolo establece las providencias que deben ser tomadas por la Policía Civil, la Policía Militar y la Policía Científica en estos casos para que las medidas adoptadas por profesionales de la seguridad pública sean uniformes y menos burocráticas. En la misma ocasión fue creado el *Projeto Integrar*, implementado en la Academia de Policía Civil del Estado de São Paulo en marzo de 2017. El nuevo programa tiene por objetivo perfeccionar la atención a las víctimas de violencia de género en las comisarías de policía, en particular la doméstica, capacitando a los nuevos miembros para la atención, acogida y orientación sobre las medidas legales posibles (las informaciones pueden ser consultadas en <https://www.imprensaoficial.com.br>, *Diário Oficial do Estado de São Paulo*, edición de 13 de enero de 2017, Poder Ejecutivo–Seção 1, pág. 13 y I, respectivamente).

acceso, lo que señala la necesidad en mejorar la atención especializada a las mujeres y establecer medidas para igualar las respuestas institucionales a esa forma de violencia. Desde el punto de vista de los grupos en situación de vulnerabilidad elegidos para este trabajo, sin embargo, este es el tema más desarrollado en el ámbito formativo policial. En cuanto a las víctimas de delitos sexuales, en los últimos años también hubo avances importantes, principalmente en lo que se refiere a centros especializados integrados de acogida, en que las víctimas, además de la atención policial, recibirán atención sanitaria y psicológica<sup>274</sup>.

Pese a los avances, es relevante puntualizar que el enfoque dado a la violencia hacia la mujer se centra en actos de personas que no integran los cuerpos de seguridad y no aborda sus causas estructurales que generan vulnerabilidades y discriminaciones y por tal razón aquí también es importante considerar los comentarios acerca de la efectiva perspectiva de género en la formación y prácticas policiales. En cuanto a la situación del colectivo negro ante las prácticas de los cuerpos de seguridad, la invisibilidad en los materiales aquí comentados llega a niveles acentuados. Los dos manuales no abordan el racismo institucional, las prácticas discriminatorias hacia las personas negras o plantean reflexiones sobre los motivos de las desigualdades en la incidencia de ciertos procedimientos o el número elevado de víctimas negras en casos de homicidio. No hay cualquier mención sobre investigaciones en delitos de odio o practicados con base en la en la “raza”, como identificarlos o cuál es la mejor forma de interactuar con las víctimas para que no pasen por un nuevo proceso de victimización. Si, desde la perspectiva de la comunidad negra de un modo general sus experiencias no son consideradas en la relación con las instituciones policiales, la articulación entre género y “raza”, específicamente, es exógena a la enseñanza policial.

Con respecto a los contenidos de los dos programas de la asignatura “Derechos Humanos” aquí examinados, relativos a 2008 y 2016, es posible observar cambios positivos en el enfoque dado y que, paulatinamente, se asientan en la formación

---

<sup>274</sup> Acerca del tema, consúltase el Decreto n.º 46.369, de 14 de diciembre de 2001, del estado de São Paulo y la Ley Federal n.º 12.845, de 1 de agosto de 2013. Ambos textos legislativos tratan sobre la atención obligatoria, integral y multidisciplinar a las víctimas de delitos sexuales en los hospitales del sistema público de sanidad.

policial<sup>275</sup>. Al contrario de los manuales, los programas siguieron los sucesivos avances en la concepción acerca de la enseñanza en derechos humanos a los cuerpos de seguridad establecidos por las directrices gubernamentales. El primer programa analizado, relativo a 2008, fue dividido en 12 clases y con carga horaria total de 12 horas lectivas. Como las dos últimas clases estaban reservadas para la evaluación del aprendizaje, en realidad, los contenidos deberían ser impartidos en 10 horas lectivas. Su examen permite concluir el carácter extremadamente teórico de la asignatura, con mención a la legislación nacional e internacional sobre el tema, al análisis de la estructura del sistema de seguridad pública del país y cuestiones relativas al servicio policial, como el enfrentamiento de la criminalidad y el uso legítimo de la fuerza.

El programa en análisis contenía cinco bloques temáticos:

- 1) Aproximación inicial al tema y nociones sobre la relación entre Derecho, Seguridad Pública y Policía;
- 2) Legislación nacional e internacional de los derechos humanos, sistemas internacionales y la repercusión de ellos internamente;
- 3) Democracia y seguridad pública en Brasil, fundamentos constitucionales y atribuciones de la policía;
- 4) Violencia y uso legítimo de la fuerza;
- 5) Instrumentos legales para luchar contra la criminalidad.

La exposición de los bloques temáticos del programa permite observar que no existe ninguna referencia a los grupos en situación de vulnerabilidad, las causas estructurales que conllevan ese estado, el estudio de la relación entre policía y sociedad en un escenario concreto y real o, tampoco, un punto de vista crítico sobre dichas relaciones. Solamente en la primera clase está previsto un momento reflexivo y de interacción, en que la finalidad es verificar cuál es la idea que el alumnado tiene en relación con los derechos humanos. Asimismo, llama la atención que dicho programa aborde el uso legítimo de la fuerza por parte de integrantes de los cuerpos de policía pero no el uso excesivo de la fuerza y sus consecuencias jurídicas, administrativas y sociales.

---

<sup>275</sup> Los programas pueden ser consultados en los anexos de este trabajo. Cabe observar que tanto su carga horaria como su contenido son los mismos para todos los cargos, no importa el nivel jerárquico o atribuciones. El profesorado de dicha asignatura, como para las demás, está compuesto en su mayoría por policiales de la propia institución y para la docencia debe ser aprobado en un proceso selectivo específico para la asignatura.

A partir de lo que fue desarrollado sobre el currículo oculto, eso puede señalar que el uso abusivo de la fuerza estaría legitimado en cualquier situación y que su exceso no sería una cuestión vinculada a los derechos humanos, sino al ámbito funcional.

El segundo y actual programa analizado, relativo a 2016, fue dividido en 24 clases, con carga horaria total de 24 horas lectivas. En sentido similar que el anterior, como las dos últimas clases están reservadas para la evaluación del aprendizaje, en realidad, los contenidos deben ser impartidos en 20 horas lectivas. Su examen permite sacar conclusiones positivas acerca de cómo los derechos humanos y, en particular, los grupos en situación de vulnerabilidad son abordados durante la acción formativa.

El programa en análisis contiene 11 bloques temáticos:

- 1) Aproximación inicial al tema y nociones sobre la relación entre Derecho, Seguridad Pública y Policía;
- 2) Fundamentos históricos y filosóficos de los derechos humanos;
- 3) Constitucionalismo y declaraciones americana y francesa. El estado de derecho. Las generaciones de los derechos humanos. Diversidad étnico-racial;
- 4) Derecho Internacional de los Derechos Humanos y documentos internacionales;
- 5) Sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Tratados internacionales de protección de los derechos humanos en el Derecho brasileño. Constitución Federal y Policía Civil;
- 1) Orientación sexual e identidad de género. Homofobia y transfobia. Población LGBT sin techo;
- 2) Estereotipos de masculinidad y feminidad. Delitos de odio;
- 3) Racismo en Brasil y acciones afirmativas;
- 4) Marco legal de lucha contra el racismo. Práctica jurídica para luchar contra el racismo;
- 5) Personas con discapacidad. Plan Nacional de Derechos de la Persona con Discapacidad;
- 11) Policía y discapacidad.

La ampliación de la cantidad de horas lectivas del programa permitió la inserción de nuevos temas y un enfoque que considera los grupos en situación de vulnerabilidad,

en especial, los formados por mujeres, personas negras, personas con discapacidad o en razón de la orientación sexual o identidad de género. Además de los cambios estructurales, la asignatura pasó a ser titulada “Derechos Humanos y Diversidad”, lo que señala la dirección hacia la cual va caminando. Pese a la nueva formulación, todavía permanece el carácter teórico y poco práctico de la asignatura, pues, incluso en relación con los colectivos mencionados y con excepción de la práctica jurídica sobre el racismo, los demás bloques “específicos” no se acercan a la realidad de los grupos. Tampoco, se plantea una discusión sobre las causas estructurales y los motivos por los cuales ciertas categorías están vinculadas al estado de vulnerabilidad.

Lo comentado arriba puede ser observado en el caso de las mujeres. El único punto en que son mencionadas es el que se refiere a los estereotipos de masculinidad y feminidad y eso no necesariamente conlleva reflexionar sobre las formas específicas de violencia por el hecho de ser mujer y cómo sus derechos se concretan de distintas maneras, siempre desiguales, en comparación con los hombres. El mismo bloque menciona los delitos de odio, pero estos no solamente se vinculan al género, como se podría interpretar por la forma de exposición del punto, sino a los grupos en estado de vulnerabilidad de modo general.

Como en los manuales, están ausentes temas clave para comprender la labor policial en Brasil, como el racismo institucional, la violencia practicada por sus miembros, la persistencia y reproducción de estigmas hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, la condición socioeconómica como elemento que genera vulnerabilidad y, muy importante, cómo las prácticas de esas instituciones contrarias a los derechos humanos intensifican dicho estado.

Las conclusiones acerca del análisis de los programas de la asignatura “Derechos Humanos” señalan los avances que vienen ocurriendo en el campo de la enseñanza policial y desde una perspectiva práctica pueden orientarse en dos sentidos: si, por un lado, son positivos, pues contemplan una mayor preocupación con los grupos en situación de vulnerabilidad, por otro, ponen de manifiesto el privilegio a un enfoque histórico y legislativo y también lo que todavía falta para que los cuerpos policiales dejen de ser asociados a prácticas que violan derechos y que llevan a la falta de confianza por parte de la población. De igual modo, confirma que el hecho que ya se imparta dicha asignatura en los cursos de formación policial no significa que sea suficiente para producir cambios

en las prácticas policiales ni que sus miembros incorporarán la perspectiva de los derechos humanos al ejercicio de sus funciones.

### **3.3 Perspectivas de enseñanza policial a partir de los grupos en situación de vulnerabilidad**

Cómo conciliar derechos humanos y trabajo policial y hasta dónde se puede llegar sin violarlos son indagaciones frecuentes durante la actuación del personal que tiene como atribución temas vinculados a la seguridad pública y que, igualmente, atraviesan discusiones en ámbitos políticos, académicos e institucionales. En este campo de constante tensión, la distancia que suele mediar el deber ser y el ser del ejercicio de la función policial aumenta cuando se centra la mirada en los colectivos en situación de vulnerabilidad<sup>276</sup>. La política de derechos humanos planteada para los cuerpos de seguridad tanto en términos de actuación cuanto de formación es una política alejada de la realidad y manejada desde un enfoque exclusivamente teórico y poco crítico, que no considera los sistemas estructurales de opresión y de vulnerabilidad sobre determinados colectivos. Es necesario, por ende, arrojar luz a la naturalización del odio, a la violencia y a la discriminación hacia los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad especialmente en su relación con la policía y, para ello, la formación en derechos humanos debe basarse en dos aspectos: 1) la reflexión crítica sobre sus prácticas, que lleve a un movimiento dinámico y dialéctico entre el hacer y el pensar sobre el hacer<sup>277</sup>; 2) la adopción de una dimensión transversal de los derechos humanos en el currículo, pasando por todos sus elementos, asignaturas y etapas formativas.

El ambiente de enseñanza tal vez sea el más propicio para el planteamiento y debate de las cuestiones vinculadas a las propuestas que fueron expuestas en el párrafo anterior, pues el proceso de formación permite crear espacios de reflexión y análisis crítico sobre los aspectos que acompañarán a los miembros de los cuerpos de seguridad en toda la trayectoria profesional. Igualmente, posibilita el debate en un ambiente en que se puede abordar tales cuestiones de modo más abierto, sin tantos prejuicios y estereotipos, ya que a partir del momento que las y los alumnos policías salen de los

---

<sup>276</sup> PISARELLO, Gerardo y ASENS, Jaume, “Policía, seguridad y cultura antirrepresiva”, citado, pág. 55.

<sup>277</sup> FREIRE, Paulo, *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*, São Paulo, Paz e Terra, 2002, pág. 43.



centros de enseñanza y pasan a ejercer sus funciones las cargas de los procesos de opresión y discriminación presentes en la dinámica policial se acentúan, lo que impone más obstáculos para enfrentarse a ellas.

Es importante puntualizar que ante la función atribuida a los cuerpos policiales abordar el tema de los derechos humanos a partir de la necesidad de respeto a la diversidad resulta insuficiente. No se trata solo de respetarla, sino también de garantizar que las personas que la vivencian tengan el mismo acceso a los derechos que otras y eso solo es posible si se parte de un marco teórico y práctico formativo que tenga como uno de sus fundamentos el análisis del significado de la vulnerabilidad en términos de justicia y de derechos humanos. Desarrollar la capacidad para trabajar con la diversidad y la predisposición para reconocer la humanidad en el otro, sus vivencias y las cuestiones complejas que afectan a la trama de su vida como centro de la formación en derechos humanos de los cuerpos policiales debe estar asentado en la no categorización del otro a partir de las experiencias vitales personales, sino como representante del Estado en el ejercicio de su función. Además, implica desarrollar la capacidad de identificarse con alguien, reconocer su humanidad y conectarse con lo que es externo a su realidad, lo que solo es posible si se conocen los procesos de violencia, discriminación y vulnerabilización estructurales por los cuales determinados colectivos históricamente pasaron y aun pasan. El conocimiento y la reflexión crítica sobre otras historias, experiencias, luchas e injusticias –tanto como integrante de una sociedad como representante del Estado– contribuyen al proceso de humanizar el otro y a sí mismo como observa Freire: “es por eso que el opresor se deshumaniza al deshumanizar al oprimido, no importa que coma bien, que se vista bien, que duerma bien. No sería posible deshumanizar sin deshumanizarse tal la radicalidad social de la vocación. No soy si no eres, no soy, sobre todo, si te prohíbo ser”<sup>278</sup>. Ubicar esa idea en la base de una enseñanza que tiene por finalidad formar profesionales que tienen el uso de la fuerza, realizan actividades para reprimir la criminalidad y trabajan en escenarios en que la violencia está presente puede aportar nuevas perspectivas para resignificar cómo los derechos humanos son abordados en las instituciones policiales.

---

<sup>278</sup> FREIRE, Paulo, *Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido*, Paz e Terra, São Paulo, 1997, pág. 51. Traducción de la autora.

Lo que fue desarrollado en el párrafo anterior significa que la diferencia no debe ser interpretada como una dicotomía “nosotros”/“ellos”, “*bandidos*”/policías, “normales”/“anormales”, sino como un elemento que está presente en las dinámicas sociales de un modo general y, también, en las instituciones policiales. Sobre la base de estos términos, la alteridad no puede ser tratada como algo que amenaza y justifica la violencia. Aprender a reconocer que la diferencia y la diversidad en múltiples aspectos sociales como la sexualidad, el género, la etnia y la condición socioeconómica pueden configurar elementos que agravan la situación de vulnerabilidad y la discriminación de ciertos grupos sociales es fundamental para que se produzcan cambios reales en las prácticas de los cuerpos de seguridad.

Desde la perspectiva de la diversidad, la formación de los nuevos miembros debe tener en cuenta que capacitar para el ejercicio profesional no solo se refiere a criminalística, conocimientos jurídicos, ética profesional, técnicas de investigación, elaboración de documentos administrativos, inteligencia policial, clases de patrullaje o uso del armamento, en que la asignatura “Derechos Humanos” sería considerada una entre otras del programas y su contenido colocado en segundo plano, solamente para cumplimiento de las directrices del PNEDH. Al contrario, la mencionada asignatura debe ser vista como un espacio para poder examinar las complejidades y contradicciones de la labor policial sin perder de vista las diferentes experiencias de cada ser humano y como las prácticas de los cuerpos de seguridad pueden influir negativamente, en términos de restricción o violación de derechos, en la vida de esas personas. Significa, por ende, que el proyecto formativo en derechos humanos debe ser capaz de sensibilizar y humanizar, lo que implica “desconfirmar” la presencia de la opresión permanentemente transmitida por la propia cultura” al alumnado no por el contenido impartido en una asignatura, más a través de una metodología propia que pueda formar un conjunto de referencias y buenas prácticas que estén presentes en la concepción sobre el servicio policial<sup>279</sup>.

Cabe mencionar, igualmente, que los derechos humanos deben transversalizar el currículo, de manera que no estén aislados en una asignatura y sean abordados en una única unidad, sino que deben incluir todo el proceso pedagógico en sus dimensiones

---

<sup>279</sup> BITTAR, Eduardo, “Educação e metodologia para os direitos humanos: cultura democrática, autonomia e ensino jurídico” en SILVEIRA, Rosa Maria Godoy (org.), *Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos*, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Brasília, 2007, pág. 313 a 334, pág. 316. Traducción de la autora.

procedimentales y actitudinales y en todas las prácticas educativas<sup>280</sup>. Desde esta perspectiva, pasan de una asignatura en la programación educativa a una guía para orientar el proceso político-pedagógico de la formación policial, otorgando nuevo sentido a la enseñanza impartida en los centros de formación de los cuerpos policiales y constituyéndose como parte imprescindible del proceso de socialización de mujeres y hombres como policiales<sup>281</sup>. La transversalización en la enseñanza aquí discutida significa la presencia de los derechos humanos en todas las asignaturas y ejes de formación, lo que, actualmente, es poco frecuente. Desde la perspectiva de la práctica policial, el discurso de los derechos humanos tiene baja efectividad en las instituciones de enseñanza si este no forma parte de cómo se hace el patrullaje en las calles, cómo se emplea y cuál es la importancia del empleo progresivo de la fuerza y de las tecnologías no letales, cómo interactuar con la ciudadanía, especialmente con integrantes de los grupos en situación de vulnerabilidad, cómo se hace una investigación bajo los parámetros constitucionales y de garantías procesales o cómo debe ser tratada una persona en dependencias policiales.

Contemplada desde esta posición, plantear otras perspectivas para la formación policial, especialmente en derechos humanos, puede arrojar luz a esta compleja cuestión y colaborar en cambios institucionales tanto en términos de enseñanza como en relación con la concepción sobre el servicio policial y su forma de interaccionar con la sociedad. Con esto en mente, reflexionar sobre los objetivos de la enseñanza, más allá de redefinirlos y comprenderlos solo como entrenamiento para el ejercicio de una función específica, conlleva mover los derechos humanos de su lugar como asignatura y transponerlos para un espacio más amplio en que puedan ser manejados como herramientas para redefinir objetivos institucionales. Lo que se pretende poner de relieve es el papel irrenunciable de la educación en derechos humanos como componente de la lucha para la igualdad y no discriminación de las personas que integran determinados grupos sociales, puesto que cambios legislativos no resultan suficientes para alcanzar

---

<sup>280</sup> ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares, “Direitos humanos como campo de saberes e práticas culturais e educativas”, *Conferência Nacional: Educação, Globalização e Cidadania. Novas Perspectivas da Sociologia da Educação*, Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, 2008, pág. 10.

<sup>281</sup> KAUFMAN, Edy, “Educação em direitos humanos para executores da lei” en CLAUDE, Richard P. y ANDREOPOULOS, George J. (orgs.), *Educação em direitos humanos para o século XXI*, trad. de Ana Luiza Pinheiro, Edusp/NEV, São Paulo, 2007, pág. 411 a 434, pág. 422.

tales finalidades<sup>282</sup>. En lo relativo a la formación en derechos humanos de las fuerzas policiales, adoptar la perspectiva de los colectivos aquí abordados, sus historias, luchas y desafíos para el reconocimiento, acceso y fruición de sus derechos como punto de partida –y no como tema opcional del programa– puede modificar actitudes, procedimientos y conductas policiales y disminuir la distancia entre el ser y el deber ser de la praxis policial. Para ello, es imprescindible –y urgente– enfrentarse a cuestiones tabúes dentro de los centros de enseñanza policiales, como la violencia practicada por sus miembros, el abuso del uso de la fuerza cuyo resultado más grave es el homicidio, el racismo institucional, la construcción de una jerarquía de ciudadanía y la perpetuación de estereotipos y discriminaciones hacia las mujeres. Hablar y discutir abuso policial, tortura, malos tratos y la impunidad de esas conductas en el interior de las instituciones afecta la idea del Estado como garante de los derechos humanos y la policía como institución comprometida con valores democráticos y, por ello, tal vez les suponga a esas instituciones dificultades para trasponer todos estos temas a la enseñanza policial. En esta dirección, abordar las reminiscencias del pasado de violación institucionalizada de los derechos humanos y la impunidad por tales prácticas que todavía hoy siguen presentes en la manifestación del trabajo policial son significativas herramientas para discutir la relación entre policía y derechos humanos de modo más concreto, real y crítico.

Como telón de fondo, es importante también discutir cuestiones que, si no directamente se vinculan al servicio policial, son imprescindibles para comprender el escenario en que las personas que componen los cuerpos de seguridad actuarán, como la vulnerabilidad socioestructural que incide en ciertos grupos o las desigualdades históricas y persistentes de la sociedad brasileña. Al mismo tiempo, resulta fundamental insertar en los diseños curriculares temas sensibles a la sociedad brasileña de un modo más amplio, como la criminalización de la pobreza, los motivos por los cuales las mujeres son las principales víctimas de los delitos de carácter sexual, las mayores tasas de homicidios y número de ejecuciones extrajudiciales de personas negras o por qué los negros representan la mayoría de las personas encarceladas. Ese enfoque sitúa la pobreza, el género y la “raza” en el centro de la discusión sobre las desigualdades en Brasil y los resultados de sus distintas formas de articulación y manifestación en el trabajo policial.

---

<sup>282</sup> CUENCA GÓMEZ, Patricia, “Los derechos humanos: la utopía de los excluidos”, citado, pág. 28.

A partir de lo que fue desarrollado en los párrafos anteriores y desde un punto de vista concreto, se puede mencionar entre las medidas posibles para otras perspectivas en la enseñanza policial las siguientes: 1) insertar en las propuestas metodológicas el estudio de casos en que integrantes de los cuerpos de seguridad violaron los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad y actuaron de forma abusiva e ilegal<sup>283</sup>; 2) abordar la posición de Brasil en términos de seguridad pública ante el escenario internacional por medio de informes de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 3) utilizar en las discusiones sobre derechos humanos y seguridad pública los resultados de investigaciones realizadas por organismos no gubernamentales brasileños, como el *Fórum Brasileiro de Segurança Pública*, y también por la academia; 4) desarrollar las cuestiones de género a partir de la articulación con otras categorías, como etnia, discapacidad, orientación sexual e identidad de género; 5) situar el racismo y el sexismo institucional como temas centrales en los ejes de las acciones formativas; 6) incorporar el marco teórico de la vulnerabilidad a la enseñanza policial; 7) reflexionar sobre el impacto del currículo oculto en la formación integral de las y de los profesionales de policía y transponer al currículo formal temas que se desarrollan en el currículo oculto, como la violencia policial, el sexismo y el racismo institucionales o la criminalización de la pobreza.

Actualmente, algunas de las medidas sugeridas, sobre todo los estudios de caso, pueden ser vistas en algunas de las clases impartidas en la Academia de Policía Civil del Estado de São Paulo, por ejemplo, pero la elección por ese camino es una posición pedagógica y personal de cada profesora o profesor. Con respecto al estudio de caso como técnica didáctica, todos los ejemplos concretos sobre violaciones de derechos humanos practicadas por el personal policial mencionados en el capítulo 2 pueden ser utilizados por el cuerpo docente o servir de base para la formulación de otros casos. Ese tipo de método permite analizar minuciosamente el procedimiento que fue adoptado por las y los profesionales, el resultado de sus acciones, el impacto en los sujetos involucrados y los marcos jurídicos relativos a las conductas descritas. El estudio de caso, de igual modo, incentiva a las y los estudiantes, por medio de respuestas a preguntas críticas<sup>284</sup>, a

---

<sup>283</sup> Para detalles sobre ese método de enseñanza, consúltese WASSERMAN, Selma, *El estudio de casos como método de enseñanza*, Amorrortu, Buenos Aires, 1999.

<sup>284</sup> Las preguntas críticas elaboradas por el profesor o profesora son una oportunidad para que las y los estudiantes examinen importantes ideas, nociones y problemas relacionados con el caso. En tal sentido, Wasserman subraya que “estas preguntas, por la forma en que están redactadas, requieren de los alumnos

proponer soluciones distintas a las resoluciones de los problemas reales que son trabajados en aula y se acerquen a situaciones que tendrán que enfrentarse de un modo que les posibilite reflexionar sobre cuáles serían las mejores conductas para el caso. Discutir los problemas institucionales, sobre todo los que conciernen a la violencia excesiva y a las violaciones de derechos practicadas por sus miembros dentro de las propias instituciones es un aspecto delicado y muchas veces difícil, pues pone de relieve sus fallos y discrepancias con la matriz discursiva adoptada por el Estado brasileño en relación con los derechos humanos. Por ello, es relevante que las alumnas y los alumnos reflexionen respecto a la brecha que existe entre ley y realidad y de qué forma esto afecta al servicio policial y la relación entre cuerpos de seguridad y sociedad. De este modo, tendrán herramientas para proponer soluciones que estén en consonancia con los derechos humanos y actuar de forma distinta a la idea que fue construida a lo largo de los años sobre las instituciones aquí tratadas, demostrando que otra forma de ejercer la función policial es posible.

Desde lo que fue planteado, la formación en derechos humanos como actualmente está configurada no contempla en su currículo formal el hecho de que los propios miembros puedan ser concebidos como agentes de la opresión y responsables de agravar y crear nuevos estados de vulnerabilidad para las mujeres y para las personas negras. En sentido similar, la enseñanza policial no plantea como problema cuestiones fundamentales vinculadas a esos colectivos, como el sexismo y el racismo institucionales, y que impactan en la labor de los cuerpos de seguridad. Para llevar a cabo una formación crítica, de acuerdo con las pautas de la Matriz y con el marco teórico de este capítulo, la formación en derechos humanos debe ser flexible, cambiante, en un proceso continuo de adaptación al que ocurre en la realidad social y que permita la discusión y la incorporación de temas subyacentes al currículo formal y al currículo real. A modo de cierre, lo que fue expuesto en este capítulo puede ser sintetizado en la idea de que para que, efectivamente, se adopte la perspectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad hay que volver explícitos los componentes del currículo oculto, en un proceso de toma de conciencia de las deficiencias en la enseñanza policial y del reconocimiento de que, en el escenario brasileño, los cuerpos de seguridad siguen violando los derechos humanos.

---

una reflexión inteligente sobre los problemas, y esto las diferencia enormemente de las preguntas que obligan a recordar una información sobre hechos y producir respuestas específicas” (WASSERMAN, Selma, *El estudio de casos como método de enseñanza*, citado, pág. 20).

## CONCLUSIONES

El itinerario recorrido en esta investigación permitió estudiar el marco teórico de la vulnerabilidad socioestructural de grupos que se encuentran en situación de desventaja social, jurídica, política, económica y cultural. El marco establecido arrojó fundamentos para examinar críticamente el escenario brasileño de desigualdades e injusticias hacia ellos y, en una aproximación a las prácticas policiales, fue posible verificar cómo la actuación de los miembros de los cuerpos policiales puede intensificar su estado de vulnerabilidad. De tal modo, la investigación fue un espacio para formular preguntas y buscar respuestas, muchas de las cuales siguen abiertas, y reflexionar sobre el ejercicio de la función policial tanto como objeto de estudio cuanto ejercicio profesional bajo una comprensión de titularidad de los derechos que incluyan la diversidad. Las conclusiones que se presentan a continuación son el resultado de ese proceso:

1) El marco teórico de la vulnerabilidad se fundamenta en su noción socioestructural y tiene como centro el hecho de que las identidades y subjetividades son múltiples y que la diferencia no puede conllevar desigualdades injustas. Desde esta construcción teórica, los sujetos y grupos en situación de vulnerabilidad cuestionan la tradicional concepción de titulares de derechos y subrayan que, aunque un Estado reconozca a toda la ciudadanía el acceso y ejercicio de los derechos, en el plano real esto se materializa de forma distinta, es decir, esa igualdad formal se desdibuja de acuerdo con la asociación entre características y condiciones personales y la manera cómo está estructurada una la sociedad.

2) Investigar la situación de grupos sociales en un escenario concreto y situado exige considerar tanto las diferencias intergrupales como las intragrupalas, pues la pertenencia a un determinado colectivo no anula la diversidad, la historia y la subjetividad individuales. Desde esta óptica, la vulnerabilidad puede manifestarse de diversas formas, más o menos graves, en la vida de los individuos y asociarse a otros elementos y, como resultado, originar nuevas formas de “estar” vulnerable. Dentro de esta dinámica, es cierto que la incidencia de la pobreza, como causa estructural y fenómeno multidimensional, intensificará dicho estado y dificultará exponencialmente que las personas que estén atrapadas en ella logren realizar sus derechos y desarrollar libremente sus planes de vida.

3) Sin ignorar la multiplicidad de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en Brasil y la urgencia en considerarlos en las políticas de seguridad pública y en prácticas policiales pautadas en los derechos humanos, esta investigación se centró específicamente en los colectivos formados por mujeres y personas negras no solo por una cuestión numérica, pues representan la mitad de la población brasileña, sino también por el modo cómo los procesos de exclusión y discriminación de sexismo y racismo están arraigados en la sociedad brasileña. Desde esta posición, fue posible analizar como un mayor grado de interseccionalidad entre diversas categorías que definen los seres humanos corresponde a un estado de vulnerabilidad más profundo y, por consiguiente, mayores violaciones de derechos.

4) Las consecuencias del hecho de ser mujer en una sociedad construida sobre la base patriarcal pueden ser observadas en distintos aspectos de la vida de las mujeres e, igualmente, son capaces de determinar e influir en el grado de violencia sufrida, la expectativa de vida, el nivel educativo (de inserción educativa en el sistema de educación formal), los ingresos recibidos, la acentuada diferencia en cuanto a la victimización en delitos específicos en razón del género y el trato en las instituciones policiales. Específicamente sobre este último aspecto, el modo cómo son tratadas cuando reportan delitos de carácter sexual al Estado es significativamente distinto en comparación con otros delitos o si las víctimas son hombres. Esa diferencia injusta y discriminatoria puede llevar a un proceso frustrante, insatisfactorio y humillante, de revictimización, o determinar cómo será realizada la investigación de los hechos. El sesgo de género es evidente y conlleva, en términos prácticos, la inversión de la carga de la prueba: la víctima debe probar su condición de víctima. En esta dinámica, la culpabilización invertida da lugar a nueva victimización y puede determinar cuáles son las líneas de investigación que serán seguidas, ya que sobre la base de estereotipos y prejuicios es construida socialmente una imagen de quién sería la víctima de los delitos de carácter sexual. Además del aspecto procedimental, hay que considerar que en la interacción de los agentes de policía con las mujeres, las relaciones de poder, que ya son desiguales de una forma general, se intensifican, pues se les agrega el ejercicio de la autoridad. Una autoridad que, si en un primer momento es legítima, pues es atribuida por el Estado a sus representantes, puede pasar a ser ejercida de manera ilegal, como instrumento para la violación de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo en contextos en que se articulan “raza” y pobreza.



5) Las desigualdades que caracterizan la sociedad brasileña se materializan en una jerarquía simbólica de ciudadanía que afecta a mujeres y a hombres de distintas maneras y grados, en la que categorías como el género, la condición socioeconómica, la orientación sexual, la etnia u otros rasgos identitarios o condiciones sociales son determinantes para la posición en tal clasificación. Pese a los diferentes matices de esos elementos, es cierto que la diferencia en los niveles jerárquicos implicará violaciones de derechos. Bajo la óptica de cómo actúan los cuerpos de seguridad ante esa jerarquía, las mujeres y las personas negras se encuentran en situación de desventaja y pueden tener mayores posibilidades de que sus derechos sean vulnerados, ya que los modelos discriminatorios y opresivos también son producidos y reproducidos en las prácticas de los cuerpos policiales.

6) La “raza” y la “blanquitud” son constructos sociales y la segunda concede poder y crea ventajas específicas para ciertos grupos, determinado el nivel educativo, la condición de salud, la relación con instituciones públicas, el estatus y cuáles son los espacios sociales a los que se puede acceder. En esta dinámica, la relación que se establece es de desigualdad entre el acceso y ejercicio de los derechos y las posibilidades para que cada persona desarrolle libremente sus trayectorias personales. A partir de la perspectiva de la labor policial, esa desigualdad se manifiesta en prácticas discriminatorias hacia las personas negras, mayores posibilidades de que sean blanco de homicidios practicados por integrantes de las fuerzas policiales y que sufran más violencia y crueldad hacia sus cuerpos. La discriminación y las desigualdades que se manifiestan en el ámbito policial, de tal modo, contribuyen a perpetuar el racismo institucional presente en la sociedad brasileña y señalan la necesidad de discutirlo también dentro de las instituciones que emplean la fuerza legítimamente. En este contexto específico de violencia y violación de derechos hay que tener en cuenta la situación de las mujeres negras, que en función de la interacción entre género y “raza” sufren de forma más grave los procesos estructurales del sexismo y del racismo, pues sus experiencias vitales suelen ser invisibilizadas en las discusiones sobre esos temas. Cuando se piensa en quiénes son las víctimas de la violencia policial, por tanto, no suele venir a la mente los rostros y las historias de las mujeres negras. Sus identidades todavía no se incorporaron a la consciencia colectiva e institucional porque faltan marcos de referencia para verlas, para recordarlas, para agregarlas al conjunto de personas que sufren la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad. Como resultado, la invisibilidad es una de las marcas características de ese

colectivo y está presente en distintos ámbitos de sus vidas y relaciones sociales. El ocultamiento de la vulnerabilidad específica de las mujeres negras se manifiesta en las instituciones policiales a través de la extrema violencia ejercida hacia ellas –en que las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres se acentúan considerablemente– y del bajo nivel de conocimiento de sus vivencias y procesos de discriminación.

7) La educación en derechos, entendida como ejercicio reflexivo y crítico de tolerancia y comprensión de la alteridad y atención a la dignidad, identidad, subjetividad e historias particulares del otro tiene un potencial transformador e imprescindible para disminuir prácticas abusivas y discriminatorias y promover la justicia. Desde esta perspectiva, puede ser abordada de múltiples maneras, de acuerdo con distintos niveles educativos, espacios geográficos y contextos sociales. En esta investigación, el enfoque fue orientado hacia la relevancia de las prácticas educativas para los cuerpos de seguridad en Brasil. El modo como fue estructurada la formación en derechos humanos a los miembros de dichas instituciones refleja la adopción de una matriz discursiva de derechos humanos por parte del Estado brasileño como herramienta para alcanzar los objetivos constitucionales. Sin embargo, si se observa desde un punto de vista concreto y real, hay una discrepancia entre la concepción oficial y lo que, efectivamente, es enseñado.

8) Desde un punto de vista teórico-formal la formación en derechos humanos ya está asentada en las prácticas de los centros de enseñanza policiales. Ahora es necesario avanzar y llegar a los grupos en situación de vulnerabilidad, a sujetos reales, que no se ajustan a un determinado y limitado patrón de titular de derechos. Resignificar la enseñanza en derechos humanos a los cuerpos policiales requiere un cambio profundo y a largo plazo, que implica no solo cuestiones pedagógicas e institucionales, sino políticas principalmente. El PNEDH, la Matriz y el actual programa de la asignatura “Derechos Humanos” de la Academia de Policía Civil del Estado de São Paulo señalan que los cambios son posibles, que los programas nacionales y estatales vienen mejorando y que las próximas generaciones pueden tener la oportunidad de incorporar en sus prácticas los derechos humanos no como resultado de una asignatura entre otras sino de la materialización de un saber más amplio a partir de lo cual se puede reflexionar sobre la labor policial de forma más minuciosa y profunda.

9) Somos conscientes de que, pese a la relevancia de la formación en derechos humanos para los cuerpos policiales como instrumento para modificar la realidad

brasileña y su modo de actuar, esa formación tiene un límite y no resolverá, por sí misma, el problema de las violaciones de derechos practicadas por sus miembros, algunas de las cuales descritas en este trabajo. Es importante tener eso en cuenta, pues por más esfuerzos que se hagan para perfeccionar la enseñanza policial y cambiar paradigmas educativos son necesarias otras medidas, fundamentalmente políticas, vinculadas a la restructuración de las instituciones, la valoración de sus profesionales, la adopción de políticas de seguridad pública de Estado y no de gobierno, y sociales, relacionadas con la necesidad de resignificar la respuesta a la pregunta ¿derechos humanos para quién?

10) La enseñanza de derechos humanos a los cuerpos de seguridad desde la perspectiva que se defendió en este trabajo todavía tiene un lugar marginal en el marco formativo y práctico transmitido a los nuevos miembros si se plantea desde la perspectiva de la efectividad de los derechos de las personas que conforman los colectivos elegidos. Eso significa afirmar que todavía están configurados como una asignatura pendiente dentro de los programas y contenidos impartidos a los cuerpos de policía. Trasladar las prácticas, valores, procedimientos y saberes del currículo oculto al currículo formal como instrumento para modificar el modo de interpretar y aplicar los derechos humanos conlleva tanto un aprender sobre el hacer policial a partir de tal matriz como un des-aprender. Ese des-aprender, resultado de una práctica crítica y reflexiva sobre el ejercicio de la función policial cuando es llevada a cabo de manera discriminatoria y violatoria de derechos humanos, comprende todo lo que compone el currículo implícito desde un punto de vista oficial, pero explícito si se considera la realidad social.

11) El análisis crítico de la actuación de los cuerpos policiales ante los grupos en situación de vulnerabilidad señala la necesidad de reconceptualizar la relación entre sociedad y policía y resignificar los derechos humanos también desde esta óptica. Aumentar la conciencia del mencionado estado y cómo la actuación policial puede intensificarlo es fundamental para sacar conclusiones que puedan servir para perfeccionar la enseñanza policial y aportar instrumentos para modificar el cuadro actual. Desde ahí, la formación que reciben los nuevos miembros producida en consonancia con esos grupos puede ser un camino fructífero para todas las partes involucradas en el proceso formativo. Esa toma de posición también contribuye a la construcción de un debate en el que haya espacio para múltiples voces y perspectivas, favoreciendo la discusión sobre cómo las categorías pobreza, sistema sexo/género y etnia son manejadas en la formación y actuación de los cuerpos policiales y también en las políticas de seguridad pública.

## BIBLIOGRAFÍA

AMAR, Paul, “Táticas e termos de luta contra o racismo institucional nos setores de polícia e segurança” en RAMOS, Sílvia y MUSUMECI, Leonarda, *Elemento suspeito: abordagem policial e discriminação na cidade do Rio de Janeiro*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2005, pág. 230 a 281.

AMARAL FILHO, Nemezio, “Para além do conceito de “raça””, *IC Revista Científica de Informação y Comunicación*, Universidad de Sevilla, Sevilla, n.º 3, 2006, pág. 105 a 123.

ANG-LYGATE, Magdalene, “Trazar los espacios de la deslocalización. De la teorización de la diáspora”, en JABARDO, Mercedes (ed.), *Feminismos negros. Una antología*, Traficantes de Sueños, Madrid, pág. 291 a 313.

ANISTIA INTERNACIONAL, “*Você matou meu filho!*”: homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro”, Anistia Internacional, Rio de Janeiro, 2015.

AÑÓN ROIG, María José, “Discriminación racial: el racismo institucional desvelado” en ARCOS RAMÍREZ, Federico (ed.), *La justicia y los derechos en un mundo globalizado*, Dykinson, Madrid, 2016, pág. 133 a 166.

AROCENA, Felipe, “Brasil: de la democracia racial al estatuto de la igualdad racial”, *Argumentos*, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, vol. 20, n.º 55, 2007, pág. 97 a 115.

BALESTRERI, Ricardo Brisolla, *Direitos humanos: coisa de polícia*, Berthier, Passo Fundo, 1998.

BANUS, Lucia y GARRA, María Martina, “Recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito de la administración de justicia”, *Cartapacio de Derecho*, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, vol. 30, 2016, pág. 1 a 30.

BARRANCO AVILÉS, María del Carmen, *Diversidad de situaciones y universalidad de los derechos*, Dykinson, Madrid, 2011.

\_\_\_\_\_, “Derechos humanos y vulnerabilidad. Los ejemplos del sexismo y el edadismo” en BARRANCO AVILÉS, María del Carmen y CHURRUCA MUGURUZA (eds.), *Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 17 a 44.

BARRÈRE UNZUETA, María Ángeles, “Igualdad y discriminación positiva: Un esbozo de análisis teórico-conceptual”, *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, Universidad de Valencia, Valencia, n.º 9, 2003, pág. 1 a 27.

\_\_\_\_\_, “Martha Fineman y la igualdad jurídica: ¿Vulnerabilidad vs. Subordiscriminación?”, *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, Universidad de Valencia, Valencia, n.º 34, 2016, pág. 17 a 34.

BARROS, Geová da Silva, “Filtragem racial: a cor na seleção do suspeito”, *Revista Brasileira de Segurança Pública*, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo, vol. 2, n.º 1, 2008, pág. 134 a 155.

BELLO, Alvaro y RANGEL, Marta, *Etnicidad, "raza" y equidad en América Latina y el Caribe*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, 2000.

BENGOECHEA BARTOLOMÉ, Mercedes, "El lenguaje jurídico no sexista, principio fundamental del lenguaje jurídico modernizado del siglo XXI", *Anuario de la Facultad de Derecho*, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, n.º 4, 2011, pág. 15 a 26.

\_\_\_\_\_, “Lo femenino en la lengua sociedad, cambio, y resistencia normativa. Estado de la cuestión”, *Lenguaje y textos*, Universidad de Jaen, Jaen, n.º 27, julio 2008, pág. 37 a 68.

\_\_\_\_\_, “Cuerpos hablados, cuerpos negados y el fascinante devenir del género gramatical”, *Bulletin of Hispanic Studies*, Liverpool University Press, Liverpool, vol. 92, n.º 1, 2015, pág. 1 a 23.

BITTAR, Eduardo, “Educação e metodologia para os direitos humanos: cultura democrática, autonomia e ensino jurídico” en SILVEIRA, Rosa Maria Godoy (org.), *Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos*, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Brasília, 2007, pág. 313 a 334.

BOBBIO, Norberto, *Igualdad y libertad*, trad. de Pedro Aragón Rincón, Paidós, Barcelona, 1993.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, *Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos*, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Brasília, 2003.

\_\_\_\_\_, *Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos*, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Brasília, 2007.

BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, *Atuação Policial na Proteção dos Direitos Humanos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade*, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Brasília, 2013.

\_\_\_\_\_, *Matriz Curricular Nacional Para Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança Pública*, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Brasília, 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN), *Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN-dezembro 2014*, DEPEN, Brasília, 2016.

BUENO, Samira y HANASHIRO, Olaya (coords.), *Pesquisa de vitimização e percepção de risco entre profissionais do sistema de segurança pública*, Fórum Brasileiro de

Segurança Pública y Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas–FGV/EAESP, São Paulo, 2015.

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio, “Direitos humanos ou ‘privilégios de bandidos’”, *Novos Estudos Cebrap*, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, São Paulo, vol. 30, 1991, pág. 162 a 174.

CANDAU, Vera Maria Ferrão, “Educação em direitos humanos: questões pedagógicas” en BITTAR, Eduardo (org.), *Educação e metodologia para os direitos humanos*, Quartier Latin, São Paulo, 2008, pág. 285 a 298.

CASTEL, Robert, “De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso”, *Archipiélago*, n.º 21, Barcelona, 1995, pág. 27 a 36.

CHURRUCA MUGURUZA, Cristina, “Vulnerabilidad y protección en la acción humanitaria” en BARRANCO AVILÉS, María del Carmen y CHURRUCA MUGURUZA (eds.), *Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 45 a 70.

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR), *Discriminación y persecución por orientación sexual e identidad de género: el camino hacia una vida digna*, CEAR, Madrid, 2015.

COSTA PEREZ, Ana, *Buenas prácticas para el tratamiento del lenguaje en igualdad*, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2016.

CRENSHAW, Kimberle, “Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics”, *University of Chicago Legal Forum*, Universidad de Chicago, Chicago, 1989, pág. 139 a 167.

\_\_\_\_\_, “Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color”, *Stanford Law Review*, Universidad Stanford, Stanford, vol. 43, n.º 6, 1991, pág. 1241 a 1299.

CUENCA GÓMEZ, Patricia, “Los derechos humanos: la utopía de los excluidos” en RAMIRO AVILÉS, Miguel Ángel y CUENCA GÓMEZ, Patricia (eds.), *Los derechos humanos: La utopía de los excluidos*, Dykinson, Madrid, 2010, pág. 9 a 37.

DAVIS, Angela, *Mulheres, raça e classe*, trad. Heci Regina Candiani, Boitempo, São Paulo, 2016.

DE LUCAS, Javier, “La igualdad ante la ley” en GARZÓN VALDÉS, Ernesto y LAPORTA, Francisco, J. (eds.), *El derecho y la Justicia*, Trotta, Madrid, pág. 493 a 500.

DUBOIS, Marc, “Educação em Direitos Humanos para a Polícia” en CLAUDE, Richard P. y ANDREOPOULOS, George J. (orgs.), *Educação em direitos humanos para o século XXI*, trad. de Ana Luiza Pinheiro, Edusp/NEV, São Paulo, 2007, pág. 455 a 484.

FARIÑAS DULCE, María José, *Los derechos humanos: Desde la perspectiva sociológico-jurídica a la actitud postmoderna*, Dykinson, Madrid, 1997.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA, *¿Qué es el AVC? Introducción al Análisis de vulnerabilidad y capacidad*, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2006.

FERNÁNDEZ BUEY, Francisco, “Del encuentro entre las culturas” en *Ética y filosofía política*, Bellaterra, Barcelona, 2000, pág. 117 a 152.

FINEMAN, Martha Albertson, “The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition”, *Yale Journal of Law and Feminism*, Yale Law School, New Haven, vol. 20, n.º 1, 2008.

\_\_\_\_\_, “The vulnerable subject and the responsive state”, *Emory Law Journal*, Emory University School of Law, Atlanta, vol. 60, n.º 2, 2010, pág. 251 a 275.

\_\_\_\_\_, “Equality, Autonomy, and the Vulnerable Subject in Law and Politics” en FINEMAN, Martha Albertson y GREAR, Anna (eds.), *Vulnerability. Reflections on a new ethical foundation for law and politics*, Farnham/Burlington, Ashgate, 2013, pág. 13 a 27.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, *#APolíciaPrecisaFalarSobreEstupro. Percepção sobre violência sexual e atendimento a mulheres vítimas nas instituições policiais*, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo, 2016.

\_\_\_\_\_, *10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública*, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo, 2016.

FREIRE, Paulo, *Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido*, Paz e Terra, São Paulo, 1997.

\_\_\_\_\_, *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*, São Paulo, Paz e Terra, 2002.

FUENTES RODRÍGUEZ, Catalina y ALCAIDE LARA, Esperanza R., *Mecanismos lingüísticos de la persuasión: como convencer con palabras*, Arco/Libros, Madrid, 2002.

GARCÍA AÑÓN, José; BRADFORD, Ben; GARCÍA SÁEZ, José António, GASCÓN CUENCA, Andrés y LLORENTE FERRERES, Antoni, *Identificación policial por perfil étnico en España. Informe sobre experiencias y actitudes en relación con las actuaciones policiales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

GARCÍA LÓPEZ, Daniel J., “La intersexualidad en el discurso médico-jurídico”, *Eunomía*, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, n.º 8, 2015, pág. 54 a 70.

\_\_\_\_\_, “Biotecnologías del cuerpo intersexual: Una hipótesis para construir garantías jurídicas” en ROMAY COCA, Juan y VALERO MATAS, Jesús A. (coords.), *El hilo de Ariadna en la sociedad del conocimiento*, Ceasga, Soria, 2016, pág. 76 a 98.

GLASS, Ronald D., “Entendendo raça e racismo: por uma educação racialmente crítica e antirracista”, *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vol. 93, n.º 235, Brasília, 2012, pág. 883 a 913.

GIMÉNEZ GLÜCK, David, *Juicio de igualdad y Tribunal Constitucional*, Bosch, Barcelona, 2004.

GRACIA IBÁÑEZ, Jorge, “Autonomía y vulnerabilidad de las personas LGBT: orientación sexual, identidad de género y derechos humanos” en BARRANCO AVILÉS, María del Carmen y CHURRUCA MUGURUZA (eds.), *Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 101 a 138.

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo, “Democracia Racial: el ideal, el pacto y el mito”, *Estudios Sociológicos*, El Colegio de México, Ciudad de México, vol. 20, n.º 59, 2002, pág. 305 a 333.

GUIÑAZÚ, Claudio E., “Vulnerabilidad y derechos sociales. Una aproximación desde la bioética” en RIBOTTA, Silvina y ROSSETTI, Andrés (eds.), *Los derechos sociales en el siglo XXI. Un desafío clave para el derecho y la justicia*, Dykinson, Madrid, 2010.

\_\_\_\_\_, “Pobreza, vulnerabilidad y derechos humanos”, en AA. VV., *Lecturas sobre los derechos sociales, la igualdad y la justicia*, Advocatus, Córdoba, 2010, pág. 103 a 122.

HOOKS, bell, *Ain't I a woman: black women and feminism*, Pluto Press, London, 1982.

\_\_\_\_\_, “Mujeres negras: dar forma a la teoría feminista” en AA. VV., *Otras inapropiables*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2004, pág. 33 a 50.

\_\_\_\_\_, “Alisando nuestro pelo”, *La Gaceta de Cuba*, Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), La Habana, n.º 1, 2005, pág. 70 a 73.

HULL, Gloria T., PATRICIA, Bell Scott y SMITH, Barbara (eds.), *All the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave: Black women's studies*, The Feminist Press, New York, 1982.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), *Censo Demográfico 2010: Características gerais população, religião e pessoas com deficiência*, IBGE, Rio de Janeiro, 2010.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), “A promoção à igualdade racial em 2006 e o Programa de Combate ao Racismo Institucional” en JACCOUD, Luciana (org.), *A construção de uma política de promoção da igualdade racial: uma análise dos últimos vinte anos*, IPEA, Brasília, 2009, pág. 147 a 170.

\_\_\_\_\_, *Retrato das desigualdades de gênero e raça*, IPEA, Brasília, <http://www.ipea.gov.br/retrato>.



\_\_\_\_\_, *Comunicado n.º 91 - Dinâmica demográfica da população negra brasileira*, IPEA, Brasília, 2011.

\_\_\_\_\_, *Atlas da Violência 2016*, IPEA, Brasília, 2016.

JARES, Xesús, R., *Educación para la paz en tiempos difíciles*, Bakeaz, Bilbao, 2004.

KAUFMAN, Edy, “Educação em direitos humanos para executores da lei” en CLAUDE, Richard P. y ANDREPOULOS, George J. (orgs.), *Educação em direitos humanos para o século XXI*, trad. de Ana Luiza Pinheiro, Edusp/NEV, São Paulo, 2007, pág. 411 a 434.

LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, “Del femicidio al feminicidio”, *Desde el jardín de Freud*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, n.º 6, 2006, pág. 216 a 225.

\_\_\_\_\_, “Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres” en BULLEN, Margaret Louise y DÍEZ MINTEGUI, María Carmen (coords.), *Retos teóricos y nuevas prácticas*, Ankulegi, San Sebastián, 2008, pág. 209 a 240.

LAMUS CANAVATE, Doris, “Raza y etnia, sexo y género: El significado de la diferencia y el poder”, *Reflexión Política*, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, vol. 14, n.º 27, 2012, pág. 68 a 84.

LEMA AÑÓN, Carlos, “Derechos sociales, ¿para quién? Sobre la universalidad de los derechos sociales”, *Derechos y Libertades*, Dykinson, Madrid, n.º 22, enero 2010, pág. 179 a 203.

LOBO, Yolanda Pecharromán, “Victimología” en COLLADO MEDINA, José (coord.), *La investigación criminal y sus consecuencias jurídicas*, Dykinson, Madrid, 2010. pág. 365 a 392.

LÓPEZ VALERO, Amando y ENCABO FERNÁNDEZ, Eduardo, *Lenguaje, cultura y discriminación: la equidad comunicativa entre géneros*, Mágina, Granada, 2008.

LUCAS, Ana Sacristán, “En torno al curriculum oculto”, *Aldaba*, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Melilla, n.º 7, 1987, pág. 29 a 36.

LUNA, Florencia, “Elucidating the concept of vulnerability: layers not labels”, *International Journal of Feminist Approaches to Bioethics*, University of Toronto Press, Toronto, vol. 2, n.º 1, 2009, pág. 122 a 139.

\_\_\_\_\_, “Vulnerabilidad: un concepto muy útil. Abandonando los ‘corsets teóricos’”, *Revista Redbioética/UNESCO*, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, Montevideo, año 2, vol. 2, n.º 4, 2011, pág. 85 a 90.

MAQUIEIRA D’ANGELO, Virginia, “Género, diferencia y desigualdad” en BELTRÁN, Elena y MAQUIEIRA D’ANGELO, Virginia (eds.), *Feminismos: debates teóricos contemporáneos*, Alianza, Madrid, 2012, pág. 127 a 190.

MORONDO TARAMUNDI, Dolores, “Abuso y aporías en el conflicto de derechos a no sufrir discriminación”, *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, Universidad de Valencia, Valencia, n.º 28, 2013, pág. 170 a 189.

\_\_\_\_\_, “¿Un nuevo paradigma para la igualdad? La vulnerabilidad entre condición humana y situación de indefensión”, *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, Universidad de Valencia, Valencia, n.º 34, 2016, pág. 205 a 221.

NACIONES UNIDAS. ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES, *Vivir con el Riesgo. Informe mundial sobre iniciativas para la reducción de desastres*, Naciones Unidas EIRD, Ginebra, 2004.

NOGUEIRA, Oracy, “Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: sugestão de um quadro de referência para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil”, *Tempo social*, Universidade de São Paulo, São Paulo, vol. 19, n.º 1, junio de 2007, pág. 287 a 308.

NUCCI, Guilherme, *Bandido bom é bandido morto?*, 2 de septiembre de 2016, <http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/bandido-bom-e-bandido-morto>.

\_\_\_\_\_, *Direitos Humanos em favor de bandidos?*, 4 de abril de 2017, <http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/direitos-humanos-em-favor-de-bandidos>.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, *Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Panorama general*, Organización Panamericana de la Salud, Washington DC, 2013.

OSÓRIO, Rafael Guerreiro, “O sistema classificatório de “cor” ou “raça” do IBGE”, *Texto para discussão*, IPEA, Brasília, novembro 2003, [http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td\\_0996.pdf](http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0996.pdf).

OSPINA, Johanna, “La educación para la paz como propuesta ético-política de emancipación democrática. Origen, fundamentos y contenidos”, *Universitas*, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, n.º 11, enero 2010, pág. 93 a 125.

PAIXÃO, Marcelo J. P., *Desenvolvimento humano e relações raciais*, DP&A, Rio de Janeiro, 2003.

PERRENOUD, Philippe, *El oficio de alumno y el sentido del trabajo escolar*, Popular, Madrid, 2006.

PISARELLO, Gerardo y ASENS, Jaume, “Policía, seguridad y cultura antirrepresiva”, en *No hay derecho(s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis*, Icaria, Barcelona, 2011, pág. 43 a 66.

PITA, María Victoria, *Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial*, Editores del Puerto y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Buenos Aires, 2010.

PIZARRO, Roberto, *La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina*, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, 1995.

POSADA RAMOS, José Manuel; JIMÉNEZ VIÑUELA, María Asunción y RODRÍGUEZ DÍAZ, Francisco Javier, “Competencia y habilidades sociales: adaptación e intervención desde el ámbito escolar”, *Abaco*, Centro de Cultura y Ciencias Sociales (CEES), Gijón, n.º 21-22, 1999, pág. 13 a 20.

PRADO, Débora y SANEMATSU, Marisa (orgs.), *Feminicídio #InvisibilidadeMata*, Instituto Patrícia Galvão, São Paulo, 2017.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano 2015*, PNUD, Nueva York, 2015.

\_\_\_\_\_, *Informe sobre desarrollo humano 2016*, PNUD, Nueva York, 2016.

\_\_\_\_\_, *Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe. Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso*, PNUD, Nueva York, 2016.

QUEIROZ, Clara, “Eugenesia y racismo”, trad. de Carlos Lema Añón, en CAMBRÓN, Ascensión (coord.), *Entre el nacer y el morir*, Comares, Granada, 1998, pág. 95 a 116.

QUINTAS, Fátima (org.), *Mulher Negra: Preconceito, sexualidade e imaginário*, Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) y Massangana, Recife, 1995.

RAMOS, Sílvia y MUSUMECI, Leonarda, *Elemento suspeito: abordagem policial e discriminação na cidade do Rio de Janeiro*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2005.

RIBOTTA, Silvina, “Educación en y para los derechos humanos: la educación en convivencia mundial” en RIBOTTA, Silvina (ed.), *El desafío del siglo XXI. En Educación en derechos humanos: la asignatura pendiente*, Dykinson, 2006, pág. 153 a 194.

\_\_\_\_\_, “Pobreza, hambre y justicia en América Latina y el Caribe. Debatiendo sobre la justicia mientras 53 millones de latinoamericanos sufren hambre”, *Revista Electrónica Iberoamericana (REIB)*, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, vol. 4, n.º 1, 2010, pág. 144 a 180.

\_\_\_\_\_, “Grupos vulnerables” en DÍAZ BARRADO, Cástor y SALVADOR, Ana Manero (coords.), *Glosario de términos útiles para el análisis y estudio del Espacio Iberoamericano de Cooperación e Integración: Comercio, Cultura y Desarrollo*, Marcial Pons, Madrid, 2010.

\_\_\_\_\_, *Las desigualdades económicas en las teorías de la justicia. Pobreza, redistribución e injusticia social*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010.

\_\_\_\_\_, “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, pobreza y acceso a la justicia”, *Revista Electrónica*

*Iberoamericana (REIB)*, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, vol. 6, n.º 2, 2012, pág. 1 a 37.

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Alicia, “Prueba y proceso penal” en COLLADO MEDINA, José (coord.), *La investigación criminal y sus consecuencias jurídicas*, Dykinson, Madrid, 2010, pág. 273 a 333.

RUBIN, Gayle, “El tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo”, trad. de Stela Matrangelo, *Revista Nueva Antropología*, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, vol. 8, n.º 30, México, 1986, pág. 95 a 145.

SANTOS, Gislene Aparecida dos, “Nem crime, nem castigo: o racismo na percepção do judiciário e das vítimas de atos de discriminação”, *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, Universidade de São Paulo, São Paulo, n.º 62, 2015, pág. 184 a 207.

SÃO PAULO (ESTADO). POLÍCIA CIVIL, *Manual operacional do policial civil: doutrina, legislação, modelos*, Delegacia Geral de Polícia, São Paulo, 2007.

\_\_\_\_\_, *Manual de polícia judiciária: doutrina, modelos, legislação*, Delegacia Geral de Polícia, São Paulo, 2010.

SCHWARCZ, Lilia Moritz, *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930*, Companhia das Letras, São Paulo, 1993.

SEN, Amartya, “Sobre conceptos y medidas de pobreza”, *Revista Comercio Exterior*, vol. 42, n.º 4, 1992, en <http://tinyurl.com/ycrlaoh>.

SEVILLA MERINO, Julia, “Representación y lenguaje” en MONTESINOS SÁNCHEZ, María Nieves y ESQUEMBRE VALDÉS, María del Mar (coords.), *Feminismo/s*, Universidad de Alicante, Alicante, n.º 12, 2008, pág. 55 a 78.

SILVA, Aida Maria Monteiro y TAVARES, Celma, “Educação em direitos humanos no Brasil: contexto, processo de desenvolvimento, conquistas e limites”, *Educação*, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, vol. 36, n.º 1, 2013, pág. 50 a 58.

SOLBAKK, Jan Helge, “Vulnerabilidad: ¿un principio fútil o útil en la ética de la asistencia sanitaria?”, *Revista Redbioética/UNESCO*, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, Montevideo, año 2, vol. 1, n.º 3, 2011, pág. 89 a 101.

TRANSGENDER EUROPE (TGEU), *Trans Day of Visibility 2017 Press Release*, en <http://transrespect.org/en/tdov-2017-tmm-update>.

VAN DIJK, Teun A., “El estudio del discurso” en VAN DIJK, Teun A. (comp.), *El discurso como estructura y proceso*, Gedisa, Barcelona, 2001, pág. 21 a 65.

VÁZQUEZ ANDRADE, Piedad, *Teoría crítica de la educación y derechos humanos: lineamientos para una propuesta educativa*, Universidad de León, León, 2006.

WASSERMAN, Selma, *El estudio de casos como método de enseñanza*, Amorrortu, Buenos Aires, 1999.

WERNECK, Jurema, *Racismo institucional: uma abordagem conceitual*, Geledés, São Paulo, 2013.

YOUNG, Iris Marion, “Las cinco caras de la opresión” en *La justicia y la política de la diferencia*, trad. de Silvina Álvarez, Ediciones Cátedra, Madrid, 2000, pág. 71 a 113.

ZACCONE, Orlando, *Indignos de vida: a forma jurídica de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro*, Revan, Rio de Janeiro, 2015.

ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares, “Direitos humanos como campo de saberes e práticas culturais e educativas”, *Conferência Nacional: Educação, Globalização e Cidadania. Novas Perspectivas da Sociologia da Educação*, Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, 2008.

#### ARTICULOS DE PRENSA

BRANDT, Ricardo, “PM de Campinas determina abordagem de suspeitos de ‘cor parda e negra’”, *O Estado de São Paulo*, 23 de enero de 2013, <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pm-de-campinas-determina-abordagem-de-suspeitos-de-cor-parda-e-negra,987908>.

G1 SÃO PAULO, “Ex-escrivã que teve roupa tirada em delegacia é absolvida em SP”, *G1*, 27 de mayo de 2014, <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/05/ex-escriva-que-teve-roupa-tirada-em-delegacia-e-absolvida-em-sp.html>.

MARTÍN, María, “Un “saco” com quatro filhos”, *El País*, 18 de marzo de 2014, [http://brasil.elpais.com/brasil/2014/03/18/politica/1395103567\\_408081.html](http://brasil.elpais.com/brasil/2014/03/18/politica/1395103567_408081.html).

TOLEDO, Malu, “Nove morrem em ação do Bope; coronel diz que PM do Rio é ‘o melhor inseticida social’”, *A Folha de São Paulo*, 16 de abril de 2008, <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1604200827.htm>.

**ANEXO 1**

**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**DISCIPLINA “DIREITOS HUMANOS” (2008)**  
**CARGA HORÁRIA: 12 HORAS/AULA**

<b>CONTEÚDO</b>	
<b>1ª e 2ª aulas</b>	Identificação, integração e sondagem sobre a disciplina. Verificar a ideia que os alunos têm a respeito de Direitos Humanos e suas expectativas com relação à disciplina. Direito, segurança e Polícia. Contextualizar historicamente as questões relativas à segurança pública.
<b>3ª e 4ª aulas</b>	Documentos nacionais e internacionais de proteção aos Direitos Humanos. Apresentar a situação do país no contexto nacional e internacional (ONU-OEA) e mostrar a repercussão interna e externa com a adoção dos documentos nacionais e internacionais dos Direitos Humanos.
<b>5ª e 6ª aulas</b>	Democracia e paradigmas em segurança pública. Missão sociopedagógica da polícia. Discussão dos novos paradigmas em Segurança Pública. O papel da polícia no contexto social brasileiro. Analisar a estrutura da segurança pública no Brasil, fundamentos constitucionais e atribuições da polícia, bem como sua integração com outros órgãos formais e informais de controle social.
<b>7ª e 8ª aulas</b>	Violência: tipos e formas. Uso legítimo da força. Identificar as formas e tipos de violência mostrando as dificuldades do policial no centro dessa contradição, bem como examinar o contexto em que a violência ocorre, buscando ressaltar sua ineficácia no campo da persecução penal.
<b>9ª e 10ª aulas</b>	Identificar os instrumentos legais postos à disposição da polícia no combate à criminalidade. Fazer com que o policial compreenda que possui meio legais para exercer seu papel no sistema de combate à criminalidade.
<b>11ª e 12ª aulas</b>	Avaliação

**ANEXO 2**

**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**DISCIPLINA “DIREITOS HUMANOS: POLÍCIA CIVIL E A DIVERSIDADE”**  
**(2016)**  
**CARGA HORÁRIA: 24 HORAS/AULA**

<b>CONTEÚDO</b>	
<b>1ª e 2ª aulas</b>	Identificação, integração e sondagem sobre a disciplina. Direito, Segurança e Polícia.
<b>3ª e 4ª aulas</b>	Os fundamentos históricos e filosóficos dos Direitos Humanos: jusnaturalismo, contratualismo, liberalismo e democracia.
<b>5ª e 6ª aulas</b>	O constitucionalismo e as declarações americana e francesa. O Estado de Direito, evolução e vertentes: as gerações históricas dos Direitos Humanos. Diversidade étnico-racial.
<b>7ª e 8ª aulas</b>	Direito Internacional dos Direitos Humanos: evolução e princípios básicos. A Carta da ONU, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os Pactos e demais Convenções que receberam a adesão brasileira.
<b>9ª e 10ª aulas</b>	O Sistema Interamericano de proteção dos Direitos Humanos: a Convenção Americana dos Direitos Humanos (o Pacto de San José da Costa Rica). A hierarquia, a incorporação e o impacto dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no Direito Brasileiro. O Tribunal Penal Internacional. A Constituição Federal de 1988 e a Polícia Civil.
<b>11ª e 12ª aulas</b>	Orientação sexual e identidade de gênero. Entender o conceito de homofobia e transfobia. Direitos da população LGBT. População LGBT em situação de rua.
<b>13ª e 14ª aulas</b>	Desconstruindo estereótipos de masculinidade e feminilidade. Crimes de ódio.
<b>15ª e 16ª aulas</b>	Racismo no Brasil. História do Direito e relações raciais no Brasil (ações afirmativas).
<b>17ª e 18ª aulas</b>	Marco legal do combate ao racismo no Brasil e acesso à justiça. Prática jurídica no combate ao racismo.
<b>19ª e 20ª aulas</b>	Plano Nacional dos direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto n.º 7.612/2011). Conceito e espécies de deficiência.
<b>21ª e 22ª aulas</b>	Atividade “Polícia e a deficiência”. Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência. Acessibilidade nas delegacias de SP (Portaria DGP-56/2010)
<b>23ª e 24ª aulas</b>	Avaliação